

**Universidad Andina Simón Bolívar**

**Sede Ecuador**

**Área de Historia**

Maestría de Investigación en Historia

## **La Constitución de Cádiz**

**Otavalo 1812-1814**

Lenin Marcelo Guerra Pabón

Tutor: Santiago Cabrera Hanna

Quito, 2020

Trabajo almacenado en el Repositorio Institucional UASB-DIGITAL con licencia Creative Commons 4.0 Internacional		
	Reconocimiento de créditos de la obra	
	No comercial	
	Sin obras derivadas	
Para usar esta obra, deben respetarse los términos de esta licencia		



## **Cláusula de cesión de derecho de publicación**

Yo, Lenin Marcelo Guerra Pabón, autor de la tesis intitulada “La Constitución de Cádiz: Otavalo 1812-1814”, mediante el presente documento dejo constancia de que la obra es de mi exclusiva autoría y producción, que la he elaborado para cumplir con uno de los requisitos previos para la obtención del título de Magíster en Investigación en Historia en la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.

1. Cedo a la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, los derechos exclusivos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, durante 36 meses a partir de mi graduación, pudiendo por lo tanto la Universidad, utilizar y usar esta obra por cualquier medio conocido o por conocer, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio económico. Esta autorización incluye la reproducción total o parcial en los formatos virtual, electrónico, digital, óptico, como usos en red local y en internet.
2. Declaro que en caso de presentarse cualquier reclamación de parte de terceros respecto de los derechos de autor/a de la obra antes referida, yo asumiré toda responsabilidad frente a terceros y a la Universidad.
3. En esta fecha entrego a la Secretaría General, el ejemplar respectivo y sus anexos en formato impreso y digital o electrónico.

Fecha:

Firma: \_\_\_\_\_



## **Resumen**

La tesis de maestría estudia la recepción y aplicación de la Constitución de Cádiz en Otavalo. El propósito de esta investigación es analizar la experiencia electoral gaditana en el corregimiento de Otavalo entre los años 1812-1814. Dicha temporalidad corresponde al primer período constitucional gaditano. Por ello, una parte de esta investigación se centra en analizar las condiciones políticas en la Real Audiencia de Quito y en Otavalo, para comprender cómo se recibe la constitución en el corregimiento.

Bajo la política de pacificación de Montes, se estudian, por una parte, los rituales de publicación y jura de la constitución; por otra, la creación del ayuntamiento constitucional de Otavalo y el proceso electoral. Este análisis busca cotejar la normativa expresada en la constitución gaditana, en los decretos oficiales de las Cortes de Cádiz y en el plan de elecciones elaborado por órdenes de Montes con la aplicación práctica de la constitución en el corregimiento.

El análisis entre la normativa gaditana y los hechos llevados a cabo cobran especial interés bajo el concepto de asimilación. El momento gaditano en Otavalo se caracteriza por una convivencia entre el Antiguo régimen y la novedad política constitucional que posibilita Cádiz, en el cual conceptos como ciudadanía, territorio, representación, justicia y soberanía se adaptan a unas condiciones políticas y sociales locales.



A Gloria Piedad Pabón, mi madre.





## **Agradecimientos**

Mi gratitud a la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, al Área de Historia y todo su personal docente y administrativo por contribuir a mi formación profesional.

A Santiago Cabrera Hanna por su amistad, su paciencia, su comprensión y su tutoría que ha dado forma a esta investigación.

A Guillermo Bustos y Santiago Cabrera Hanna por ayudarme y animarme a investigar elecciones en el siglo XIX.

A Galaxis Borja por todo el acompañamiento prestado.

A todos mis compañeros de la Maestría de Investigación en Historia, en especial a Carlos Peña Moreno por sus consejos y ayuda.

A todos mis amigos que me apoyaron de una forma u otra en esta experiencia.

A mi familia por su apoyo incondicional.



## Tabla de contenidos

<b>Ilustraciones y Cuadros.....</b>	<b>13</b>
<b>Introducción .....</b>	<b>15</b>
<b>Capítulo primero .....</b>	<b>23</b>
<b>Constitucionalismo gaditano y estructuras locales de poder en Otavalo (1812).....</b>	<b>23</b>
1. Crisis, gobierno mixto e introducción de la Constitución de la monarquía española en Otavalo .....	24
2. Estructuras locales de poder en Otavalo .....	32
3. La composición del cabildo de Otavalo antes de las elecciones constitucionales 1811-1813 .....	34
4. Conflictos por el poder local al interior del corregimiento.....	42
5. El plan de elecciones: Situación de la Real Audiencia de Quito ante la promulgación y aplicación del plan de elecciones .....	43
6. El plan de elecciones de Toribio Montes en Otavalo.....	51
<b>Capítulo segundo .....</b>	<b>61</b>
<b>Erección del Ayuntamiento Constitucional de Otavalo y celebración de los comicios (1813).....</b>	<b>61</b>
1. Publicación y jura de la Constitución de Cádiz en el orbe hispano .....	62
2. Publicación de la Constitución gaditana en Otavalo .....	66
3. Juramento de la Constitución de Cádiz en Otavalo .....	70
4. Rupturas y continuidades en los rituales del momento gaditano.....	75
5. Elecciones gaditanas en Otavalo .....	79
6. El proceso electoral.....	84
7. Elección de diputados a Cortes y a la Diputación Provincial.....	91
<b>Conclusiones.....</b>	<b>95</b>
<b>Bibliografía.....</b>	<b>101</b>



## **Ilustraciones y Cuadros**

### **Ilustraciones**

Ilustración 1. Mapa del Corregimiento de Otavalo previo a la Constitución de Cádiz..	56
Ilustración 3. Mapa del Plan de elecciones de la Provincia de Quito de 1813 .....	82
Ilustración 4: Mapa del Partido de Otavalo de acuerdo con el Plan general de elecciones de 1813 .....	85
Ilustración 5: Mapa de resultados de las elecciones constitucionales de 1813 .....	88

### **Cuadros**

Cuadro 1. Publicación, jura y elecciones gaditanas en el territorio americano. ....	65
Cuadro 2. Electores y compromisarios establecidos de acuerdo con el Plan general de elecciones de 1813.....	82
Cuadro 3. Elección de diputados a Cortes de la Provincia de Quito .....	92
Cuadro 4. Elección de diputados a la Diputación provincial .....	92



## Introducción

El presente estudio analiza la experiencia electoral gaditana en Otavalo. La constitución de Cádiz, producto de la crisis política que atravesó la Monarquía española a raíz de las abdicaciones ilegítimas de Bayona, normativamente, permitió la creación de una nueva institucionalidad y la redefinición de la representación política.

En un marco más amplio, la recepción de Cádiz fue distinta en los diversos espacios hispánicos. Tanto en los pueblos peninsulares como en los americanos el momento gaditano se encuentra bien documentado. Cabe mencionar que cuando se hace referencia al momento gaditano, se alude no solo a un lapso de tiempo, sino a las diversas manifestaciones de la cultura política de los distintos espacios del orbe hispano, las cuales, constituyen una respuesta en clave constitucional a una crisis.<sup>1</sup>

En el caso de la Real Audiencia de Quito, debido a la experiencia juntera de 1809, este momento se torna mucho más complejo. A pesar de ello, la novedad constitucional se legitimó a través de rituales de antiguo régimen, los cuales, se llevaron a cabo conforme a lo establecido en la constitución española y los decretos de las Cortes. En Otavalo, al igual que otros espacios de la Audiencia, esta experiencia constituyó una novedad, no obstante, debe ser analizada desde su especificidad.

Esta investigación se inscribe dentro del enfoque de la Nueva Historia Política. En tal virtud, este trabajo analiza cómo se llevaron a cabo las elecciones constitucionales en Otavalo bajo las lógicas procesales del localismo, pero también como la expresión de pertenencia a un espacio territorial más amplio, en este caso, al de la Real Audiencia de Quito y al imperio español. Además, analiza el tema electoral como eje de una serie de elementos que se enlazan entre sí. Como diría Annino, el tema electoral conlleva al conocimiento de conexiones más profundas de las sociedades, que, incluso, van más allá de lo político.<sup>2</sup> El momento gaditano se inscribe dentro de las reflexiones de François Xavier Guerra, quien manifiesta que la Modernidad irrumpió en la Monarquía hispana de

---

<sup>1</sup> Bartolomé Clavero, "El Momento Constitucional de una República Católica (Cádiz entre Nueva Granada y Nueva Zelanda)" *Revista Española de Derecho Constitucional*, n.º 96 (2012): 329-44.

<sup>2</sup> Antonio Annino, "El voto y el siglo XIX desconocido", en *Silencios y disputas en la historia de Hispanoamérica* (Bogotá-Colombia: Universidad del Externado de Colombia, 2014). p. 1.

Antiguo régimen. Sus reflexiones parten desde el componente cultural y político como elementos en común de todo el Orbe hispano.<sup>3</sup>

En efecto, el propósito de esta investigación fue situar a Otavalo como parte de un espacio territorial más amplio. Otavalo fue un corregimiento, que pertenecía a la Real Audiencia de Quito, el cual, era un espacio territorial fluctuante entre los virreinos de Nueva Granada y el Perú, y que a su vez pertenecía al Imperio español. Además, para conocer de mejor forma el impacto de los postulados gaditanos se ha hecho énfasis en el estudio del poder local, ya que lo novedoso de Cádiz es el establecimiento, vía electoral, de ayuntamientos constitucionales, es decir, la creación de nuevos espacios de representación política, pero también que estos reemplacen a los cabildos de antiguo régimen.

La investigación parte de la interrogante acerca de ¿Cómo el corregimiento indígena de Otavalo se inscribe en el proceso constitucional gaditano y qué posibilidades brinda para la participación política de ese lugar? En ese sentido, el análisis de las condiciones políticas previas a la promulgación de la Constitución de Cádiz resulta esencial para comprender rupturas y continuidades que la carta gaditana posibilita tanto desde su marco normativo como de su práctica efectiva. El momento gaditano, tanto en los pueblos peninsulares como en los americanos, es sumamente complejo por los procesos políticos que desencadenan las abdicaciones de Bayona. Las estructuras políticas de los pueblos entran en crisis y, en el caso particular de Otavalo, se puede observar que se encuentra inevitablemente inmerso por la crisis política de Quito, lo cual, incidirá en sus estructuras de poder.

Desde la normativa gaditana, tanto los rituales de publicación y jura de la constitución, como los de los comicios constitucionales plantean nociones novedosas en torno a la ciudadanía, a la representación y al territorio. Por ello se analiza el plan de elecciones de Toribio Montes, el cual se articula tanto a la constitución española como a los decretos de Cortes, y su aplicación en los distintos espacios de la Audiencia. La investigación en el contexto de Otavalo busca estudiar estos rituales desde su especificidad, es decir, analizando los hechos desde la normativa y la práctica.

---

<sup>3</sup> François-Xavier Guerra, *Modernidad e Independencias, Ensayos sobre las revoluciones hispánicas* (Madrid: MAPFRE, 1992). p. 11-8.



El vacío historiográfico sobre las elecciones en la Real Audiencia de Quito ha sido, en parte, subsanado por los trabajos de Jaime Rodríguez,<sup>4</sup> Ana Luz Borrero<sup>5</sup> y Santiago Cabrera Hanna.<sup>6</sup> Los aportes de Rodríguez para el estudio de la independencia del reino de Quito se sitúan dentro de la tesis de las revoluciones hispánicas. Junto con François Xavier Guerra son los principales exponentes de esta línea historiográfica.

Rodríguez estudia la crisis de la monarquía española producto de la invasión francesa de 1808. A raíz de ese evento estudia la representación política, la constitución gaditana y su impacto en el reino de Quito, haciendo énfasis en el estudio de las elecciones populares producto del establecimiento de un gobierno constitucional. Destaca el papel de los indígenas, los cuales, con la constitución de Cádiz, se tornan en ciudadanos activos y protagonistas de la escena política.

Dentro del espacio de la Real Audiencia de Quito, para el caso cuencano, Ana Luz Borrero ha estudiado el momento gaditano entre 1809-1814, en el cual, destaca a los indígenas como sujetos políticos activos producto de la condición de ciudadanía otorgada por la constitución de Cádiz.<sup>7</sup> En Cuenca, de acuerdo con Borrero, la erección de ayuntamientos constitucionales en poblados indígenas fue numerosa, lo cual desencadenó conflictos por el poder local, los mismos que fueron resueltos por nuevos pactos entre antiguas autoridades y el gobierno. La novedad gaditana, no obstante, se vio marcada por la pervivencia del tributo indígena, el servicio personal y la mita.

En el caso del corregimiento de Loja, de acuerdo con Rodríguez, se puede observar que la constitución de Cádiz provoca disputas abiertas por el poder político entre autoridades locales de antiguo régimen y vecinos notables que, aprovechando la coyuntura política, buscaban hacerse del poder. En cuanto a la participación política de los indígenas en las elecciones, Rodríguez señala que fue determinante.<sup>8</sup>

Siguiendo esta línea historiográfica, Tatiana Hidrobo estudia, en parte, el momento gaditano en Manabí. Sostiene que con la constitución de Cádiz se redefinen las semánticas de soberanía y ciudadanía. En este sentido, se dan disputas y tensiones entre

---

<sup>4</sup> Jaime E. Rodríguez O., *La revolución política en la época de independencia: El Reino de Quito, 1808-1822* (Quito: Corporación Editora Nacional / UASB-E, 2007).

<sup>5</sup> Ana Luz Borrero, "El legado de Cádiz: ciudadanía y cultura política en la Gobernación de Cuenca, 1812-1814", *Procesos: revista ecuatoriana de historia*, n.º 39 (enero-junio 2014): 9-36.

<sup>6</sup> Santiago Cabrera Hanna, "Ciudadanía gaditana, tributación y territorialidad en la Audiencia de Quito: el censo constitucional de 1813 y el plan de elecciones", *Revista de Historia*, n.º 177, 2018, 1-22.

<sup>7</sup> Borrero, "El legado de Cádiz...".

<sup>8</sup> Rodríguez O., *La revolución política...*

los poderes de antiguo régimen con los constitucionales. Los vecinos de Manabí impusieron su ciudadanía al elegir sus autoridades locales.<sup>9</sup>

Por su parte Santiago Cabrera Hanna ha estudiado la ciudadanía gaditana. Para ello, parte del estudio del censo de 1813 y el plan de elecciones del mismo año. Sostiene que el basamento de la ciudadanía gaditana fue la administración de antiguo régimen y el conteo de población con fines tributarios. Este ejercicio permitió conocer la población políticamente habilitada para participar en los comicios gaditanos y en la posterior erección de ayuntamientos constitucionales. En ese sentido, y ante el reconocimiento constitucional de los indígenas como ciudadanos, el poder local atravesó procesos de desequilibrio que solo se entienden desde las lógicas locales.<sup>10</sup>

El componente territorial en el análisis de este trabajo se ha nutrido de los aportes de Federica Morelli, quien estudia el papel del cabildo durante la crisis del imperio español. Para ello, su análisis de los cuerpos intermedios parte del estudio del pactismo, del gobierno mixto, de las características fundamentales del municipio y sus transformaciones a raíz del reformismo borbónico, la crisis imperial y el constitucionalismo gaditano. Analiza el territorio quiteño en relación con la jurisdicción, justicia, representación y soberanía. En este orden de ideas, sostiene que el municipio gaditano no se estableció sobre una redefinición territorial, sino sobre los cuerpos territoriales de antiguo régimen. Los antiguos cabildos coloniales urbanos perdieron supremacía y los nuevos ayuntamientos constitucionales rurales se tornaron en auténticas instituciones de gobierno local.<sup>11</sup>

La mayoría de los trabajos referidos anteriormente son importantes porque estudian el momento gaditano en los diversos espacios de la Real Audiencia de Quito. Estos trabajos son fundamentales para el presente estudio, pues, como ya se mencionó, la experiencia juntera de 1809 desencadenó procesos políticos al interior de la Audiencia, en los cuales, Cuenca, como sede temporal de la Audiencia y Quito, como foco de insurgencia tienen una importante relación en esa coyuntura. Los sucesos, tanto de Quito como de Cuenca, inciden en Otavalo.

---

<sup>9</sup> Tatiana Hidrovo Quiñónez, "Los alucinados de Puerto Viejo. Nociones de soberanía y ciudadanía en Manabí (1812-1814)", *Procesos: revista ecuatoriana de historia*, n.º 26, 2007, 51-71.

<sup>10</sup> Cabrera Hanna, "Ciudadanía gaditana, tributación y territorialidad en la Audiencia de Quito: el censo constitucional de 1813 y el plan de elecciones".

<sup>11</sup> Federica Morelli, *De los Andes al Atlántico. Territorio, Constitución y ciudadanía en la crisis del Imperio español* (Quito: Corporación Editora Nacional / UASB-E, 2018).

Desde esta perspectiva, la presente investigación pretende, por una parte, complejizar el estudio de las prácticas electorales, las cuales, muchas veces, dan preeminencia a las normas por sobre las prácticas, o se da por hecho que la normativa se cumplió; por otra, pretende ser un aporte a la historiografía ecuatoriana al analizar en clave electoral un espacio no explorado antes, un corregimiento de predominante población indígena. La presente investigación pretende ir más allá de los alcances de los trabajos de Borrero y Guerra en materia electoral, los cuales constituyen un valioso aporte a la historiografía, no obstante, no analizan a profundidad las elecciones de ayuntamientos constitucionales, ni dan un espacio adecuado para el estudio de los rituales de publicación y jura de la Constitución española. De igual forma, se pretende retomar el estudio del plan de elecciones que plantea Cabrera Hanna, el cual es una pieza clave de la investigación, y profundizarlo en el contexto Otavaleño.<sup>12</sup>

Para el estudio tanto de los rituales de publicación y jura de la constitución de Cádiz como para el de las elecciones, se ha recurrido a investigaciones realizadas en otros espacios del orbe hispano. En cuanto a los rituales de publicación y jura en los pueblos peninsulares destaca el trabajo de Roberto López,<sup>13</sup> el cual, analiza los recursos simbólicos establecidos durante los rituales del momento gaditano y analiza sus significados como parte de un esfuerzo de pedagogía política para difundir y legitimar los postulados de la carta constitucional española. El análisis se alinea con las reflexiones de Carlos Garriga<sup>14</sup> y Marta Lorente,<sup>15</sup> quienes analizan minuciosamente la constitución de Cádiz y el juramento constitucional desde el punto de vista jurídico.

En el contexto de la América española, hay importantes trabajos tanto para Nueva España como para el Perú. Para el caso de Nueva España, Salvador Cárdenas Gutiérrez<sup>16</sup> ha estudiado tanto las juras reales de antiguo régimen como las juras del momento gaditano. Su investigación se centra en analizar este momento entre la tradición barroca

---

<sup>12</sup> Cabrera Hanna, "Ciudadanía gaditana, tributación y territorialidad en la Audiencia de Quito: el censo constitucional de 1813 y el plan de elecciones".

<sup>13</sup> Roberto J. López, «"Hablar a la imaginación". las ceremonias de proclamación y jura de la constitución de 1812 en el noroeste peninsular», *Obradoiro de Historia Moderna*, n.º 20, 2011, 141-173.

<sup>14</sup> Carlos Garriga, "Cabeza moderna, cuerpo gótico. La Constitución de Cádiz y el orden jurídico", en *Anuario de historia del derecho español*, tomo LXXXI (Madrid: AHDE, 2011), 99-163.

<sup>15</sup> Marta María Lorente Sariñena, "El Juramento Constitucional", en *Anuario de historia del derecho español: Los orígenes del constitucionalismo español entre 1808 y 1812*, vol. 65 (España: Ministerio de Justicia, 1995), 585-632.

<sup>16</sup> Salvador Cárdenas Gutiérrez, "De las juras reales al juramento constitucional: tradición e innovación en el ceremonial novohispano, 1812-1820", en *La supervivencia del derecho español en Hispanoamérica durante la época independiente*, n.º 2 (México: Instituto de investigaciones jurídicas-UNAM), 1997, 63-93.

y la innovación de las ceremonias, para poder preservar un orden jurídico y adoptar los cambios políticos de manera legítima. Para el caso peruano, F Javier Campos y Fernández de Sevilla<sup>17</sup> estudian la recepción de la constitución de Cádiz, las elecciones a Cortes y las ceremonias de juramento en varios pueblos del Perú.

Dentro del momento gaditano las fiestas constituyen elementos importantes de análisis. Para determinar lo novedoso de Cádiz en Otavalo se ha tomado como referencia el trabajo de Pablo Ortemberg,<sup>18</sup> quien estudia la transición de los rituales tanto de antiguo régimen como del momento gaditano para analizar la pedagogía política que subyace en la escenificación establecida para la publicación y juramento de la constitución española.

Para el estudio de los procesos electorales se ha hecho especial énfasis en las reflexiones de los trabajos de Antonio Annino, los cuales, analizan la cultura electoral desde una perspectiva compleja. En la cual, la tradición de antiguo régimen se asimila con la novedad política del momento gaditano, y este grado de asimilación y acomodación de los valores modernos tendrá siempre una respuesta desde las condiciones locales de recepción. Para ello Annino busca analizar las elecciones haciendo especial énfasis en los procesos, actores y valores locales por sobre los resultados electorales.<sup>19</sup>

Un aspecto fundamental del estudio de las elecciones es la nueva noción de ciudadanía que posibilita normativamente la constitución de Cádiz. Para ello los aportes de Tamar Herzog son fundamentales pues analizan los diversos aspectos de la vecindad tanto en América como en el territorio peninsular, sobre la cual se redefine la ciudadanía gaditana, pero su estudio no sólo se limita a esto, sino a cómo se estructura el poder local en torno a la vecindad.<sup>20</sup> El estudio del vecino como parte de una comunidad es de tal importancia que Morelli ha basado gran parte de su análisis sobre los municipios en los aportes de Herzog.<sup>21</sup>

En cuanto al estudio de las elecciones en pueblos indígenas, se parte de los estudios generales de Rodríguez, Cabrera Hanna y Marie Danielle Demélas, y se complementa con estudios más específicos de pueblos indígenas de otros espacios de la América española. El enfoque que esboza Demélas es interesante pues estudia el sufragio

---

<sup>17</sup> F. Javier Campos y Fernández de Sevilla, "La Constitución Española de 1812 y su recepción en Perú.", *Iustel*, 2012, [https://www.iustel.com/v2/revistas/detalle\\_revista.asp?id\\_noticia=412124&d=1](https://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=412124&d=1).

<sup>18</sup> Pablo Ortemberg, "Cádiz en Lima: De las fiestas absolutistas a las fiestas constitucionalistas en la fundación simbólica de una nueva era", *Historia*, n.º 45, (2012), 455-483.

<sup>19</sup> Annino, "El voto y el siglo XIX desconocido".

<sup>20</sup> Tamar Herzog, *Vecinos y extranjeros. Hacerse español en la Edad Moderna* (Madrid: Alianza, 2006).

<sup>21</sup> Federica Morelli, *Territorio o Nación: Reforma y disolución del espacio imperial en Ecuador, 1765-1830*. (Madrid: Centro de estudios constitucionales, 2005).

indígena de forma general en Quito y Perú. Plantea el ejercicio del sufragio indígena como un mecanismo de electorado cautivo, en la cual, los indígenas no votaron para defender sus intereses, sino más bien, el voto indígena fue controlado por los grupos de poder. El trabajo de Demélas es fundamental para nuestra investigación, pues presenta más dudas que certezas con respecto al sufragio indígena debido a las fuentes limitadas que se dispone para el estudio de las elecciones.<sup>22</sup>

Los trabajos de Gabriella Chiaramonti y Rocío Rebata Delgado son los más destacados para nuestra investigación. En este orden de ideas, Gabriella Chiaramonti<sup>23</sup> ha estudiado los primeros grados de las elecciones de ayuntamientos constitucionales y de diputados provinciales y cortes en los pueblos del Perú. Su análisis cobra importancia pues analiza las elecciones desde la normativa y la práctica, situando su estudio en la realidad concreta de los pueblos indígenas del Perú. Para ello, estudia los procesos de elección de compromisarios, alcaldes, regidores y procuradores síndicos.

Por su parte, Rocío Rebata Delgado ha estudiado las elecciones de Ayuntamientos en el Perú haciendo énfasis en los actos preelectorales, electorales y postelectorales.<sup>24</sup> Desde esta perspectiva de análisis, observa como las prácticas electorales de antiguo régimen tuvieron que asimilar la novedad gaditana. La junta preparatoria fue la responsable de la organización preelectoral, mientras que las juntas locales se harían cargo de los actos electorales y postelectorales. En este sentido, indica que las candidaturas, los procedimientos de votación y sus resultados fueron dejados a la discreción de cada localidad.

Partiendo del estudio de estos trabajos, los cuales, analizan las elecciones desde diferentes puntos de vista de acuerdo con la disponibilidad de sus fuentes, esta tesis reconstruye el proceso electoral en Otavalo entre 1812-1814. Teniendo en cuenta los aspectos comunes de los procesos electorales en los distintos espacios de la América española se ha llegado a entender el proceso desde su especificidad local.

Las fuentes de esta investigación son varios documentos oficiales de la época, es decir: la Constitución política de la Monarquía española, el Plan general de elecciones de toribio Montes, el acta de elecciones de antiguo régimen de Otavalo de 1812, el acta de

---

<sup>22</sup> Marie-Danielle Demélas, "El sufragio indígena en los Andes durante el período revolucionario (1810-1815): ¿electorado cautivo o guerra de castas?", *Elecciones*, n.º 7 (2007): 169-87.

<sup>23</sup> Gabriella Chiaramonti, "Ensayando nuevos derechos: elecciones gaditanas en los pueblos del Perú", en *En el nudo del imperio. Independencia y Democracia en el Perú* (Perú: Instituto de estudios peruanos, 2012).

<sup>24</sup> Rocío Rebata Delgado, "Elecciones de los ayuntamientos en el marco constitucional gaditano en el Perú, 1812-1814", *Elecciones*, n.º 17 (2018): 143-73.

elecciones constitucionales gaditanas de Otavalo de 1813, el testimonio de publicación y jura de la Constitución española en Otavalo y varios decretos emitidos por las Cortes extraordinarias, los cuales, se complementan con la carta constitucional española. La mayoría de estas fuentes se encuentran en el Archivo Nacional de Historia. También es importante mencionar el trabajo recopilatorio de actas republicanas del siglo XIX de Otavalo de Juan Freile Granizo, el cual, es un documento de dominio público. Es importante mencionar respecto al poder local que las fuentes encontradas no permiten reconstruirlo de una manera profunda, pero si se puede establecer una relación importante entre los actores del poder local y las élites de Quito. Además, al ser fuentes oficiales, los indígenas se hallan ausentes en la documentación.

La investigación se ha estructurado de la siguiente forma: en el primer capítulo se analiza la recepción de la crisis política hispánica en Otavalo y los posicionamientos políticos que se toman, desde la perspectiva del cabildo, ante la respuesta juntera de Quito a dicha crisis. Por una parte, se hace especial énfasis en la composición del cabildo de antiguo régimen y en las tensiones por el poder a raíz de los sucesos de la *Revolución política* en Quito. Por otra, se estudia el plan de elecciones y su aplicación en los distintos espacios de la Real Audiencia y en Otavalo.

Un elemento fundamental de esta investigación es la política de Toribio Montes. Ante la crisis política provocada por la experiencia juntera de Quito, Montes inicia su política de pacificación, la cual, posibilita la introducción y aplicación de la constitución de Cádiz

El segundo capítulo estudia las ceremonias de publicación y jura de la constitución gaditana en varios espacios del orbe hispano y en Otavalo, así como la celebración de los comicios constitucionales. Se estudia de manera específica la publicación y jura de la constitución española en Otavalo para establecer el grado de continuidad y ruptura en las ceremonias con respecto a las de antiguo régimen. Finalmente, se describe y analiza el proceso electoral gaditano haciendo énfasis en la comparación entre la normativa establecida por la propia constitución y los decretos de las Cortes extraordinarias y la práctica comicial.

## Capítulo primero

### Constitucionalismo gaditano y estructuras locales de poder en Otavalo (1812)

El propósito de este capítulo es analizar las condiciones políticas y sociales previas a la promulgación de la Constitución de Cádiz en Otavalo como punto de partida para contrastar las rupturas y continuidades que surgen en el contexto de crisis monárquica y pacificación de la Real Audiencia de Quito. Desde esta perspectiva, se pretende identificar las novedades que posibilita normativamente la carta gaditana en cuanto a nociones de ciudadanía, territorialidad y representación política.

El análisis parte del enfoque de poder local que usa Rosario Coronel para entender cómo funciona éste en el momento de la crisis imperial y la aplicación de la Constitución de Cádiz, el cual, se presenta no como algo homogéneo ni compacto, sino más bien, heterogéneo, diverso y configurado de acuerdo con las características del lugar. El poder local visto desde sus actores y posicionamientos políticos frente a coyunturas políticas complejas<sup>25</sup> Si bien existen diferentes estudios de la coyuntura gaditana en los diferentes espacios de la Audiencia<sup>26</sup>, no existen estudios, en el contexto ecuatoriano, sobre elecciones en un corregimiento de población mayoritariamente indígena, es por ello por lo que nos hemos propuesto esta investigación.

---

<sup>25</sup> Rosario Coronel Feijóo, *Poder local entre la colonia y la república. Riobamba, 1750-1812* (Quito: Corporación Editora Nacional, 2015).

<sup>26</sup> Entre los trabajos que estudian el período gaditano podemos mencionar los siguientes: Ana Luz Borrero, "El legado de Cádiz: ciudadanía y cultura política en la Gobernación de Cuenca, 1812-1814", *Procesos: revista ecuatoriana de historia*, n.º 39 (enero-junio 2014): 9-36; Tatiana Hidrovo Quiñónez, "Los alucinados de Puerto Viejo. Nociones de soberanía y ciudadanía en Manabí (1812-1814)", *Procesos: revista ecuatoriana de historia*, n.º 26, 2007, 51-71; Jaime E. Rodríguez O., *La revolución política en la época de independencia: El Reino de Quito, 1808-1822* (Quito: Corporación Editora Nacional / UASB-E, 2007); Federica Morelli, *De los Andes al Atlántico. Territorio, Constitución y ciudadanía en la crisis del Imperio español* (Quito: Corporación Editora Nacional / UASB-E, 2018); Federica Morelli, *Territorio o Nación: Reforma y disolución del espacio imperial en Ecuador, 1765-1830*. (Madrid: Centro de estudios constitucionales, 2005); Santiago Cabrera Hanna, "Ciudadanía gaditana, tributación y territorialidad en la Audiencia de Quito: el censo constitucional de 1813 y el plan de elecciones", *Revista de Historia*, n.º 177, 2018, 1-22; Rolando Castillo Quintana, "Las Cortes de Cádiz y las municipalidades de Centroamérica", en *Las Cortes de Cádiz y su influencia en Centroamérica Presentaciones para el "Diálogo sobre Integración Centroamericana"* (El Salvador: Sistema de la Integración Centroamericana, 2012); Gabriella Chiaramonti, "Ensayando nuevos derechos: elecciones gaditanas en los pueblos del Perú", en *En el nudo del imperio. Independencia y Democracia en el Perú* (Perú: Instituto de estudios peruanos, 2012); Antonio Annino, "La ruralización de lo político", en *La revolución novohispana, 1808-1821*, Historia Crítica de las Modernizaciones en México (México-España: Fondo de Cultura Económica, 2011).

Este capítulo se ha trabajado con fuentes primarias en su mayoría oficiales, como las actas del cabildo de Otavalo de 1812 y 1813, el Plan de Elecciones de Toribio Montes y la Constitución de Cádiz. El tratamiento minucioso de estos materiales nos ha permitido conocer la realidad local, la aplicación de la Constitución de Cádiz, los procedimientos electorales y las tensiones por el poder local en la Real Audiencia y en Otavalo.

El capítulo consta de dos partes: la primera hace referencia a la materialización de la Constitución gaditana en el contexto de crisis de la monarquía española y cómo se produjo la recepción de esta carta constitucional en la Real Audiencia de Quito, de manera específica en Otavalo; la segunda pretende analizar el Plan de Elecciones de Toribio Montes, el cual, surge ante la ausencia de una junta preparatoria en la Audiencia para llevar a cabo los designios de la carta gaditana.

## **1. Crisis, gobierno mixto e introducción de la Constitución de la monarquía española en Otavalo**

En mayo de 1808 se producen las abdicaciones de Bayona. La corona española pasa de la familia real borbónica a manos de Napoleón Bonaparte. Estas abdicaciones marcan el inicio de la crisis política hispánica, los levantamientos contra la ocupación francesa en la península y la formación de juntas fieles a Fernando VII en los distintos espacios del orbe hispano.<sup>27</sup>

En el caso de la Real Audiencia de Quito, se formaron dos juntas autónomas, una en 1809 y otra en 1810. En ambas Quito buscó asumir la representación y soberanía de todo el territorio de la Audiencia. La primera junta sería reprimida en poco tiempo, mientras que la segunda, con el reconocimiento de las ciudades de la sierra, establecería en 1812 el “Pacto solemne de sociedad y unión entre las provincias que forman el Estado de Quito.” Meses más tarde, Montes, nombrado presidente de la Audiencia, impondría el orden en el territorio por la fuerza y haría posible la promulgación y aplicación de la Constitución gaditana.<sup>28</sup>

En marzo de 1812 se promulga, en una etapa de crisis para la monarquía española y de pacificación para la Real Audiencia de Quito, la Constitución de Cádiz. La carta constitucional gaditana fue la respuesta a los sucesos de Bayona. Al hacerse efectivas las

---

<sup>27</sup> Guerra, *Modernidad e Independencias, Ensayos sobre las revoluciones hispánicas*. 116-120.

<sup>28</sup> Morelli, *De los Andes al Atlántico. Territorio, Constitución y ciudadanía en la crisis del Imperio español*. 78-83.



abdicaciones de Carlos IV y Fernando VII en favor de Napoleón Bonaparte y luego en su hermano José Bonaparte, se produjo una *vacatio regis* ilegítima que generó dos problemas: “quién debía gobernar interinamente el Imperio, y con base en qué legitimidad”.<sup>29</sup> Para François-Xavier Guerra las abdicaciones de Bayona no lograron romper el vínculo entre el rey y sus dominios, en tal virtud, el poder radicado en este vínculo, y ante la ausencia del rey, vuelve al pueblo, a su fuente primaria. De esta manera, las juntas se tornan en la máxima autoridad, pues éstas emanan del pueblo, y delegan, a su vez, dicha autoridad en la Suprema Junta Central Gubernativa del Reino.<sup>30</sup>

El problema de la ilegitimidad gubernativa que generaron las abdicaciones de Bayona puso al descubierto un problema aún mayor, el de la soberanía.

Desde el medioevo, pero sobre todo a partir del siglo XVI, todas las doctrinas regalistas tuvieron en común un principio irrenunciable: la distinción entre el rey como persona física y el rey como persona jurídica, entre el patrimonio privado del rey y el de la Corona, alienable el primero, inalienable el segundo como perteneciente al cargo y no a la persona.<sup>31</sup>

Al ceder el poder en la figura de Napoleón Bonaparte, sin ningún tipo de acuerdo, se violó la inalienabilidad de los reinos de la Corona española. Este hecho no pasó desapercibido para los intelectuales de la época; al contrario, reforzó la idea de un Estado mixto o modelo de gobierno mixto que alimentaba la idea de ilegitimidad de la *vacatio regis*. “Nunca antes de 1808 la idea del Estado mixto había sido tan aceptada y debatida públicamente no sólo en América sino incluso en España. Esta circunstancia no hubiera sido posible si la *vacatio regis* hubiera sido legítima, y la soberanía borbónica, sólida”.<sup>32</sup> En este orden de ideas, como señala Annino la ausencia del rey generó, por una parte, la retroversión de la soberanía real, y por otra, la dispersión de la soberanía expresada en los pueblos hacia las corporaciones territoriales de América. En este sentido, lo político se desplaza del área urbana a la rural como un proceso incontrolable.<sup>33</sup>

El gobierno Mixto tradicional era aquel que se componía del rey, los nobles y ciudades. Era de soberanía compartida entre el rey y el reino, y este último gozaba de

---

<sup>29</sup> Antonio Annino, "Soberanías en lucha", en *Silencios y disputas en la Historia de Hispanoamérica* (Bogotá: Taurus, 2014), 161.

<sup>30</sup> Guerra, *Modernidad e Independencias, Ensayos sobre las revoluciones hispánicas*, 40-8.

<sup>31</sup> Annino, «Soberanías en lucha», 161.

<sup>32</sup> *Ibíd.*, 162.

<sup>33</sup> Antonio Annino, "La ruralización de lo político", en *La revolución novohispana, 1808-1821*, Historia Crítica de las Modernizaciones en México (México-España: Fondo de Cultura Económica, 2011), 237-8.

representación a través de asambleas representativas.<sup>34</sup> En el caso de la América española y, de manera particular, la Real Audiencia de Quito, al no contar con asambleas representativas, el gobierno mixto se configuró de otra forma. “no se fundaba en la relación entre rey y cuerpos representativos, sino entre rey y funcionarios públicos criollos.”<sup>35</sup> Dicho de otra forma, los cuerpos intermedios que compartían la soberanía con el monarca eran los municipios o cabildos. El papel del cabildo fue fundamental pues, a través, de alcaldes ordinarios y regidores, se impartía justicia, se regulaba la vida urbana económica y se administraba las actividades económicas.<sup>36</sup> Otra función importante del cabildo era la representación del territorio. Las ciudades, a través de los cabildos, poseían el derecho de representación frente al monarca, estos, a su vez, abarcaban jurisdiccionalmente no solo el territorio de las grandes ciudades, sino de las villas y pueblos circundantes.

Ante la ausencia del rey, el modelo de gobierno mixto, de soberanía compartida y relación contractual entre el monarca y sus súbditos, sentó o pretendió sentar las bases de legitimidad de las juntas que gobernaban fieles a Fernando VII y rechazaban la soberanía ilegítima de José Bonaparte.

Con terminologías diversas y muchas veces confusas, todos apelaron a una relación pactista o contractual entre el rey y la sociedad. Gracias a ella, se afirmó en todo tipo de discursos -doctrinales, metafóricos o simbólicos- que sus vínculos recíprocos no podían ser rotos unilateralmente y que, si el rey faltaba, la soberanía volvía a la nación, al reino, a los pueblos.<sup>37</sup>

Para dar solución a la crisis de la monarquía, en septiembre de 1808 se creó la Junta Suprema Central Gubernativa del Reino. Esta Junta otorgó por primera vez a los territorios americanos representación e igualdad política. España y América compartirían un mismo gobierno. “Para seleccionar los representantes de los territorios americanos se celebraron elecciones. Las largas y complicadas elecciones para diputados a la Junta Central constituyeron un paso importante en la formación de un gobierno representativo moderno para toda la nación española, como era llamada ahora la Monarquía.”<sup>38</sup> Cabe

---

<sup>34</sup> Morelli, *De los Andes al Atlántico...*, 45-7.

<sup>35</sup> *Ibíd.*, 46.

<sup>36</sup> *Ibíd.*, 20-4.

<sup>37</sup> François-Xavier Guerra, "El ocaso de la monarquía hispánica: Revolución y desintegración", en *Inventando la nación. Iberoamérica siglo XIX*, ed. François-Xavier Guerra y Antonio Annino (México: Fondo de Cultura Económica, 2003), 128.

<sup>38</sup> Rodríguez O., *La revolución política en la época de independencia...*, 45.

mencionar que tanto la Real Audiencia de Quito como Charcas no tuvieron representación en la Junta Central.<sup>39</sup>

“De hecho, la retroversión de la soberanía había respetado las jerarquías territoriales de cada reino, legitimando con las elecciones a la Junta el principio de representación virtual de las provincias. Los cabildos cabecera eran así los representantes legítimos de todos los intereses de su ámbito territorial.”<sup>40</sup>

Ante el exitoso avance de las tropas francesas y el dominio de casi toda la península, la Junta Central se estableció en Cádiz. Luego pasó a la Isla León, la cual, estaba protegida por la armada británica. Desde allí, en enero de 1810, convocó a elecciones para la formación de Cortes nacionales. Una vez emitido el decreto comicial, se disolvió la Junta Central, dando paso al Consejo de Regencia como nuevo órgano gubernativo.<sup>41</sup>

Debido a que varias de las provincias de España bajo ocupación francesa no pudieron celebrar elecciones y debido a que la distancia retrasó la llegada de numerosos representantes americanos, la Regencia decretó que 53 suplentes, entre ellos 30 de América y Filipinas, fueran elegidos entre las personas residentes en Cádiz, procedentes de las provincias ocupadas y de las ultramarinas.<sup>42</sup>

De esta manera, establecidas las Cortes nacionales, se dio paso a los intensos debates que duraron aproximadamente dos años, entre 1810 y 1812. Durante este lapso, americanos y españoles construyeron juntos la constitución de Cádiz, la misma que dictaminó leyes para todos los territorios de la Nación española en igualdad de condiciones.

Con la constitución gaditana, por una parte, se daba solución al problema de la retroversión de la soberanía. Resolviendo, en primera instancia, el problema de representación de los territorios americanos. “La Nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona.”<sup>43</sup> Por otra parte, habilitando la soberanía de los nuevos órganos gubernativos que tomaron el poder en ausencia de Fernando VII, para finalmente, dar lugar a un gobierno representativo, legitimado a través de la celebración de elecciones, el gobierno de la Nación española.

---

<sup>39</sup> Ibíd, 45.

<sup>40</sup> Annino, "Soberanías en lucha", 165.

<sup>41</sup> Rodríguez Ordoñez, *La revolución política en la época de independencia...*, 44-6.

<sup>42</sup> Ibíd, 49.

<sup>43</sup> Constitución política de la monarquía española, título I, capítulo I, art 2.

“La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales.”<sup>44</sup>

En la Real Audiencia de Quito, los sucesos de Bayona y sus efectos inmediatos, agudizaron la tensión existente entre criollos y peninsulares, la cual, se expresaba, en esencia, en la pugna por ocupar cargos públicos.<sup>45</sup> Varios notables criollos habían preparado la erección de la junta de gobierno meses antes, y algunos como el marqués de Selva Alegre, Manuel Quiroga y Juan de Dios Morales, entre otros, fueron apresados y liberados tras negar la organización de la junta en marzo.<sup>46</sup> Meses después, el 09 de agosto de 1809, los notables criollos establecieron una junta de gobierno. Esta junta, cuyo presidente y vicepresidente fueron el marqués de Selva Alegre y el Obispo Cuero y Caicedo respectivamente, se proclamó fiel a Fernando VII. La junta entregó un escrito a Ruiz de Castilla que manifestaba lo siguiente:

Los leales habitantes de Quito, imitando su ejemplo y resueltos a conservar para su Rey legítimo y soberano señor esta parte de su reino, han establecido también una Junta Soberana en esta ciudad de San Francisco de Quito, a cuyo nombre y por orden de S. E. el Presidente, tengo a honra el comunicar a US. que han cesado las funciones de los miembros del antiguo gobierno<sup>47</sup>

Esta primera junta duraría pocos meses y al no recibir el apoyo de las otras provincias, fracasaría. Al contrario, los gobernadores de Cuenca, Popayán y Guayaquil se prepararon para sofocarla.<sup>48</sup> Es así como Ruiz de Castilla sería reincorporado a su cargo y los miembros, capturados. “El 4 de diciembre de 1809 las fuerzas del virrey del Perú arrestaron a los dirigentes de la junta, así como a los soldados que la respaldaron.”<sup>49</sup>

Los efectos de la junta de Quito de 1809 también hicieron eco en el virreinato de Nueva Granada. El Virrey Antonio Amar y Borbón consideró los sucesos de Quito como una expresión de infidencia y se rehusó a la creación de una junta en Santa Fe. De acuerdo con Martínez Garnica, la invitación por parte del marqués de Selva Alegre para formar una junta fue estudiada y finalmente rechazada por las autoridades de Santa Fe. A pesar

---

<sup>44</sup> Constitución política de la monarquía española, título I, capítulo I, art 3.

<sup>45</sup> Rodríguez Ordoñez, *La revolución política en la época de independencia...*, 70-3.

<sup>46</sup> Pedro Fermín Cevallos, "Resumen de la Historia de Ecuador. tomo III", Biblioteca virtual Miguel de Cervantes, 2004, <http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcj3929>, 222-72.

<sup>47</sup> *Ibíd.*, 237.

<sup>48</sup> *Ibíd.*, 251.

<sup>49</sup> Rodríguez Ordoñez, *La revolución política en la época de independencia...*, 73.

de ello, al año siguiente se produjo una verdadera explosión juntera en todo el territorio virreinal, la cual no pudo ser contenida por sus autoridades.<sup>50</sup>

Tras el fracaso de la primera junta, las rivalidades entre criollos y peninsulares se agudizaron. Se intentó liberar a los prisioneros el 2 de agosto de 1810 sin éxito alguno y este intento ocasionó una masacre en la cual fallecieron los presos y muchos civiles. En septiembre del mismo año el comisionado regio Carlos Montúfar llegó a Quito con la misión de instalar una junta subordinada al Consejo de Regencia.<sup>51</sup> Pocos días después, el 19 de septiembre, convocó junto con el presidente de la Audiencia a una junta de notables, la cual resolvió en primer lugar, reconocer la autoridad del Consejo de Regencia, y, en segundo lugar, la creación de una segunda junta sometida a dicha autoridad<sup>52</sup>

Al igual que en el pasado, las otras provincias del reino se rehusaron a reconocer la autoridad de la nueva Junta Superior de Quito. (...) La ciudad de Cuenca, en el sur, se convirtió en un centro de oposición realista a la Junta de Quito (...) Más tarde, en 1811, el general Joaquín Molina, quien había sido nombrado presidente de la Audiencia de Quito por el Consejo de Regencia en España, estableció un gobierno de oposición realista en Cuenca.<sup>53</sup>

Por orden del Consejo de Regencia no se ordenó la disolución de la segunda junta, de hecho, esta fue reconocida el 14 de mayo de 1811<sup>54</sup>, debido a que estaba en elaboración la Constitución de Cádiz, la cual, resolvería el problema de forma definitiva. De esta manera, la situación de la Real Audiencia se tornó incierta, Ruiz de Castilla y Joaquín Molina tuvieron que coexistir como presidentes de la Audiencia mientras se tomaban medidas definitivas.

En tal virtud, en el momento en que se promulga la carta constitucional gaditana, la Real Audiencia de Quito se encontraba dividida políticamente entre realistas e insurgentes, y estos últimos en Montufaristas y Sanchistas. Producto de la división de los insurgentes, se desconoció la autoridad de Ruiz de Castilla y se nombró al Obispo Cuero y Caicedo como presidente. Las nuevas autoridades convocaron a un congreso y acordaron desconocer la autoridad del Consejo de Regencia y establecer un gobierno

---

<sup>50</sup> Armando Martínez Garnica, "La explosión juntera en el Nuevo Reino de Granada", *Secuencia*, número conmemorativo, 2008, 125-30.

<sup>51</sup> Guadalupe Soasti Toscano, "La República en el período de 1810-1812. Una mirada de la "independencia" de Quito", *Afese*, 2009, 79.

<sup>52</sup> Rodríguez Ordoñez, *La revolución política en la época de independencia...*, 77-79.

<sup>53</sup> *Ibíd.*, 75.

<sup>54</sup> Soasti Toscano, "La República en el período de 1810-1812...", 82.

autónomo el 11 de diciembre de 1811.<sup>55</sup> Pero se mostraron favorables a las decisiones que se tomarían en Cádiz.<sup>56</sup>

Después de prolongadas discusiones, el 15 de febrero de 1812, el Congreso promulgó un Pacto Solemne de Sociedad y Unión entre las Provincias que forman el Estado de Quito, el cual "reconoce y reconocerá por Monarca al Señor Don Fernando séptimo, siempre que libre de la dominación francesa... [y] pueda reinar, sin perjuicio de esta Constitución".<sup>57</sup>

Una vez concluido el congreso, se evidenció nuevamente la división política de la junta. Por una parte, quienes apoyaban a Jacinto Sánchez de Orellana, Marqués de Villaorellana, desconocieron como legítimo el "Pacto Solemne de Sociedad y Unión entre las Provincias que forman el Estado de Quito", proclamado en febrero de 1812, y establecieron un gobierno propio en Latacunga. Por otra, los Montufaristas dieron su apoyo al pacto Solemne.<sup>58</sup> De esta manera la segunda Junta de Quito, fragmentada y debilitada políticamente, se mostró incapaz de mantener el poder ante la inminente llegada del nuevo presidente de la Audiencia Toribio Montes y el ejército realista.

El Virrey Abascal envió tropas lideradas por el coronel Arredondo. "como los quiteños insistieron en sus propósitos, envió un poderoso ejército de 2 mil soldados que se impuso en la acción de San Miguel. Este ejército ingresó a Quito el 4 de noviembre de 1812, fortaleciendo luego a las fuerzas realistas de Guayaquil, Cuenca y Popayán".<sup>59</sup> La noticia de la llegada de Montes a Quito dio paso a que la gran mayoría de la insurgencia abandonara la ciudad y se estableciera en Ibarra, lo cual le permitió tomar la ciudad sin mayor problema. "Toribio Montes luego de su triunfo dispuso que el coronel Juan de Sámano, se dirigiese hacia el norte y persiga a las tropas quiteñas hasta el aniquilamiento y destrucción total de los insurrectos."<sup>60</sup>

Los habitantes de la villa de Otavalo se vieron involucrados en la Revolución de Quito y en la batalla de San Antonio. En lo que respecta a la primera, el cacique de Otavalo, Tiburcio Cabezas Ango Inga Puento de Salazar, en 1810 era acusado de

---

<sup>55</sup> Rodríguez Ordoñez, *La revolución política en la época de independencia...*, 78.

<sup>56</sup> Soasti Toscano, «La República en el período de 1810-1812. Una mirada de la "independencia" de Quito», 83.

<sup>57</sup> Rodríguez Ordoñez, *La revolución política en la época de independencia: El Reino de Quito, 1808-1822*, 78.

<sup>58</sup> *Ibíd.*, 78-9.

<sup>59</sup> Juan Luis Orrego Penagos, "La contrarrevolución del Virrey Abascal: Lima, 1806-1816", *Procesos: Revista ecuatoriana de Historia*, n.º 29 (enero de 2009): 101.

<sup>60</sup> Rita Díaz Benalcázar, "Desequilibrio del Poder Local en la Transición de la Colonia a la República: el caso del Corregimiento de Otavalo, 1777-1818" (tesis de maestría, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2015), 51, <http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/5690/1/T2330-MH-Diaz-Desequilibrio.pdf>.

colaborar con indios para engrosar las filas del ejército patriota con el fin de enfrentar a los realistas de Pasto. “Las alianzas de Cabezas, previas a 1809, no eran con quienes optarían por el realismo sino con quienes optarían por la insurgencia y, en función de eso, el cacique adoptó un partido”.<sup>61</sup> Es claro que el cacique al tener fuertes nexos con los insurgentes brindaría su apoyo cuando estos lo necesitasen. Como señala Jairo Gutiérrez Ramos, Pasto nunca estuvo de acuerdo con el establecimiento de una junta en Quito y jamás se sometió a su autoridad. Por ello, tuvo que enfrentar la invasión y derrota frente al ejército quiteño. No obstante, ante la inminente llegada de las tropas peruanas, los quiteños abandonaron Pasto.<sup>62</sup>

En lo concerniente a la batalla de San Antonio, los indios de Otavalo tuvieron una importante participación dentro del bando insurgente. El testimonio de Don José Jaramillo y Ribadeneira, teniente corregidor y justicia mayor de Otavalo permite corroborar los hechos:

habiendo aecido en este lugar una horrorosa sublevación de indios con el destino de atacar las Tropas del Ejercito del Rey Nuestro Señor Don Fernando Séptimo, que venían reconquistando estas provincias rebeladas contra S.M. y sus legítimas autoridades(...) Proseidiendo perfidos, ingratos y desagradesidos a tan grande beneficio, fulminaron la tal sublevasion; de que resulto matarlos a diez soldados el dia jueves veinte y seis; y luego salir al camino ha sorprender los soldados, y armas que de auxilio pasaban al Pueblo de San Antonio el dia domingo, veinte y nueve del mes próximo pasado<sup>63</sup>

Pese a la participación de indígenas en los enfrentamientos. Los insurgentes no pudieron sostenerse frente al avance de las tropas realistas dirigidas por Juan de Sámano y fueron derrotados en el mes de diciembre. Por órdenes de Montes se ejecutó a varios oficiales con el objetivo de que sus muertes fuesen un castigo ejemplar para la población.<sup>64</sup> Finiquitada la batalla de San Antonio el nuevo presidente iniciaría su política de pacificación.

---

<sup>61</sup> Alexandra Rosita Sevilla Naranjo, «“Al mejor servicio del rey”. Indígenas realistas en la contrarrevolución quiteña, 1809-1814», *Procesos: Revista ecuatoriana de Historia*, n.º 43 (junio de 2016): 114.

<sup>62</sup> Jairo Gutiérrez Ramos, *Los indios de Pasto contra la República (1809-1824) las rebeliones antirrepublicanas de los indios de Pasto durante la guerra de independencia* (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2012), 166-173.

<sup>63</sup> Testimonios sobre los acontecimientos de la Batalla de Ibarra. Otavalo, 10/12/1812. Archivo Nacional Ecuador (ANE), Fondo Corte Suprema (FCS), serie indígenas, Caja 161, Expediente 17, f.1.

<sup>64</sup> Según Pedro Fermín Cevallos, “Sámano, luego que se vio libre de enemigos, empezó a seguirles en todas direcciones: tomó a Calderón, al francés Gullón que había servido de capitán, y al comandante Aguilar, y los fusiló en el acto.” \*

\*Pedro Fermín Cevallos, *Resumen de la Historia del Ecuador, desde su origen hasta 1845*, vol. III (Quito-Ecuador: Lima, 1870), 167.

“Montes implementó un modelo de pacificación práctico, donde primó el deseo de mantener la unidad de la nación y desterrar la sedición de la Audiencia.”<sup>65</sup> Las acciones de Montes estuvieron encaminadas a mantener el orden en la Real Audiencia, un orden que se había desmoronado por la erección de dos Juntas de Gobierno. Pese al castigo y violencia que supuso la entrada de Montes a Quito lo que primó fue el perdón.

Montes proclamó dos indultos a los insurgentes que habían abandonado Quito. El primero fue promulgado el 10 de noviembre, y el segundo, con mayor acogida que el primero, el 2 de enero de 1813.<sup>66</sup> Los indultos se establecieron para la gran mayoría de los insurgentes que se encontraban fuera de la ciudad. El perdón fue un elemento fundamental dentro de la política del nuevo presidente que, incluso condonó a los cabecillas de la revolución, quienes, al poco tiempo, colaboraron con el presidente.<sup>67</sup> Debido a este tipo de decisiones se ganó la oposición de varios realistas. A pesar de ello, no todos obtuvieron el perdón, algunos fueron desterrados, otros tuvieron que pagar donativos forzosos y, finalmente, unos cuantos fueron sometidos a la pena capital.<sup>68</sup> La gran mayoría se benefició de los indultos, pero también generó dos bandos dentro de la población, uno que apoyaba a Montes y otro que se le oponía.

## 2. Estructuras locales de poder en Otavalo

Estudiar las estructuras locales de poder en Otavalo durante el momento gaditano resulta complejo debido al desequilibrio político que atravesaba la Audiencia y el contexto de guerra del año 1812. El análisis de los actores que asumieron funciones públicas y ejercieron el poder local permite comprender las dinámicas del poder y sus relaciones con los demás espacios dentro de la Audiencia. En ese orden de ideas, cabe preguntarse ¿Cuáles eran las estructuras locales de poder en Otavalo durante esta crisis?

En 1812, el corregidor de Otavalo, máxima autoridad del corregimiento fue el coronel Don Manuel Zambrano Monteserrín. Este fue reemplazado por Don Juan

---

<sup>65</sup> Alexandra Rosita Sevilla Naranjo, *Fidelismo, realismo y contrarrevolución en la Audiencia de Quito* (Quito: FLACSO Ecuador - IPGH Ecuador, 2019), 263.

<sup>66</sup> Christiana Borchart de Moreno, "Palo y zanahoria. La política de Toribio Montes, presidente de la Audiencia de Quito", en *Abascal y la contra-independencia de América del Sur* (Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013), 503-35.

<sup>67</sup> *Ibíd*, 507-8.

<sup>68</sup> Por ejemplo, Christiana Borchart de Moreno menciona que Nicolás de la Peña y Rosa Zárate fueron ejecutados, decapitados y sus cabezas colgadas en la Plaza Grande, las cuales, permanecerían allí durante años, hasta 1822. Por orden de Cruz Mourgeón serían finalmente retiradas. Borchart de Moreno, 503-35.



Chiriboga como corregidor interino debido a que Manuel Zambrano fue nombrado diputado por la segunda junta de gobierno. En vista de la coyuntura política de 1812, el realista Don Rafael Maldonado y León, quien en 1810 fue nombrado corregidor, regresó a su antiguo cargo en reemplazo de Juan Chiriboga.<sup>69</sup>

El corregidor, como representante de la Corona, fue la máxima autoridad en Otavalo. Éste tenía fuertes vínculos con la élite local y se encargaba del cobro de impuestos.<sup>70</sup> Ejercía la función de Justicia Mayor y debía prestar juramento ante el cabildo quiteño antes de ejercer sus funciones. Entre 1812 y 1814 hubo cuatro corregidores distintos en Otavalo: Don Manuel Zambrano Monteserrín, Don Juan Chiriboga, Don Rafael Maldonado y León y Don José Xavier de Ascázubi y Matheu. Los dos primeros aliados con la insurgencia y los últimos realistas.

Manuel Zambrano, pariente de la familia Montúfar, fue colaborador de la primera junta de Quito, y al deponer esta al gobierno de Ruiz de Castilla, fue nombrado representante del barrio San Sebastián de Quito.<sup>71</sup> También formó parte de la segunda junta de Quito, de la invasión militar de Pasto y, en consecuencia, fue nombrado corregidor de Otavalo en 1812.<sup>72</sup> El realista Rafael Maldonado y León, miembro de la familia de los marqueses de Lises,<sup>73</sup> ocupó varios cargos en Quito en diferentes períodos y al ser derrotados los insurgentes quiteños en la batalla de Ibarra, fue nombrado corregidor de Otavalo en 1812 y 1813.<sup>74</sup> Xavier de Ascázubi y Matheu, miembro de la familia de los marqueses de Maenza,<sup>75</sup> abogado de la Audiencia, catedrático de la Universidad Santo Tomás de Quito, entre otros, fue nombrado corregidor de Otavalo en 1813 y, pese a formar parte la nobleza criolla quiteña, abrazó la causa realista.<sup>76</sup>

Como se puede observar la nobleza quiteña criolla tenía fuertes conexiones con Otavalo, ya sea a través de la ocupación de cargos públicos, pero también de la propiedad de bienes raíces rurales y de su residencia. “También el asiento de Otavalo y aun el pueblo de Tumbaviro tenían, según un informe coetáneo sobre el Corregimiento, un vecindario

---

<sup>69</sup> V.A. Jaramillo P, *Corregidores de Otavalo* (Otavalo-ecuador: Instituto Otavaleño de Antropología, 1972), 177.

<sup>70</sup> Coronel Feijóo, *Poder local entre la colonia y la república. Riobamba, 1750-1812*, 64-5.

<sup>71</sup> Christian Büschges, *Familia, honor y poder. La nobleza quiteña de Quito en la época colonial tardía (1765-1822)* (Quito: Fonsal, 2007), 252.

<sup>72</sup> Jaramillo P, *Corregidores de Otavalo*, 176.

<sup>73</sup> Büschges, *Familia, honor y poder...*, 289.

<sup>74</sup> Jaramillo P, *Corregidores de Otavalo*, 177-8.

<sup>75</sup> Büschges, *Familia, honor y poder...*, 290.

<sup>76</sup> Jaramillo P, *Corregidores de Otavalo*, 179-80.

noble, en el cual los nobles de Tumbaviro traen su origen de las familias ilustres de la ciudad de Quito.”<sup>77</sup>

Como señala Morelli, después de la revuelta de los barrios de Quito en 1765, los funcionarios españoles y las élites locales colaboraban entre sí. Surge, de manera evidente, una aristocracia criolla articulada al poder local, que, se suma a la existente aristocracia funcionaria española. Esta colaboración consistía en la pérdida parcial del poder político a favor de las élites criollas, a cambio de materializar la reforma fiscal en la Audiencia que beneficiaba el erario de la corona. Durante el gobierno de Ruiz de Castilla se aprecia un declive progresivo del poder político criollo. Este poder se retoma con los proyectos autonomistas de las juntas de gobierno, por ello, Don Manuel Zambrano Monteserrín sería nombrado corregidor de Otavalo en 1812 por la segunda junta de gobierno por participar en la Revolución quiteña.

Por disposición de Toribio Montes y ante la derrota de los quiteños, el realista Rafael Maldonado ordenó la publicación y jura de la Constitución española en Otavalo. La orden de publicación se efectuó mediante auto el 24 de julio de 1813 y la jura de la Constitución se señaló para el 30 de junio del mismo año.

Maldonado mandó que el pueblo previo juramento por Dios y por los Santos Evangelios, la guarde, cumpla y ejecute en todo. Don Francisco de la Coba Y Cárdenas, Escribano Público señalado por realista, recibió la orden de publicarla en los nueve pueblos del distrito: Cotacachi, Atuntaqui, San Pablo, Cayambe, Tabacundo, Urcuqui, Tocachi, Malchingui y Cangagua.<sup>78</sup>

A finales de 1813 Rafael Maldonado fue reemplazado por el quiteño Don José Xavier de Ascázubi y Matheu. El nuevo corregidor realista, médico y abogado de profesión, estuvo a cargo de la erección del cabildo constitucional conforme lo dictaminaban la Constitución y el Plan de Elecciones de Toribio Montes.

Luego del corregidor se encontraba el Justicia mayor. Don Mariano de Albuja y Arauz, quien ocupó ese cargo tres veces (1803, 1809, 1813). En 1812 fue nombrado Teniente Justicia Mayor y Capitán de la séptima compañía de milicias de infantería del rey.

### **3. La composición del cabildo de Otavalo antes de las elecciones constitucionales 1811-1813**

---

<sup>77</sup> Büschges, *Familia, honor y poder...*, 78.

<sup>78</sup> Jaramillo P, *Corregidores de Otavalo*, 179.

En el mes de diciembre de 1811, el asiento de Otavalo fue promovido a grado de villa por la junta suprema de gobierno.<sup>79</sup> En su calidad de asiento o grupo urbano de tercer nivel, no tenía derecho a un Cabildo, pero al ser ascendida a villa o grupo urbano de segundo nivel pudo establecer uno.

Al tener acceso a la erección de un cabildo, se celebraron elecciones el primero de enero de 1812.<sup>80</sup> Mediante la celebración de los actos comiciales, la villa de San Luis de Otavalo nombraba nuevas autoridades, de manera específica, dos alcaldes ordinarios. “El Cabildo ejercía sus poderes por la mediación de los alcaldes ordinarios, dos jueces que impartían la justicia ordinaria de primera instancia sobre el conjunto del distrito municipal.”<sup>81</sup> Los cabildantes eran en esencia autoridades judiciales. Se disponía que en cada villa debería haber dos alcaldes con jurisdicción civil y criminal.<sup>82</sup>

Entender la dinámica del poder ejercida por los alcaldes ordinarios dentro del cabildo antes de Cádiz es clave para comprender la diseminación de la representación política del territorio. Al ejercer la justicia los alcaldes acrecentaron paulatinamente su poder, pues controlaban la mano de obra indígena y las tierras.<sup>83</sup> Este proceso se cristalizó con la aplicación de las reformas borbónicas en la Audiencia, las cuales, en su intento centralizador del poder, disminuyeron parcialmente la autoridad del corregidor y aumentaron de manera considerable la de los alcaldes ordinarios y de los jueces pedáneos, en especial estos últimos, los cuales eran fundamentales en el ejercicio de la justicia por el conocimiento que poseían de la población. Tras los sucesos de Bayona, el poder local, ejercido a través de estas autoridades, cobra fuerza como representante del rey. La representación política se disemina y se hace visible en el territorio de cada localidad a través de la práctica de la justicia. En este sentido, para Annino, la justicia y lo político son elementos inseparables para entender a las sociedades del siglo XIX. Esta característica explica el por qué la monarquía gobernó y conservó sus colonias durante

---

<sup>79</sup> Iveline Le Bret, *La vida en Otavalo en el siglo XVIII*, Historia (Otavalo-Ecuador: Instituto Otavaleño de Antropología, 1981), 23.

<sup>80</sup> Acta de elección de Alcaldes ordinarios de la Villa de Otavalo, Juan Freile Granizo, *Resúmenes de actas republicanas Cabildo de Otavalo, siglo XIX*, Historia (Otavalo-Ecuador: Instituto Otavaleño de Antropología, 1980), 12-21.

<sup>81</sup> Morelli, *Territorio o Nación...*, 193.

<sup>82</sup> Nicolás Mejía Pedroza, "Organización del poder local. De la época colonial al siglo XIX", en *Balance y perspectivas del desarrollo municipal*, vol. VIII (México: Instituto Nacional de Administración Pública, 2013) 22-6.

<sup>83</sup> Morelli, *Territorio o Nación...*, 191-201.

tres siglos, y por qué tras las abdicaciones de Bayona, y la ausencia del monarca como legitimador de la política y la justicia, los reinos americanos se volvieron ingobernables.<sup>84</sup>

Resulta complejo analizar y esclarecer el problema territorial pues desde la propia constitución, y mucho antes, se presenta como una ambigüedad. “Se hará una división más conveniente del territorio español por una ley constitucional, luego que las circunstancias políticas de la Nación lo permitan.”<sup>85</sup> El momento gaditano es en extremo complejo y el problema territorial aún más. No obstante, la crisis pone de manifiesto dinámicas electorales que permiten, parcialmente, dar una explicación. Cuando los cabildos, a través del voto, debían elegir sus representantes a la Junta Central, estos representaban a un territorio, en teoría, en igualdad de condiciones a los peninsulares.<sup>86</sup> En este sentido, el cabildo como representante de un territorio por el ejercicio electoral que logra desplegar visibiliza un grado importante de autonomía con respecto a la Junta Central y con respecto a otros espacios dentro de la Audiencia. Es así como la elección de alcaldes ordinarios de 1812, en el contexto Otavaleño, se torna, fundamental. Ello explica porque la segunda junta quiteña, a diferencia de la primera, busca el reconocimiento político de Otavalo.

Cabe aclarar que el sistema electoral usado para la elección de estas autoridades es anterior al promulgado en la constitución gaditana, es decir, basado en procesos electorales corporativos. Con la carta constitucional de Cádiz, se promulga una nueva forma de representación y, por ende, una nueva forma de participación política y comicial. “Son ciudadanos aquellos españoles que por ambas líneas traen su origen de los dominios españoles de ambos hemisferios y están avecindados en cualquier pueblo de los mismos dominios”.<sup>87</sup> De esta manera, la constitución de Cádiz posibilita un nuevo modelo electoral con base en nuevas nociones de ciudadanía y representación política, las cuales, en el contexto otavaleño son determinantes.

“Antes de 1812, en España y en sus reinos había elecciones, pero aquellas eran mecanismos para representar a nobles, pueblos, gremios, órdenes religiosas, cofradías, militares, corporaciones de comerciantes... no para representar a este pueblo reconocido como soberano a partir de la revolución liberal.”<sup>88</sup> Los territorios americanos, bajo el

---

<sup>84</sup> Annino, "La ruralización de lo político", 236-7.

<sup>85</sup> Constitución política de la monarquía española, título II, capítulo I, art 11.

<sup>86</sup> Morelli, *Territorio o Nación...*, 213-6.

<sup>87</sup> Constitución política de la monarquía española, título II, capítulo IV, art 18.

<sup>88</sup> Fausta Gantús y Alicia Salmerón, "Un acercamiento a las elecciones del México del siglo XIX", *Historia y Memoria*, n.º 14 (junio de 2007), 32.

dominio colonial, estaban acostumbrados a procesos electorales corporativos, en los cuales, la idea de comunidad prevalecía por sobre la del individuo. Con la promulgación de la constitución de Cádiz, no se crea el voto, sino que se lo otorga por primera vez, de manera individual, a cada ciudadano en función de su pertenencia a una comunidad política. Sin embargo, el voto individualista nunca se dio durante el siglo XIX.<sup>89</sup> “Tenemos que mirar a esta terminología por lo que fue, es decir una convención lingüística y social que más que cortar cualquier lazo entre individuo y comunidad de pertenencia, nos señala el proyecto de ubicar al mismo individuo en una nueva posición frente al poder político”.<sup>90</sup>

Esta nueva noción de ciudadanía expresada por la constitución española pone de manifiesto la dimensión histórica del término ciudadanía. Morelli plantea dos tipos de ciudadanía, la vertical y la horizontal. La primera, es aquella que vincula al individuo con el rey, es decir, existe por la relación de lealtad que los ciudadanos demuestran al monarca. La segunda, que se manifiesta en la dimensión social y local de una comunidad política, y plantea el reconocimiento de la vecindad y ciudadanía por los miembros de la comunidad. La ciudadanía horizontal es más importante porque no necesita el reconocimiento de autoridades locales o superiores y porque para gozar de la ciudadanía vertical, era necesario ser considerado como tal por la comunidad. Durante el momento gaditano la ciudadanía se construyó en base a la vecindad, y la organización de los procesos electorales locales fueron manejados con el criterio de la comunidad.<sup>91</sup>

También es importante hacer referencia al voto de la mujer e hijos, el cual, en el antiguo régimen, era representado por el padre de familia. Es decir, había un voto expresado por este y que a su vez expresaba la voluntad de un núcleo familiar, pero también de la servidumbre que estaba bajo su tutela.<sup>92</sup> “La fuerza de la comunidad en el mundo hispánico del siglo XIX viene del hecho que este sujeto colectivo no fue excluido del voto sino incluido, y por ende legalmente y políticamente reconocido.”<sup>93</sup> En este sentido hay que ser cuidadosos, como señala Annino, hay que estudiar las elecciones

---

<sup>89</sup> Annino, "El voto y el siglo XIX desconocido", 5.

<sup>90</sup> *Ibíd.*, 5.

<sup>91</sup> Federica Morelli, “La ciudadanía entre historia política e historia conceptual”, video de YouTube, a partir de una ponencia presentada en la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Colombia, 2020, [https://www.youtube.com/watch?v=2g9QBaoOong&t=5179s&ab\\_channel=FacultaddeCienciasHumanas](https://www.youtube.com/watch?v=2g9QBaoOong&t=5179s&ab_channel=FacultaddeCienciasHumanas).

<sup>92</sup> Annino, "El voto y el siglo XIX desconocido", 5-6.

<sup>93</sup> *Ibíd.*, 14.

tratando de comprender el siglo XIX desconocido y no a través de estructuras mentales del siglo XX.<sup>94</sup>

Para entender el impacto de los procesos electorales gaditanos en Otavalo, es vital conocer el proceso electoral de antiguo régimen de 1812. Cabe preguntarnos ¿Cómo se procedía electoralmente antes de la Constitución de Cádiz? En primer lugar, las elecciones se llevaban a cabo en los primeros días del mes de enero de cada año porque las autoridades del cabildo duraban un año en sus funciones. Quienes estaban a la cabeza del proceso electoral, eran denominados comisionados, los cuales, seleccionaban a los electores. Después, los comisionados y electores, en presencia del escribano público, votaban y posesionaban a las nuevas autoridades. El proceso electoral siempre fue precedido de la celebración de una misa y del posterior juramento de los comisionados y electores.

Que vuestra merced con el Cura Vicario de esa Villa convoquen a seis sugetos de los principales de aquel lugar, que no tengan parentesco entre si dentro del quarto grado de consanguinidad, y segundo de afinidad, los quales impuestos del honor, y delicado encargo para que son llamados aseptando y Jurando prosedan a dar sus sufragios por dos sugetos de providad, Juicio, y a regulares proporciones para subsistir, para que exersan Jurisdicción, como Alcaldes ordinarios en haquella Villa y su distrito.<sup>95</sup>

Los comisionados del Supremo Consejo del Reino Don Mariano Albuja y Arauz, capitán de Milicias e Infantería y Teniente Justicia Mayor del distrito; el doctor Don José Duque de Abarca, abogado de los Reales consejos, Vicario Juez Eclesiástico del partido, y cura Párroco del señor del Jordán, fueron los encargados de nombrar a los electores.<sup>96</sup>

Para poder participar en un proceso electoral de antiguo régimen se tomaba en consideración la legislación hispánica que posibilitaba al vecino como el individuo que debía ocupar cargos públicos. “En efecto, el vecino era aquel que tenía derecho a participar en el cabildo abierto y a elegir a los alcaldes municipales y al procurador de la ciudad en las antiguas Cortes”<sup>97</sup> En tal virtud, las seis personas seleccionadas debían poseer el reconocimiento de vecindad. “El término vecino implicaba por tanto un reconocimiento social del individuo en su comunidad”.<sup>98</sup> “En América, aun cuando el concepto de vecindad estuviera en un principio vinculado a la fundación de las ciudades, había evolucionado a lo largo del tiempo y adquirido nuevas connotaciones, que

---

<sup>94</sup> Ibíd, 11.

<sup>95</sup> Acta de elección de Alcaldes ordinarios de la Villa de Otavalo, Freile Granizo, *Resúmenes de actas republicanas Cabildo de Otavalo, siglo XIX*, 13.

<sup>96</sup> Ibíd, 14-21.

<sup>97</sup> Morelli, *Territorio o Nación...*, 94-5.

<sup>98</sup> Ibíd, 97.

finalmente llevaron a asimilar el vecino al notable”.<sup>99</sup> De esta manera, se puede observar que el requisito para participar en los comicios electorales previos a la constitución de Cádiz era la vecindad, por ende, la participación política era sumamente restringida.

Si bien la celebración de elecciones para alcaldes ordinarios de 1812 fue algo novedoso en Otavalo, el procedimiento era bien conocido. Por ello, era común que los electos, tanto para el cargo de electores y comisionados, como para alcaldes ordinarios, debían ser vecinos y pertenecer a las familias nobles poderosas y honorables.

Hecha la votación en la que igualmente deberá vuestra merced y el Cura Vicario sufragar a presencia del Escribano del lugar, se hará Regulación de Botos, nominando aquellos en quienes resulte la pluralidad, y estentida la Acta, se dará cuenta a este Supremo Gobierno para que confirmados los Electos y observadas las demás Solemnidades de estilo, entren al libre ejercicio de los Empleos de Alcaldes ordinarios, trayendo el distintivo de bastón, o vara de Justicia.<sup>100</sup>

Como se puede observar, únicamente seis vecinos-electores y dos comisionados-electores votaban para seleccionar las nuevas autoridades. Los alcaldes ordinarios electos vía designación-elección ejercían sus funciones de manera inmediata.

En el caso de Otavalo en 1812, el cargo de elector se depositó en: Don Luis Boada, alguacil mayor del distrito; Don Manuel Solar, administrador de Rentas Reales Unidas; Don José Vinuesa, Capitán de Caballería de Milicias; Don Mariano Paredes, Don Toribio Páez de Trastamara y Don Antonio de Andrade. A pesar de ser considerado como vocal elector y ser estimado como uno de los personajes más importantes de la villa de Otavalo, Don José Vinuesa, capitán de Caballería, se negó al encargo en los comicios. En su lugar, se convocó a Nicolás Terán y Manosalvas, vecino de honor y probidad, para completar el cuerpo de electores de alcaldes.<sup>101</sup>

Todos ellos se reunieron en la casa de Don Mariano Albuja y Arauz. Una vez allí, los comisionados, es decir, Don Mariano Albuja y Arauz y el cura Párroco del señor del Jordán procedieron con los comicios. Este iniciaba con la celebración de una misa del Espíritu Santo. En este caso, la misa se celebró en la parroquia del Señor del Jordán.<sup>102</sup> Posteriormente los ocho encargados se reunirían para tomarles el respectivo juramento y dar continuidad al proceso electoral.

---

<sup>99</sup> *Ibíd*, 94.

<sup>100</sup> Acta de elección de Alcaldes ordinarios de la Villa de Otavalo, Freile Granizo, *Resúmenes de actas republicanas Cabildo de Otavalo, siglo XIX*, 13.

<sup>101</sup> *Ibíd*, 14-21.

<sup>102</sup> *Ibíd*, 14-21.

Los Referidos Señores comisionados les recibieron Juramento por Dios nuestro Señor y una señal de cruz, diciendo que aceptaran gustosamente el Noble y onroso encargo que se les hacía, y que usarían, fiel y legalmente el nombramiento hecho en ellos desempeñándolo con todo honor, y a la condición de dicho juramento, añadieron así lo juramos Amén y lo firmaron.<sup>103</sup>

Una vez realizada la votación se procedió al escrutinio de votos. Los resultados de las elecciones fueron los siguientes: para alcaldes de primer voto, Don Toribio Páez y Trastamara, siete votos, y Don Joaquín Rivadeneyra y Cuello, uno. Para alcaldes de segundo voto, Don José de Andrade y Luna, ocho votos. De esta manera, se eligió y posesionó a Don Toribio Páez y Trastamara y a Don José de Andrade y Luna como alcaldes de primer y segundo voto, respectivamente.<sup>104</sup> Finalizadas las elecciones, se procedió a firmar el acta, para dar constancia del correcto cumplimiento de la ley, en presencia del escribano público.

Una vez descrito el proceso electoral previo al constitucionalismo gaditano y ubicado a los protagonistas de los comicios de 1812, cabe preguntarse ¿quiénes eran estos personajes?

Mariano Albuja y Arauz, ocupó cargos importantes tanto en la Audiencia como en el cabildo de Quito, en gobernaciones y corregimientos. Ocupó el cargo de corregidor de Otavalo en dos ocasiones (1803, 1809) y el cargo de secretario del Cabildo en 1814.<sup>105</sup> Pese a que en 1809 se opuso a la primera junta quiteña,<sup>106</sup> en 1812 es reconocido como comisionado de Otavalo por la autoridad de la segunda junta quiteña y llevó a cabo las elecciones de alcaldes ordinarios. Luis Boada, ocupó el cargo de alguacil en 1800 y en 1812,<sup>107</sup> en el mismo año es designado vocal elector. Manuel Solar, fue contador en el gobierno del corregidor Francisco Xavier Merizalde y Santistevan (1779-1784),<sup>108</sup> se opuso a la primera junta quiteña en 1809,<sup>109</sup> y para 1812 figura como administrador de rentas reales y vocal elector. Mariano Paredes, nombrado elector en 1812, el mismo año participó en la batalla de Ibarra en favor de la causa quiteña.<sup>110</sup> Toribio Páez, poderoso terrateniente con propiedades tanto en Ibarra como en Latacunga,<sup>111</sup> en 1812 es nombrado

---

<sup>103</sup> Ibíd, 14-21.

<sup>104</sup> Ibíd, 14-21.

<sup>105</sup> Jaramillo P, *Corregidores de Otavalo*, 153.

<sup>106</sup> Díaz Benalcázar, "Desequilibrio del Poder Local en la Transición de la Colonia a la República: el caso del Corregimiento de Otavalo, 1777-1818", 47-8.

<sup>107</sup> Ibíd, 49.

<sup>108</sup> Jaramillo P, *Corregidores de Otavalo*, 147-51.

<sup>109</sup> Díaz Benalcázar, "Desequilibrio del Poder Local en la Transición de la Colonia a la República: el caso del Corregimiento de Otavalo, 1777-1818", 47.

<sup>110</sup> Ibíd, 54-9.

<sup>111</sup> Ibíd, 67.



elector y electo alcalde de primer voto y en 1816 ocuparía el cargo de corregidor de Otavalo.<sup>112</sup> Antonio Andrade quien fue contador de Riobamba,<sup>113</sup> para 1812 es designado vocal elector. José de Andrade, quien participó en la batalla de Ibarra,<sup>114</sup> para 1812 es electo como alcalde ordinario de segundo voto.

Como se puede observar, el poder local en Otavalo estaba concentrado en un pequeño grupo de personas que ya venían desempeñando cargos públicos en Otavalo, pero también en otros espacios de la Audiencia. Muchos de ellos se opusieron a la primera junta de Quito, pero al poco tiempo, durante el tiempo que gobernó la segunda junta quiteña, vemos que esta vez la apoyan, no solo políticamente, sino militarmente como demuestra el apoyo en la batalla de Ibarra. Como ya se mencionó, muchos personajes que ocuparon cargos públicos tenían una relación importante con las familias nobles de Quito, sin embargo, esa relación no fue incondicional, hubo posturas políticas a nivel local más importantes. El problema de la representación política y la soberanía territorial es fundamental para comprender esta dinámica rechazo-apoyo a las juntas quiteñas. Estas tensiones y negociaciones se visibilizan una vez más cuando Montes pacifica el territorio. Si bien el cargo de corregidor fue políticamente inestable porque expresaba una relación directa con la autoridad emanada de las juntas quiteñas y la de Toribio Montes. A nivel local, fue distinto, pues las autoridades locales fueron las mismas antes, durante y después de la crisis política de la Audiencia.

Otro actor importante que formaba parte del cabildo era el alguacil mayor. El alguacil tenía la función de vigilar por las noches los alrededores de la villa, especialmente lugares públicos, y tenía la obligación de detener a los delincuentes.<sup>115</sup> Para el año de 1812 esta responsabilidad cayó en manos de Luis Boada.

Además de los ya mencionados, Otavalo contaba con otros cargos públicos, desempeñados por las siguientes personas: Señor doctor Don José duque de Abarca, vicario juez eclesiástico del partido, y cura de la parroquia del señor del Jordán; Manuel Solar, administrador de Rentas Reales Unidas; Don José Vinuesa, capitán de caballería de milicias; Francisco de Grijalva, escribano público y de Real Hacienda, entre otros.<sup>116</sup>

---

<sup>112</sup> Jaramillo P, *Corregidores de Otavalo*, 180-1.

<sup>113</sup> Armando Martínez Garnica, *Quién es quién en 1810. Guía de forasteros del Virreinato de Santa Fe* (Colombia: Universidad del Rosario, 2010), 235.

<sup>114</sup> Díaz Benalcázar, "Desequilibrio del Poder Local en la Transición de la Colonia a la República: el caso del Corregimiento de Otavalo, 1777-1818", 67.

<sup>115</sup> Mejía Pedroza, "Organización del poder local. De la época colonial al siglo XIX", 23.

<sup>116</sup> Díaz Benalcázar, "Desequilibrio del Poder Local en la Transición de la Colonia a la República: el caso del Corregimiento de Otavalo, 1777-1818", 49-50.

#### 4. Conflictos por el poder local al interior del corregimiento

El cabildo y el cacicazgo se han concebido como dos polos opuestos en constante confrontación por el poder.<sup>117</sup> Don Esteban Tiburcio Cabezas Pillas Inga Ango de Salazar, cacique de Otavalo entre 1789 y 1819, en el desempeño de sus funciones enfrentó conflictos contra Don Joaquín Arteta Corregidor, Justicia Mayor, Juez Conservador de Rentas Reales y Administrador de Tributos de Otavalo y varios funcionarios públicos afines al corregidor. El cacique fue acusado de no cumplir con el cobro del tributo, de faltar el respeto a las autoridades, de intentar sublevar a los indios, entre otras causas. Estas denuncias lo llevaron a enfrentar la justicia y ganar varios juicios en contra de sus acusadores.<sup>118</sup>

El cacique de Otavalo también tuvo enemistad con ciertos curas de varias parroquias. Entre ellos: el de Cotacachi y Urcuquí, quienes abusaban de los indios haciéndoles trabajar en exceso y en días de doctrina; y con el vicario de Otavalo, el cual pretendía monopolizar el poder al nombrar *motu proprio* alcaldes y fiscales. De acuerdo con los testimonios de los testigos, el cacique era justo en el desempeño de sus funciones y defendía a los indios de los abusos por parte de las autoridades locales.<sup>119</sup>

Como se puede observar, el cacique Tiburcio Cabezas no tenía buena relación con las autoridades locales de Otavalo. Lo que a los ojos de estas autoridades sería una mala administración por parte del cacique, a los ojos de los indígenas sería buena, pues los defendía de los abusos y excesos. Como ya se mencionó, Cabezas ganó varios juicios contra las autoridades realistas, esto demuestra que era un estorbo para las autoridades locales y sus intereses.

Pese a que Tiburcio Cabezas, junto a las autoridades y vecinos más importantes de Otavalo, se opusieron formalmente por escrito a la primera junta de Quito.<sup>120</sup> Vemos que en 1810 fue acusado por apoyarla. “En el año de 1810 Tiburcio Cabezas Ango Inga Puento de Salazar, cacique de Otavalo, estaba preso junto a los demás implicados en la Revolución de Quito del año anterior. El fiscal le acusaba de haber dado 14.000 indios de

---

<sup>117</sup> Patricia Cruz Pazos, "Cabildos y cacicazgos: alianza y confrontación en los pueblos de indios novohispanos", *Revista Española de Antropología Americana*, n.º 34 (2004), 149-62.

<sup>118</sup> Díaz Benalcázar, "Desequilibrio del Poder Local en la Transición de la Colonia a la República: el caso del Corregimiento de Otavalo, 1777-1818", 74-82.

<sup>119</sup> Otavalo, 1800. Archivo Nacional del Ecuador (ANE), Fondo Corte Suprema (FCS), Serie Indígenas, Caja 147, Expediente 14, f., 3-4.

<sup>120</sup> Díaz Benalcázar, "Desequilibrio del Poder Local en la Transición de la Colonia a la República: el caso del Corregimiento de Otavalo, 1777-1818", 47.

su jurisdicción por pedido de Francisco de Ascázubi para ir contra la ciudad de Pasto”.<sup>121</sup> El cacique, por una parte, reconoció haber ayudado a Francisco de Ascázubi, pero solo con dos o tres indios para su viaje a Pasto. Por otro, Cabezas declaró haber ofrecido siete mil indios para la defensa del rey. Esta contradicción obedece a la experiencia que el cacique tenía frente a este tipo de acusaciones, por lo cual era hábil para obtener su libertad frente a la justicia.<sup>122</sup>

En este orden de ideas, resulta comprensible que Cabezas como autoridad de Otavalo, se haya pronunciado, de manera formal junto con las autoridades locales, en contra de la primera junta. No obstante, en realidad, se haya aliado con los insurgentes pues mantenía buena relación con José Sánchez de Orellana, cuyo padre era miembro de la primera junta quiteña.<sup>123</sup>

En noviembre de 1812, Toribio Montes pone en marcha su política de castigo y pacificación, la cual, en términos generales, condenaba a unos pocos y perdonaba a la mayoría de los insurgentes, y a sorpresa de muchos inclusive haciendo oídos sordos a los realistas que se le oponían. Se puede deducir que Cabezas, de una manera u otra, fue parte de aquel grupo de personas que se vieron incluidos en las acciones de la primera junta, sin embargo, ante la necesidad de calmar los ánimos en La Audiencia, Montes los perdonó.

En el caso de Tiburcio Cabezas, cacique de Otavalo, vemos que supo mantenerse dentro de las estructuras de poder. Su cargo no fue ocupado por otra persona pese a aliarse con la insurgencia, sino hasta el año de 1819, en el cual, sería reemplazado por José María Cabezas. Lo que demuestra que muchos de los insurgentes que participaron en la primera junta continuaron ejerciendo el poder bajo el nuevo régimen realista de Montes. Cabe mencionar que la política pacifista de Montes fue fundamental pues logró calmar los ánimos en la Audiencia y permitió la introducción y aplicación de la Constitución de Cádiz.

## **5. El plan de elecciones: Situación de la Real Audiencia de Quito ante la promulgación y aplicación del plan de elecciones**

---

<sup>121</sup> Sevilla Naranjo, «“Al mejor servicio del rey”. Indígenas realistas en la contrarrevolución quiteña, 1809-1814», 113.

<sup>122</sup> *Ibíd.*, 113.

<sup>123</sup> *Ibíd.*, 114.

En términos administrativos y jurisdiccionales, la situación de la Real Audiencia de Quito en la coyuntura gaditana es compleja. Esto obedece a los cambios administrativos iniciados desde el nuevo régimen borbónico, los cuales se alinearon con una realidad distinta en lo económico y social con respecto a los siglos anteriores de vida colonial.

En la primera mitad del siglo XVIII la Real Audiencia de Quito, que inicialmente perteneció al virreinato del Perú, pasó a formar parte del virreinato de Santa Fe. El presidente de la Audiencia fue una autoridad subordinada con respecto al virrey en lo político y en lo administrativo, pero además dependía de la autoridad del Consejo de Indias.<sup>124</sup> A su vez, la Audiencia se componía de cuatro oidores y de una autoridad fiscal. “Como el Rey era quien nombraba todo empleado, el presidente carecía de autoridad para hacerse obedecer por sus subalternos, y lo único que podía era dar cuenta al Rey acerca de la conducta de ellos, porque el Rey era quien los elegía, y solamente el Rey podía separarlos de sus destinos”.<sup>125</sup>

Como lo indica Federico González Suárez, luego del presidente, jerárquicamente hablando, seguían el intendente y el gobernador de provincia. Siguiendo ese orden, la autoridad al frente de las ciudades era el gobernador, el de las villas era el corregidor, y la de los asentamientos era el teniente corregidor. Las ciudades y villas tenían el derecho de poseer cabildo, por el contrario, los asentamientos no lo tenían. Los miembros del cabildo eran los regidores y los miembros más importantes ocupaban otros cargos públicos.<sup>126</sup>

La importancia del cabildo radicaba en la capacidad de ejercer justicia en un determinado territorio, para ello se nombraban el primero de enero de cada año alcaldes ordinarios o jueces de primera instancia. El cabildo podía crear reglamentos a su conveniencia, pero su aplicación efectiva dentro de su jurisdicción dependía de la previa aprobación de la autoridad virreinal. Pese a este último detalle, el cabildo obedecía directamente al presidente de la Audiencia.<sup>127</sup>

Para Morelli, la justicia tenía una doble dimensión. Por una parte, la que emanaba del rey, expresada por la autoridad de los alcaldes ordinarios, los cuales representaban el vínculo de la justicia local con instancias superiores. Por otra, la que emanaba del pueblo

---

<sup>124</sup> Rosemarie Terán, *Los proyectos del imperio Borbónico en la Real Audiencia de Quito* (Quito: Abya-Yala, 1988), 39-52.

<sup>125</sup> Federico González Suárez, "Historia general de la República del Ecuador. Tomo quinto", *Biblioteca virtual Miguel de Cervantes*, 2005, <http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc5x2m9>, 438.

<sup>126</sup> *Ibíd.*, 438.

<sup>127</sup> *Ibíd.*, 439.

y se expresaba por la autoridad de los regidores. Esta doble dimensión regio-corporativa coexistió dentro del Cabildo de antiguo régimen de manera dependiente y complementaria. Pero también durante el momento gaditano, pues la constitución española no transformó la justicia.<sup>128</sup>

Continuando con la descripción de la Audiencia que realiza González Suárez para el siglo XVII se debe mencionar la existencia de cuatro gobiernos: Guayaquil, Cuenca, Mainas y Quijos; el número de corregimientos fue de cinco: Ibarra, Latacunga, Riobamba, Loja y Chimbo. Es curioso que dentro de los corregimientos no se mencione al de Otavalo, González Suárez puntualiza lo siguiente: “en Otavalo había un teniente de gobernador, subordinado al corregimiento de Ibarra”<sup>129</sup> como se puede observar, la situación de Otavalo, según Suárez, es ambigua en términos administrativos para el siglo XVIII. Por otra parte, la descripción del Padre Juan de Velasco no es para nada ambigua, ya que lo ubica como uno de los siete corregimientos más importantes de la Audiencia.<sup>130</sup>

Al crearse el corregimiento de Otavalo, abarcaba una amplitud de territorios. Los límites del corregimiento eran, el río Guáitara al norte y el río Guayllabamba al sur. Mientras que por el este limitaba con la Gobernación de Quijos y al oeste por la Gobernación de Atacames.<sup>131</sup> A fines del siglo XVI inició la desmembración del territorio con la erección del corregimiento de Pasto, el cual le significó el cercenamiento de la mayoría de los territorios del norte. Al iniciar el siglo XVI, con la creación de la villa de Ibarra, el corregimiento es reducido aún más, incluso, Otavalo fue administrado por el corregidor de Ibarra. De igual forma, varios pueblos del corregimiento, durante el siglo XVIII, ya forman parte de la jurisdicción de Quito y sus cinco leguas.<sup>132</sup>

Es evidente que con la creación de nuevos corregimientos y villas el territorio del corregimiento de Otavalo se vio afectado de manera considerable, y no solo ello, sino también la jurisdicción que ejercía sobre sus pueblos. Hace sentido que González Suárez no lo mencione como uno de los cinco corregimientos por el grado de subordinación a Ibarra.

---

<sup>128</sup> Federica Morelli, "Pueblos, alcaldes y municipios: la justicia local en el mundo hispánico entre Antiguo Régimen y Liberalismo", *Historia Crítica*, n.º 36 (2008): 41-5.

<sup>129</sup> *Ibíd.*, 441.

<sup>130</sup> Juan Velasco, *Historia de Quito en la América meridional Tomo III y parte III, que comprende la historia moderna*. (Guayaquil: Publicaciones Educativas Ariel, 1946), 69-71.

<sup>131</sup> Jean-Paul Deler, *Ecuador del espacio al estado nacional* (Quito: Corporación Editora Nacional / UASB-E, 2007), 70-1.

<sup>132</sup> Lebreton, *La vida en Otavalo en el siglo XVIII*, 22-3.

Al marco administrativo descrito anteriormente cabe añadir el impacto del sistema de intendencias que se implementó en la segunda mitad del siglo XVIII. Este proyecto iniciado por los borbones buscó implementar reformas en lo administrativo, en lo económico y militar.<sup>133</sup> En este sentido, se intentó eliminar la corrupción de varios corregidores y sus subordinados, quienes se aprovechaban del cobro de impuestos para su propio beneficio. Para ello se buscó nombrar nuevas autoridades encargadas del cobro de tributos vinculadas directamente a la corona. Las figuras más importantes de este proyecto fueron el intendente y los subdelegados, que tenían amplios poderes, no solo administrativos, sino de gobierno, judiciales y militares. A pesar de los intentos de la corona por eliminar el cargo de corregidor, según Borchart de Moreno, la administración no sufrió alteraciones importantes, salvo la irregularidad en los cargos públicos relacionados a la administración de rentas.<sup>134</sup>

El proyecto de intendencias, en la Real Audiencia, fue un fracaso. Un ejemplo claro es el de Cuenca, donde la intendencia fue suprimida. Respecto a esto Borchart señala que la existencia del título de gobernador intendente no representó una clara reforma.<sup>135</sup> Uno de los argumentos fundamentales para su supresión fue evitar el gasto que conllevaría la manutención de funcionarios públicos. Para ello se planteó que muchos distritos bajaran de categoría y con ello, el salario de los funcionarios. Otro fue la subordinación de la Real hacienda al virreinato de Nueva Granada. Estos planteamientos hicieron que la administración no sea clara y que haya disputas y debates entre quienes debían realizar el cobro de tributos.<sup>136</sup>

En cuanto al aspecto jurisdiccional, desde la presidencia de Carondelet, hubo intereses y opiniones opuestas. El presidente de la Audiencia buscaba mayor autonomía respecto al virreinato de Nueva Granada, mientras que el virreinato buscaba controlar y centralizar su política en detrimento de la Audiencia.

El Barón de Carondelet sacó a la luz el asunto de la necesidad de una Superintendencia Subdelegada de Real Hacienda en Quito, o Intendencia de Provincia, tal como había sido concebida por Pizarro. Sus planteamientos autonomistas llegaron al extremo de sugerir, para el gobierno militar de la Audiencia, la creación de una Capitanía General.<sup>137</sup>

---

<sup>133</sup> Terán, *Los proyectos del imperio Borbónico en la Real Audiencia de Quito*, 60-8.

<sup>134</sup> Christiana Borchart de Moreno, *La Audiencia de Quito. Aspectos económicos y sociales-siglos XVI-XVIII* (Quito: Abya-Yala, 1998), 317-8.

<sup>135</sup> *Ibíd.*, 317.

<sup>136</sup> Terán, *Los proyectos del imperio Borbónico en la Real Audiencia de Quito*, 63-8.

<sup>137</sup> *Ibíd.*, 91.

En la práctica, el presidente de la Audiencia y el virrey se disputaban las decisiones administrativas y jurisdiccionales. En estas disputas siempre ganaba el último. El nombramiento de autoridades estuvo en manos de este, así como el control directo en cuanto a lo económico de Cuenca y Guayaquil. Esta última para 1802 pasaría a ser controlada por el virreinato del Perú. De esta forma, la política y pretensiones de Carondelet no lograron la tan ansiada autonomía.<sup>138</sup>

A más del proyecto de intendencias, la crisis textil, como eje articulador de la economía de la Audiencia, y como resultado del declive minero de Potosí y la competencia extranjera, fue determinante en los cambios administrativos. Guayaquil subordinado al Perú centró su economía en la producción de cacao, la cual le permitió desarrollar su economía de exportación, pero también a nivel local. A pesar de su crecimiento económico, la producción cacaotera fue intermediada por los comerciantes de Lima. En tanto que Quito reorientó su economía textil hacia la producción minera de Nueva Granada<sup>139</sup> En ese orden de ideas, el territorio de la Audiencia estaba dividido por la jurisdicción de ambos virreinos. Hace sentido que, ante la erección de las juntas quiteñas, tanto Nueva Granada como el Perú tomaran decisiones distintas. Nueva Granada desconoció la primera junta quiteña, mientras que el Perú, por órdenes de Abascal, decidió reprimirla por las armas.

En estas condiciones administrativas, jurisdiccionales y en un contexto de guerra es que se recibe y aplica el Plan general de elecciones constitucionales en los diferentes espacios de la Audiencia.

Borrero ha estudiado el impacto de Cádiz en la gobernación de Cuenca, y uno de sus postulados señala que con la carta gaditana la estructura social por cuerpos o estamentos no cambió. La noción de vecindad se articuló a las nuevas condiciones políticas anulando al vecino como jefe de hogar y posibilitando al vecino-ciudadano como miembro de una comunidad.<sup>140</sup> De igual forma, la nueva carta constitucional excluía a la mujer en la participación de elecciones, sin importar si esta era una mujer de la élite o padre de familia.<sup>141</sup>

---

<sup>138</sup> *Ibíd*, 91-5.

<sup>139</sup> Christine Hunefeldt, "Trasfondo socioeconómico: un análisis sobre los albores de la independencia y las particularidades económicas y sociales andinas de fines del siglo XVIII y principios del XIX", en *Crisis del régimen colonial e Independencia*, Historia de América Andina, vol. 4, (Quito: Corporación Editora Nacional/Libres, 2003), 42.4.

<sup>140</sup> Borrero, "El legado de Cádiz...", 15.

<sup>141</sup> Rodríguez O., *La revolución política...*, 82.

Como señala Morelli, es importante aclarar que además de la dimensiones local u horizontal y estatal o vertical de la ciudadanía, existía una ciudadanía activa y una pasiva. La diferencia entre estas últimas radica en la facultad de participar en elecciones.<sup>142</sup> Esto quiere decir que, si bien la Constitución española negaba el voto a las mujeres, no las excluía de su condición de ciudadanas pasivas. Como señala Sevilla, si bien la mujer no fue reconocida formalmente como ciudadana activa en la carta gaditana, en la práctica lo fue. Hubo participación de mujeres en la erección de la junta de Santa Fe y en la restitución del corregidor de Loja durante el retorno de Fernando VII al trono español, en la defensa de propiedades, entre otros. A través de estos ejemplos se puede observar que las mujeres participaban abiertamente en política o tenían una influencia importante en ella.<sup>143</sup>

Tras la promulgación de la carta constitucional, al igual que en otros espacios de la Audiencia y de la América española, se procedió a jurarla y cumplirla de la mejor manera. La vigencia que la constitución tuvo en Cuenca comprendió desde septiembre de 1812 hasta su derogación decretada por Fernando VII. En este caso, señala Borrero, todos los sectores sociales asimilaron los designios gaditanos.<sup>144</sup> A nivel local los nuevos principios y procedimientos electorales fueron absorbidos por la población. Existió participación indígena en las elecciones y gracias a la erección de cabildos constitucionales “los vecinos se convirtieron en ciudadanos”.<sup>145</sup>

Cabe mencionar un caso importante en el cual se puede observar el impacto de Cádiz en el poder local al suscitarse tensiones entre viejas autoridades y autoridades constitucionales rectoras de los nuevos ayuntamientos constitucionales. Hubo una disputa entre el cacique Mariano Morales y Santiago Quinde, el primero dejó encargado el cargo al segundo mientras colaboraba con Sámano para reprimir a los insurgentes que habían huido de Quito.

Los alcaldes constitucionales, regidores y el síndico de Sidcay no aceptaron la intromisión del teniente letrado Tormaleo, del presidente Montes y del ayuntamiento de Cuenca en su jurisdicción; indicaron que Tormaleo no tenía atribuciones en lo gubernativo, pues ellos observaban la “sabia Constitución española” y se opusieron a la restitución de Morales, a quien lo tenían por forastero y no natural de su pueblo.<sup>146</sup>

---

<sup>142</sup> Federica Morelli, “La ciudadanía entre historia política e historia conceptual”.

<sup>143</sup> Alexandra Rosita Sevilla Naranjo, “Vecinas y ciudadanas La condición político-jurídica de las mujeres quiteñas en el tránsito de la Colonia a la República”, 2018, 21-32.

<sup>144</sup> Borrero, “El legado de Cádiz...”, 17.

<sup>145</sup> *Ibíd.*, 22.

<sup>146</sup> *Ibíd.*, 26.



Al final, Morales, a través de un juicio, logró recuperar su puesto, pero esta situación nos permite observar las tensiones por el poder a nivel local. Ejemplos similares son los mencionados por Borrero para el caso de Chordeleg y Gualaceo, casos que fueron llevados a juicio.<sup>147</sup> En estos casos se puede observar la dispersión de la soberanía a través de la fragmentación territorial que conlleva el establecimiento de ayuntamientos constitucionales.

De la misma manera, al interior de los pueblos indígenas, como consecuencia de la supresión del cobro del tributo indígena, surgieron conflictos entre indios originarios, que pagaban tributos y tenían derecho a la tierra comunal e indios forasteros que tributaban de manera diferenciada y no tenían acceso a tierras de comunidad. “Los caciques y las élites nativas perdieron el control sobre sus pueblos, los indios del común y “forasteros” se convirtieron en una nueva fuerza política que se oponía al viejo orden”.<sup>148</sup>

El caso más importante fue la disputa por el control del ayuntamiento de Cuenca, en el cual, en base al número de población habilitada como ciudadana, se procedió a designar electores de parroquia, los cuales, en el contexto cuencano, eran mayoría en relación con el área rural que, para el área urbana, 35 y 20 respectivamente.<sup>149</sup> Se celebraron, como afirman Rodríguez y Borrero, dos elecciones, en las cuales, el voto indígena fue determinante.<sup>150</sup> Respecto al caso cuencano, Morelli, resalta el conflicto por el poder del ayuntamiento en torno a la disputa entre el estado y el municipio por controlar la administración fiscal y ejercer justicia dentro de las nuevas jurisdicciones. Coincidió con Morelli en afirmar que, en el caso cuencano, la transformación de indios en ciudadanos resultó en un fracaso, en primer lugar, porque siguieron siendo indios tributarios, y, en segundo lugar, porque su participación en elecciones ya sea apoyando a viejas autoridades o a nuevas, tuvo como finalidad el control de las tierras, es decir, los indígenas defendían sus propios intereses.<sup>151</sup>

El caso cuencano es interesante pues presenta una importante contradicción. Los indios, ciudadanos-tributarios, no fueron privados del voto. Como señala Portillo, los diputados americanos buscaron en Cádiz la mayor representación posible. La mayoría de la población americana era indígena, ello explica su inclusión en la representación política

---

<sup>147</sup> Ibíd, 27-9.

<sup>148</sup> Ibíd, 28.

<sup>149</sup> Rodríguez O., *La revolución política...*, 115.

<sup>150</sup> Borrero, "El legado de Cádiz...", 25-8.

<sup>151</sup> Morelli, *Territorio o Nación...*, 176.

de la nación española. Los diputados peninsulares buscaban restringir la representación americana, ello explica la exclusión de los españoles de origen africano. “En América iban a existir numerosos españoles que, sin embargo, no figurarían siquiera a efectos pasivos en el censo de almas de población. Podía haber, en fin, españoles, por tanto, hombres libres, aunque con ascendencia africana, sin alma a efectos representativos”.<sup>152</sup>

Al establecerse la representación política de la nación española y la ciudadanía activa y pasiva de su población, se detallaron los procesos electorales para la representación a Diputaciones y Cortes. No fue el caso con los ayuntamientos constitucionales, los cuales fueron dejados a la discreción de cada localidad. Es por ello por lo que, gracias al vacío normativo de la Constitución de Cádiz, existieron casos como el de Cuenca, en la cual la normativa constitucional se aplicó de acuerdo con las condiciones de recepción de cada localidad y los intereses políticos de sus actores sociales.

En el caso de Loja, corregimiento de población mayoritariamente indígena, hubo una disputa por el control de la región. En este caso la disputa se dio entre el corregidor Tomás Ruiz de Quevedo y el alcalde del ayuntamiento José Manuel Xaramillo y Celi. El motivo de la disputa se dio por parte del corregidor, quien pretendía ser jefe político y ante la negativa por parte de las autoridades quiteñas viajó personalmente a resolver su situación. En su ausencia el alcalde organizó un listado de quienes podían participar en las elecciones constitucionales, excluyendo a un importante número de población indígena. “El antiguo Corregidor Ruiz de Quevedo regresó a Loja el 18 de junio de 1813 con instrucciones de organizar la elección.”<sup>153</sup>

Cabe mencionar que en el plan de elecciones no se nombra encargado de llevar a cabo el proceso electoral al corregidor.<sup>154</sup> Ruiz de Quevedo incluyó en los listados a los indígenas y encarceló al alcalde. Como era de esperarse, este problema se resolvió con las autoridades quiteñas. Tras celebrarse elecciones resultó triunfador el corregidor. “El poder político en la región estuvo dividido durante años, pero, como en el caso de Cuenca, el voto indígena, que no era monolítico, fue total en la lucha por controlar el

---

<sup>152</sup> José M. Portillo, "Monarquía, imperio y nación: experiencias políticas en el Atlántico hispano en el momento de la crisis hispana", en *La revolución novohispana, 1808-1821*, Historia Crítica de las Modernizaciones en México (México-España: Fondo de Cultura Económica, 2011), 109.

<sup>153</sup> Rodríguez O., *La revolución política...*, 118.

<sup>154</sup> “Expediente seguido sobre la formación del Ayuntamiento Constitucional de esta Capital, nombramiento de Electores, y consecuentes diligencias para las Diputaciones Provinciales”, Quito, 27/08/1813, Archivo Nacional Ecuador (ANE), Fondo Corte Suprema (FCS), Serie Gobierno, Caja 68, Expediente 17, f. 1.

Ayuntamiento de Loja”.<sup>155</sup> Las conclusiones a las que llega Rodríguez indican que hubo participación efectiva de la población indígena en las elecciones constitucionales y que esta fue determinante en los resultados.

En cambio, Tatiana Hidrobo estudia el contexto gaditano en Manabí, de manera específica en los pueblos de Puerto Viejo y La Canoa, pueblos subordinados a Guayaquil, pero por su condición de pueblos de frontera, con cierta autonomía. Tras la promulgación de la carta gaditana, estos pueblos celebraron elecciones y establecieron cinco de los diez y nueve cabildos de toda la provincia de Guayaquil. Los pueblos donde se establecieron las nuevas instituciones fueron: Jipijapa, Montecristi, San Gregorio, Pichota y La Canoa.<sup>156</sup>

Según Hidrobo, la consolidación de la soberanía local se dio en tres momentos determinantes: el reformismo borbónico, la crisis de la monarquía y la constitución de Cádiz. En todos los espacios de la Audiencia, pese a las dificultades locales, los pueblos establecieron, a través de elecciones, ayuntamientos constitucionales. “Este sentido de soberanía y ciudadanía prendió rápidamente y con fuerza también en los pueblos de Puerto Viejo y La Canoa.”<sup>157</sup> Al igual que el caso cuencano y lojano, en estos pueblos hubo tensiones por el poder entre viejas autoridades y las nuevas

Tras ser abolida la constitución por Fernando VII, los habitantes de Jipijapa se negaban a pagar el tributo y denunciaron en Lima la intrusión de las autoridades de Guayaquil en su jurisdicción, lo cual muestra la apropiación de los dictámenes de la carta gaditana. Otro ejemplo, es la celebración de elecciones en 1820 con el mismo marco normativo que en 1812-1814. “Los pueblos de La Canoa y Puerto Viejo parecen haber interiorizado con intensidad esta condición ciudadana y soberana de elegir sus propias autoridades y asumir posiciones relativamente auto determinantes”<sup>158</sup>

## 6. El plan de elecciones de Toribio Montes en Otavalo

La Real Audiencia de Quito, a diferencia de otros espacios de la América española, no contó con una junta preparatoria de elecciones. De acuerdo con el artículo I del instructivo emitido el 23 de mayo de 1812 por las cortes ordinarias para la celebración

---

<sup>155</sup> Rodríguez O., *La revolución política...*, 118.

<sup>156</sup> Hidrobo Quiñónez, "Los alucinados de Puerto Viejo. Nociones de soberanía y ciudadanía en Manabí (1812-1814)", 57-63.

<sup>157</sup> *Ibíd.*, 65.

<sup>158</sup> *Ibíd.*, 67.

de elecciones, Quito y Chuquisaca no constaban en el listado de las capitales provinciales.<sup>159</sup> ¿Por qué? En el caso de Quito, es importante hacer referencia al fracaso del proyecto de intendencias, lo cual, administrativa, económica y militarmente favoreció a la subordinación de la Audiencia con respecto a los virreinos de Nueva Granada y Perú. Como muestra Terán, a finales del siglo XIX, el virrey tenía la facultad de nombrar al presidente de la Audiencia. De esta forma, se dio un choque entre el proyecto autonomista que buscaba Quito con la centralidad que buscaban fortalecer los virreinos.<sup>160</sup> Es posible que no se nombrara a Quito como capital provincial haciendo referencia a esa subordinación que tenía con respecto al virreinato.

Al no constar como capital provincial, no se contó con una junta preparatoria como se establecía por decreto. Ante tal situación, el presidente de la Audiencia, Toribio Montes, estableció un plan de elecciones para el cabal cumplimiento de los dictámenes de la carta constitucional.<sup>161</sup>

El principal punto del plan de elecciones hacía referencia a la erección de ayuntamientos constitucionales y la elección de alcaldes, regidores y procuradores síndicos. “Para el gobierno interior de los pueblos habrá ayuntamientos compuestos de alcalde o alcaldes, los regidores y el procurador síndico, y presididos por el jefe político donde lo hubiere, y en su defecto por el alcalde o el primer nombrado entre éstos, si hubiere dos.”<sup>162</sup> De igual manera, se explicitaba que el ayuntamiento constitucional gaditano se establecería para anular la autoridad del cabildo colonial de antiguo régimen.

De esta forma se procedió al cumplimiento del plan de elecciones. En primer lugar, se debía nombrar el número de electores por parroquia “debiendo nombrar personas de confianza e integridad que presidan las elecciones en todas las Parroquias de esta Ciudad y la de los Pueblos que son anexos”<sup>163</sup>, en este sentido se mantuvo un criterio basado en la noción de la ciudadanía horizontal. Esta persona escogida por su rectitud y buenos valores debía trabajar junto al párroco del lugar que fuera designado para lograr un proceso electoral óptimo.

---

<sup>159</sup> Decreto CLXII, 23 de mayo de 1812, “Instrucción conforme a la cual deberán celebrarse en las provincias de Ultramar las elecciones de Diputados de Cortes para las ordinarias del año próximo de 1813.” artículo I.

<sup>160</sup> Terán, *Los proyectos del imperio Borbónico en la Real Audiencia de Quito*, 91.

<sup>161</sup> Rodríguez Ordoñez, *La revolución política en la época de independencia: El Reino de Quito, 1808-1822*, 79-80.

<sup>162</sup> Constitución política de la monarquía española, título VI, capítulo I, art 309.

<sup>163</sup> “Expediente seguido sobre la formación del Ayuntamiento Constitucional de esta Capital, nombramiento de Electores, y consecuentes diligencias para las Diputaciones Provinciales”, Quito, 27/08/1813, Archivo Nacional Ecuador (ANE), Fondo Corte Suprema (FCS), Serie Gobierno, Caja 68, Expediente 17, f. 1.

Un punto fundamental que explicita el plan de elecciones, en concordancia con la constitución gaditana, es la nueva noción de ciudadanía. “Tienen voto en la elección todo ciudadano español que lo son incluso los indios, los vecinos de la parroquia, excluidos los esclavos los sirvientes domésticos y los extranjeros, al menos que presenten carta de ciudadanos (...) Tienen igual voto los eclesiásticos del clero secular”.<sup>164</sup> De esta forma la población indígena accedió al ejercicio del voto, y en el caso de Otavalo, ésta fue la gran mayoría.

Conceder el título de ciudadano a los indígenas fue, entre otras cosas, la mayor novedad del plan de elecciones y de la carta gaditana. El debate respecto a la naturaleza de los indios fue un tema controversial que duró por siglos, pero para la coyuntura borbónica y la gaditana no pocos concordaban con la idea de que los indios eran considerados vasallos útiles por su capacidad económica y por el gran número que representaban en el territorio.<sup>165</sup>

Toribio Montes impulsó el cumplimiento de la carta constitucional de manera inmediata pese a las circunstancias. No pocos se preguntaban sobre la ciudadanía indígena, aspecto fundamental de la carta magna.<sup>166</sup> El jefe político se basó en los dictámenes establecidos en la propia constitución. “Son ciudadanos aquellos españoles que por ambas líneas traen su origen de los dominios españoles de ambos hemisferios y están avecindados en cualquier pueblo de los mismos dominios”.<sup>167</sup>

La nueva noción de ciudadanía promulgada por la constitución generó dudas cuando ésta estableció los motivos de suspensión de la ciudadanía.

El ejercicio de los mismos derechos se suspende: Primero. En virtud de interdicción judicial por incapacidad física o moral. Segundo. Por el estado de deudor quebrado, o de deudor a los caudales públicos. Tercero. Por el estado de sirviente doméstico. Cuarto. Por no tener empleo, oficio o modo de vivir conocido. Quinto. Por hallarse procesado criminalmente.<sup>168</sup>

El punto tercero, que hace referencia al estado de sirviente doméstico, concernía a la gran mayoría de la población indígena. Los indígenas conciertos eran sujetos a las haciendas, por lo tanto, debían ser excluidos del voto. Jaime Rodríguez muestra cifras

---

<sup>164</sup> “Expediente seguido sobre la formación del Ayuntamiento Constitucional de esta Capital, nombramiento de Electores, y consecuentes diligencias para las Diputaciones Provinciales”, Quito, 27/08/1813, Archivo Nacional Ecuador (ANE), Fondo Corte Suprema (FCS), Serie Gobierno, Caja 68, Expediente 17, f. 2.

<sup>165</sup> Chiaramonti, “Ensayando nuevos derechos...”, 316-7.

<sup>166</sup> Rodríguez O., *La revolución política...*, 111-2.

<sup>167</sup> Constitución política de la monarquía española, título II, capítulo IV, art 18.

<sup>168</sup> Constitución política de la monarquía española, título II, capítulo IV, art 25.

aproximadas, pero resulta arriesgado establecerlas debido a las dificultades que tuvieron las autoridades de definir la población total sobre la cual determinar el número de votantes. Al tener dificultades en llevar a cabo los censos y conteos de población, resulta aún más complicado suponer quiénes fueron efectivamente excluidos del proceso electoral.<sup>169</sup> A más de ello, como señala Chiaramonti para el caso peruano, hubo sectores indígenas que se negaron a jurar la carta gaditana por temor a que el tributo indígena, abolido por las cortes de Cádiz, fuera restablecido nuevamente.<sup>170</sup>

Respecto al voto de la mujer cabe mencionar, que pese a ser jefas de hogar, la nueva normativa constitucional las excluía como ciudadanas activas y, por ende, se le negaba el derecho a participar en las elecciones.<sup>171</sup> Aquí se puede evidenciar una primera ruptura en la naturaleza del voto. Antes de Cádiz las mujeres, si eran jefas de hogar, podían participar en elecciones, es decir, regía el voto corporativo. Con la nueva normativa electoral, al menos en teoría, el voto se torna individual en detrimento del corporativo.<sup>172</sup>

Una vez que se precisó, al menos en teoría, quién podía participar en los comicios fue una tarea de primer orden establecer la población del territorio y en base a esta definir el número de ayuntamientos constitucionales que debían establecerse. “Se pondrá ayuntamiento en los pueblos que no le tengan, y en que convenga le haya, no pudiendo dejar de haberle en los que por sí o con su comarca lleguen a mil almas, y también se les señalará término correspondiente.”<sup>173</sup> Cabrera Hanna afirma que el censo de 1813 produjo desarreglos tanto territoriales como jurisdiccionales en detrimento de los viejos cabildos.<sup>174</sup> Lo cual, siguiendo a Rodríguez, se puede confirmar si miramos que en 1810 Quito tenía seis cabildos y en 1814 el número de ayuntamientos fue de ochenta y nueve.<sup>175</sup> Por su parte Morelli plantea un número menos elevado “en 1822, osea al final del segundo período gaditano, en el territorio de la Audiencia de Quito había unos 130 ayuntamientos constitucionales, cuando en 1812 los cabildos eran solamente doce.”<sup>176</sup>

---

<sup>169</sup> Santiago Cabrera Hanna, "Ciudadanía, representación política y territorio en la audiencia de Quito: entre el Pacto Solemne de 1812 y el censo poblacional de 1813", *Memoria y Sociedad*, n.º 41 (2016), 118.

<sup>170</sup> Chiaramonti, "Ensayando nuevos derechos...", 319-20.

<sup>171</sup> Rodríguez O., *La revolución política...*, 82.

<sup>172</sup> *Ibíd.*, 82.

<sup>173</sup> Constitución política de la monarquía española, título VI, capítulo I, art 310.

<sup>174</sup> Cabrera Hanna, "Ciudadanía gaditana, tributación y territorialidad en la Audiencia de Quito: el censo constitucional de 1813 y el plan de elecciones", 5-6.

<sup>175</sup> Rodríguez Ordoñez, *La revolución política...*, 80-1.

<sup>176</sup> Morelli, *De los Andes al Atlántico. Territorio, Constitución y ciudadanía en la crisis del Imperio español*, 31.

Por lo tanto, el establecimiento de nuevos ayuntamientos en base al número de habitantes fragmentó el territorio, fortaleciendo la localidad por sobre la centralidad administrativa.

En lo que respecta a Otavalo, la población que se dispone para el análisis proviene del censo iniciado en 1778 por parte de Juan José de Villalengua, fiscal de la Audiencia durante la presidencia de José García de León y Pizarro.<sup>177</sup> Pese a la orden de levantar un nuevo censo en 1813, al cabo de seis meses, el mismo plan de elecciones permite vislumbrar las dificultades que significó la ejecución de este, únicamente se tenían los datos de la población de Cuenca y Riobamba, y se requería al menos un año más para obtener los datos necesarios de toda la Capitanía.<sup>178</sup>

Los datos más precisos son los suministrados por los censos de 1779 y 1785 que indican 32.060 y 34.459 habitantes respectivamente, para todo el corregimiento. En el cuadro que de la población del Ecuador de Michael T. Hamerly señala para lo correspondiente a la circunscripción administrativa de Otavalo, que hubo 33.233 habitantes en 1825 y luego entre 1838-1840, 45.734.<sup>179</sup>

La población, según el censo de 1779, se distribuía de la siguiente forma: “Otavalo 8.308, Cayambe 6.286, Cotacachi 4.980, San Pablo 3.549, Atuntaqui 2.735, Urcuquí 2.702, Tabacundo 1.450, Tocache 1.084 y Tumbabiro 966.”<sup>180</sup> Una parte de estos datos concuerda al estudio que realiza Borchart de Moreno, la cual, añade que, aproximadamente el setenta y cinco por ciento de la población de Otavalo era indígena, un diez y ocho por ciento era negra y mulata, y el resto, lo cual constituyó un siete por ciento, era blanca.<sup>181</sup> Si tomamos como referencia la cifra referenciada por Lebreton y los datos de Borchart de Moreno se puede concluir, de manera preliminar, que más del ochenta por ciento de la población, bajo las nuevas normativas gaditanas que visibilizaban una nueva noción de ciudadanía, accedía a participar políticamente en la ahora llamada Nación Española.

---

<sup>177</sup> Christiana Borchart de Moreno, *El corregimiento de Otavalo: Territorio, población y producción textil (1535-1808)* (Quito-Ecuador: Universidad de Otavalo, 2007), 165.

<sup>178</sup> “Expediente seguido sobre la formación del Ayuntamiento Constitucional de esta Capital, nombramiento de Electores, y consecuentes diligencias para las Diputaciones Provinciales”, Quito, 27/08/1813, Archivo Nacional Ecuador (ANE), Fondo Corte Suprema (FCS), Serie Gobierno, Caja 68, Expediente 17, f.8-9.

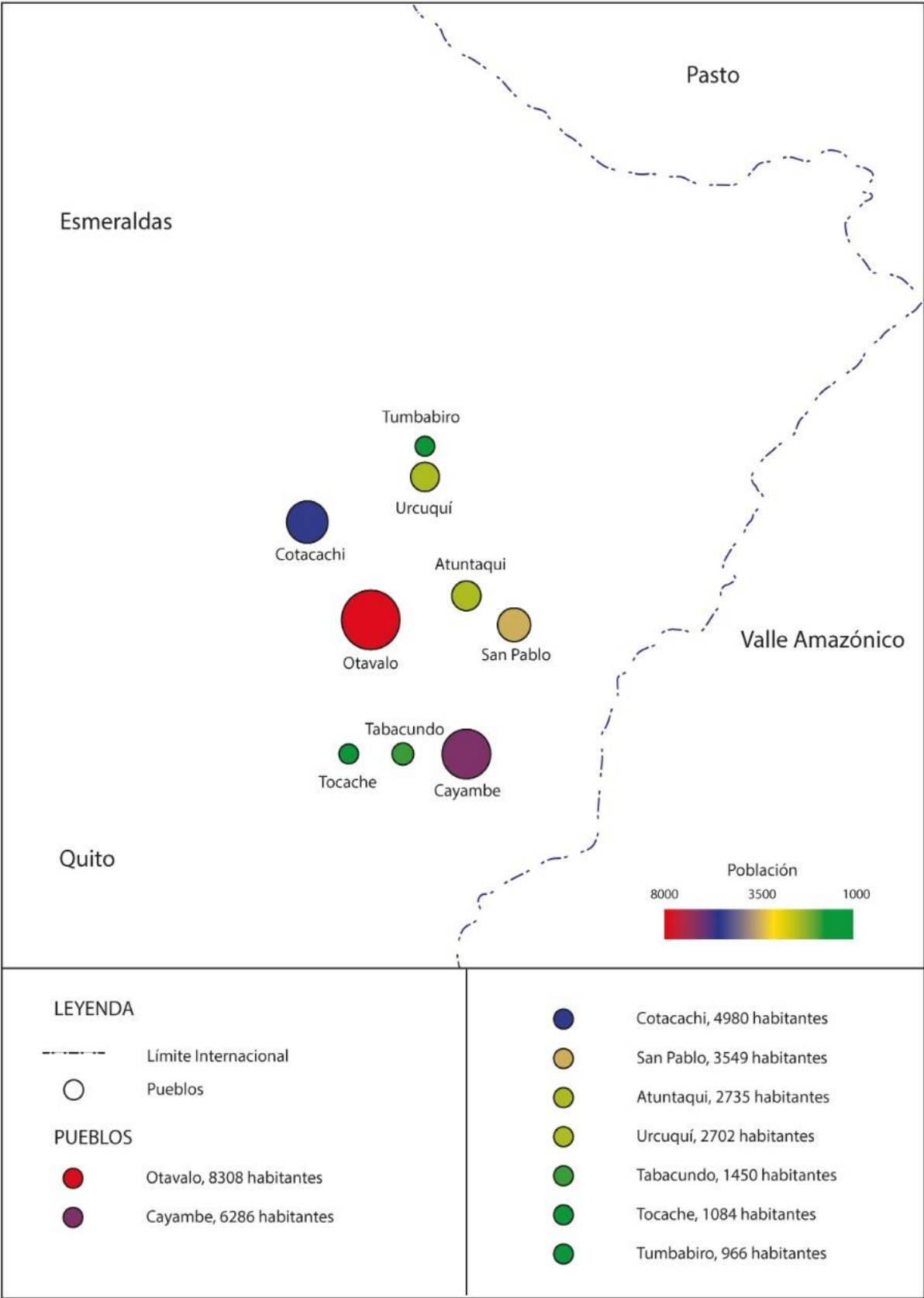
<sup>179</sup> Lebreton, *La vida en Otavalo en el siglo XVIII*, 27.

<sup>180</sup> *Ibíd.*, 31-2.

<sup>181</sup> Borchart de Moreno, *El corregimiento de Otavalo: Territorio, población y producción textil (1535-1808)*, 175.

**Ilustración 1. Mapa del Corregimiento de Otavalo previo a la Constitución de Cádiz**

Mapa del Corregimiento de Otavalo previo a la Constitución de Cádiz





Al no contar con el tiempo suficiente para que el censo de 1813 arroje las cifras necesarias para la buena ejecución del plan de elecciones y posterior erección de ayuntamientos constitucionales, se ordenó recurrir a los medios necesarios para obtener los datos más exactos posibles.<sup>182</sup> En otras palabras, se usaron censos anteriores para determinar la población necesaria, incluso en lugares en los que no había información alguna, se preguntaba a los párrocos, autoridades y personas doctas en la materia.<sup>183</sup> “llámese a las personas que por conocer las Provincias, cuya numeración se echa de menos, puedan dar una idea de su población, sentándose en seguida sus declaraciones”.<sup>184</sup> Estas personas tenían conocimiento de la población por sus actividades, las cuales eran, el cobro de impuestos, el adoctrinamiento de los indios y el registro de bautizos.<sup>185</sup> Entonces, al contar únicamente con la información actualizada de la población de Riobamba y Cuenca, se procedió a usar los datos del censo de 1779 y 1784. “Este conteo estableció una serie de informaciones con las cuales fueron “completados” los vacíos en los resultados del censo de 1813 o permitieron el cotejo de datos censales.”<sup>186</sup> En este sentido, cabe enfatizar la tesis de Cabrera Hanna de que los nuevos ayuntamientos constitucionales se establecieron en función de conteos usados por las autoridades borbónicas para hacer más eficiente el cobro de impuestos.<sup>187</sup>

Una vez determinado el número de habitantes con capacidad de votar, surgió otro problema. De acuerdo con la normativa gaditana, se debía establecer un ayuntamiento por cada mil almas. ¿Qué sucedió con los pueblos que no llegaban a este número? Se recurrió a las agregaciones, es decir, a completar el número requerido de habitantes de una circunscripción con los de otra. Otro recurso para completar los registros necesarios para cada circunscripción fue la adición de padrones y padroncillos.<sup>188</sup> Cabe aclarar que estos métodos para completar población faltante obedecían, exclusivamente, a un criterio

---

<sup>182</sup> “Expediente seguido sobre la formación del Ayuntamiento Constitucional de esta Capital, nombramiento de Electores, y consecuentes diligencias para las Diputaciones Provinciales”, Quito, 27/08/1813, Archivo Nacional Ecuador (ANE), Fondo Corte Suprema (FCS), Serie Gobierno, Caja 68, Expediente 17, f.11.

<sup>183</sup> *Ibíd.*, 11.

<sup>184</sup> *Ibíd.*, 11.

<sup>185</sup> Javier Ortiz de la Tabla Ducasse, “La población ecuatoriana en la época colonial: cuestiones y cálculos”, *Anuario de estudios americanos*, 1980, 238.

<sup>186</sup> Cabrera Hanna, “Ciudadanía gaditana, tributación y territorialidad en la Audiencia de Quito: el censo constitucional de 1813 y el plan de elecciones”, 7.

<sup>187</sup> *Ibíd.*, 20-1.

<sup>188</sup> *Ibíd.*, 8-9.

numérico, es decir, se redefinieron el territorio y la administración sin tomar en cuenta criterios culturales.<sup>189</sup>

Como se puede observar, el marco normativo en términos electorales marcaba un reforzamiento de la fragmentación del territorio. Hay que recordar que no es algo que surgió de manera exclusiva con la constitución de Cádiz, sino que con esta se reforzó aún más. La fragmentación del territorio se produce desde la formación de las primeras juntas de gobierno. A cambio de procurarse la lealtad de otros territorios, producto del fracaso de la primera junta, la segunda junta de Quito elevó al rango de ciudad a territorios que fueron villas, y al de villas a las que fueron asentamientos.<sup>190</sup> “Gracias a su transformación en villas, estos centros urbanos reforzaron su jurisdicción sobre el espacio rural y se fueron paulatinamente autonomizando respecto de las principales ciudades de la época colonial”.<sup>191</sup>

En el caso de Otavalo, se le fue concedida el grado de villa, y con ello la facultad de instituir un cabildo.<sup>192</sup> Lo cual se llevó a cabo, al igual que otros territorios, a principios del mes de enero de 1812. Siguiendo los planteamientos de Morelli, con la erección de ayuntamientos municipales, se posibilita la transformación de estos en cuerpos soberanos que rompen con la jurisdicción tradicional de las ciudades al tener gran autonomía y poca regulación de instancias de poder superiores.

Como señala Chiaramonti, la creación de un cabildo en el antiguo régimen constituía un privilegio, pues este adquiría privilegios en términos administrativos, territoriales y jurisdiccionales. Los alcaldes ordinarios, en especial en el área rural, tuvieron que convivir con las autoridades étnicas, las cuales, seguían teniendo funciones importantes como la recaudación de impuestos y la regulación de mano de obra.<sup>193</sup>

De esta forma, la fragmentación del territorio en la llamada Provincia de Quito obedeció al vacío administrativo y judicial que surgió en un contexto de guerra. Dadas las circunstancias, estos vacíos fueron subsanados, en cuanto a lo administrativo, por los cabildos constitucionales ante la ambigua jerarquía entre los nuevos municipios y la administración estatal; y en cuanto a lo judicial, por los alcaldes ordinarios en detrimento

<sup>189</sup> *Ibíd.*, 16.

<sup>190</sup> Morelli, *De los Andes al Atlántico. Territorio, Constitución y ciudadanía en la crisis del Imperio español*, 27-31.

<sup>191</sup> Morelli, *Territorio o Nación: Reforma y disolución del espacio imperial en Ecuador, 1765-1830*, 13-5.

<sup>192</sup> Acta de elección de Alcaldes ordinarios de la Villa de Otavalo, Freile Granizo, *Resúmenes de actas republicanas Cabildo de Otavalo, siglo XIX*, 12-21.

<sup>193</sup> Gabriella Chiaramonti, "De marchas y contramarchas: apuntes sobre la institución municipal en el Perú (1812-1861)", *Araucaria*, n.º 18 (2007): 154-7.

de los jueces letrados, al no poder estos últimos tener un nombramiento formal y ejercer sus funciones. “A Montes, la proclamación de Cádiz también le sería útil para restar hegemonía territorial a la región de Quito sobre las otras dos ciudades regionales (Cuenca y Guayaquil)”<sup>194</sup>

Con el desarrollo de las elecciones y la instauración de Ayuntamientos constitucionales en el territorio de la Provincia de Quito, la fragmentación del territorio se hará más evidente, dependiendo de las lógicas comiciales locales.

Una vez que la Constitución de Cádiz es receptada en los distintos espacios de la Provincia de Quito cabe preguntarse ¿Cómo se aplicó el plan de elecciones en Otavalo? ¿Cómo fue el proceso electoral? ¿Cómo se establecieron los ayuntamientos constitucionales?

---

<sup>194</sup> Cabrera Hanna, "Ciudadanía gaditana, tributación y territorialidad en la Audiencia de Quito: el censo constitucional de 1813 y el plan de elecciones", 13.



## **Capítulo segundo**

### **Erección del Ayuntamiento Constitucional de Otavalo y celebración de los comicios (1813)**

El propósito de este capítulo es conocer, por una parte, cómo se desarrollaron en Otavalo las ceremonias de publicación y jura de la constitución política de la Monarquía española; por otra, comprender cómo se desarrollaron los comicios y cómo se instituyó el cabildo constitucional de Otavalo. Se parte de la hipótesis de que la recepción de la constitución española se mostró como la manifestación de la voluntad del rey. El vínculo entre el monarca y la constitución dieron al momento gaditano un fuerte aire fidelista, en el cual, la constitución no fue protagonista, sino que fue considerada como una dádiva de parte del rey para con sus vasallos.

El Análisis parte de los aportes Jaime Rodríguez, quien ha estudiado elecciones en el Reino de Quito y varios espacios de la América española; Antonio Annino, quien analiza el tema electoral en Perú y Nueva España; Gabriela Chiaramonti, que examina las elecciones en los pueblos indígenas del Perú; Santiago Cabrera Hanna quien ha estudiado la ciudadanía gaditana y el plan de elecciones de 1813; y finalmente, el análisis se ha nutrido de las reflexiones de François Xavier Guerra.

Este capítulo se ha trabajado con fuentes primarias, decretos oficiales, el plan de elecciones de Toribio Montes y con la constitución gaditana. El tratamiento minucioso de estos materiales nos ha permitido conocer las instrucciones para la publicación y jura de la constitución y su aplicación en Otavalo, así como, los procedimientos electorales para el nombramiento de las autoridades del ayuntamiento constitucional. El capítulo hace referencia a tres momentos clave: el primero describe cómo se produjo la publicación de la constitución española en el orbe hispano y en Otavalo; el segundo muestra cómo se juró la constitución gaditana en Otavalo; y el tercero, pretende analizar el desarrollo de los comicios y la erección del ayuntamiento constitucional en este asiento y villa. Además, cabe recalcar que se menciona la elección de diputados a Cortes y a la Diputación Provincial de Quito como parte del proceso electoral a nivel de provincia. Jaime Rodríguez ha trabajado esta parte del proceso a detalle por lo que nos acogemos a su interpretación.

## 1. Publicación y jura de la Constitución de Cádiz en el orbe hispano

Una vez terminada la tarea de elaborar la Constitución de Cádiz, un punto fundamental fue presentarla a la población de una forma comprensible para que fuese asimilada de la mejor manera. Para ello las Cortes generales y extraordinarias, mediante el decreto del 18 de marzo de 1812, ordenaron la forma en la cual debe ser promulgada la carta gaditana a los pueblos de la Nación Española.<sup>195</sup>

Cuando se habla de jura de la constitución cabe puntualizar que hubo no solo una jura, sino varias. La jura constituyó el ritual fundamental en todo el proceso que duró la elaboración de la constitución. En primer lugar, juraron los diputados que formaron la Asamblea constituyente, luego los diputados de las Cortes generales y extraordinarias, y finalmente, la Regencia. Como resultado de estas primeras juras, señala Lorente, “por un primer juramento se constituye la Asamblea y por un segundo se intenta subordinar políticamente al resto del entramado constitucional a la misma”.<sup>196</sup> Una vez terminada la redacción de la constitución, los diputados de Cortes y la Regencia tuvieron que jurarla nuevamente. Luego de estas ceremonias se dio paso a su promulgación y a la difusión de los decretos que contenían instrucciones detalladas para su aplicación en todos los pueblos del orbe hispano.

La Carta gaditana no tuvo grandes problemas en ser divulgada en los pueblos de la península. No quiere decir que no hubo problemas como falta de copias de la constitución en varias parroquias, trabas para reproducirla y debates respecto al desconocimiento de su texto al momento de jurarla. De hecho, la mayoría de estos, pese a la ocupación francesa, la juraron y aplicaron en pocos meses.<sup>197</sup>

En este sentido, nos encontramos frente a un ejercicio de pedagogía política, al menos en los pueblos peninsulares. ¿Pero hasta qué punto se conocía lo que se iba a jurar en los pueblos de América y en Otavalo? En los pueblos de la península existe un debate acerca de si las lecturas públicas de la constitución fueron suficientes para que exista un ejercicio de apropiación de lo que en ella se establecía. Sin embargo, en Otavalo, vemos

---

<sup>195</sup> Decreto CXXXIX, de 18 de marzo de 1812, “*Solemnidades con que debe publicarse y jurarse la Constitución política en todos los pueblos de la Monarquía, y en los ejércitos y armada: se manda hacer visita de cárceles con este motivo.*”

<sup>196</sup> Marta María Lorente Sariñena, “El Juramento Constitucional”, en *Anuario de historia del derecho español: Los orígenes del constitucionalismo español entre 1808 y 1812*, vol. 65 (España: Ministerio de Justicia, 1995), 593.

<sup>197</sup> Roberto J. López, «“Hablar a la imaginación”. las ceremonias de proclamación y jura de la constitución de 1812 en el noroeste peninsular», *Obradoiro de Historia Moderna*, n.º 20 (2011):145-7.

que no existió un ejercicio de pedagogía política y que el ejercicio de su difusión fue restringido. De acuerdo con López, resulta imposible creer que el contenido de la constitución no se haya difundido semanas antes del ritual, lo cual conlleva a afirmar un esfuerzo de pedagogía política que permitió difundir, al menos los puntos esenciales, de la carta gaditana constitucional.<sup>198</sup> En esta difusión ocupó un papel importante la prensa.

Según el artículo 156 de la constitución gaditana: “Todas las leyes se circularán de mandato del Rey por los respectivos secretarios del despacho directamente a todos y cada uno de los tribunales supremos y de las provincias, y demás jefes y autoridades superiores, que las circularán a las subalternas”.<sup>199</sup> De acuerdo con la normativa, la divulgación de las leyes contenidas en la constitución debía ser realizada por las autoridades mucho antes de la ceremonia de jura de esta.

En el territorio americano y en Filipinas, la situación fue distinta. Fue primero en Nueva España en donde se publicó y juró la constitución. Francisco Javier Venegas, jefe político de la provincia, recibió las instrucciones de publicación y jura el 10 de octubre de 1812 y, posteriormente, envió copias de la constitución a los demás pueblos.<sup>200</sup> En este caso, Nueva España contó con una junta preparatoria que inició sus funciones en noviembre y ese mismo mes se desarrollaron las elecciones constitucionales.<sup>201</sup> En la Capitanía General de Guatemala, en el caso de Tegucigalpa, la ceremonia de jura de la constitución se llevó a cabo el 13 de octubre de 1812,<sup>202</sup> mientras que los comicios constitucionales en Centroamérica se llevaron a cabo entre los meses de noviembre y diciembre.<sup>203</sup> En el territorio andino, en el virreinato de Nueva Granada, la constitución española se juró entre junio de 1812 y noviembre de 1813.<sup>204</sup> Respecto a las elecciones es importante tener en cuenta el análisis de Andrés Bernal:

Sobre la erección de los ayuntamientos constitucionales en la provincia de Santa Marta, empezando por su ciudad capital, a los que siguió Valledupar, resultado de las elecciones que se realizaron durante el mes de febrero de 1813 y que pone en evidencia cómo se

---

<sup>198</sup> López, «“Hablar a la imaginación”. las ceremonias...», 149.

<sup>199</sup> Constitución política de la monarquía española, título III, capítulo IX, art 156.

<sup>200</sup> Jaime E. Rodríguez O., "Las instituciones gaditanas en Nueva España, 1812-1824", en *Las nuevas naciones España y México 1800-1850* (Madrid-España: Fundación Mapfre, 2001), 103.

<sup>201</sup> *Ibíd*, 103.

<sup>202</sup> Embajada de España en Honduras, "La Constitución de Cádiz y el juramento de Tegucigalpa en 1812", en *Bicentenario de la Constitución de Cádiz en Honduras* (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo/Ideas Litográficas, 2012), 96.

<sup>203</sup> Rolando Castillo Quintana, "Las Cortes de Cádiz y las municipalidades de Centroamérica", en *Las Cortes de Cádiz y su influencia en Centroamérica Presentaciones para el Diálogo sobre Integración Centroamericana* (El Salvador: Sistema de la Integración Centroamericana, 2012), 72.

<sup>204</sup> Andrés Botero Bernal, "Una sombra en la noche: en torno al constitucionalismo gaditano y la Nueva Granada", *Historia constitucional*, n.º 15 (2014): 359-62.

construía cultura constitucional sin conocer la Constitución, de un lado, y la flexibilidad que suponía tales asuntos.<sup>205</sup>

Es importante enfatizar, por una parte, el desconocimiento del texto constitucional en el proceso electoral, lo cual nos hace pensar que en las ceremonias de publicación y jura ocurrió lo mismo. Por otra, que la ciudadanía gaditana se llevó a la práctica bajo la tutela de cada localidad.

En el virreinato del Perú, la constitución gaditana llegó a Lima a finales del mes de septiembre y se la publicó y juró los primeros días de octubre. Luego de la jura en Lima, durante los meses siguientes, diciembre y enero, se hizo lo mismo en los demás pueblos del virreinato.<sup>206</sup> Se puede observar que la publicación y jura de la constitución española se cumplió, al menos en Nueva España, Centroamérica, y en el Perú sin mayor demora. No fue el caso en otros espacios del orbe hispano. Por ejemplo, en Filipinas, dominio ultramarino de la Monarquía española, debido a su enorme distancia, tuvo problemas graves de comunicación y tardó en elegir sus representantes ante las cortes de Cádiz. La dificultad de movilidad de sus diputados para trasladarse a Cádiz es otra muestra de la distancia que estos debieron sortear. En tales circunstancias no se juró la constitución ni se celebraron elecciones durante el período 1812-1814.<sup>207</sup>

En el caso de la Real Audiencia de Quito, las instrucciones de cómo se debía publicar y jurar la constitución, pese a ser promulgadas en 1812, se aplicaron, en muchos lugares, un año después. El primer lugar en donde se la publicó y juró, debido a los acontecimientos producidos en Quito, fue en Cuenca. En tal virtud, el cabildo decidió publicar la constitución gaditana el 21 de septiembre de 1812 y celebró la jura el domingo 28 de septiembre del mismo año.<sup>208</sup> En Guayaquil, la constitución española llegó el 10 de noviembre de 1812. José Joaquín de Olmedo entregó una copia al ayuntamiento, pero aquella copia no estaba acompañada del decreto de las Cortes en el cual constaba las instrucciones de publicación y jura, por lo cual, la ceremonia se pospuso. El 19 de enero de 1813 dichas instrucciones fueron enviadas por el Virrey Abascal al gobernador Juan Vasco y Pascual y posteriormente se procedió a jurar la constitución.<sup>209</sup>

---

<sup>205</sup> Ibíd, 74.

<sup>206</sup> F. Javier Campos y Fernández de Sevilla, "La Constitución Española de 1812 y su recepción en Perú."

<sup>207</sup> David Manzano Cosano, "Filipinas en la historia del constitucionalismo español y su representación en las Cortes españolas" en *Revista española de derecho constitucional*, n.º. 106 (2016): 277-283.

<sup>208</sup> Borrero, «El legado de Cádiz: ciudadanía y cultura política...», 19-20.

<sup>209</sup> Rodríguez O., *La revolución política...*, 143-4.



En Otavalo, no hubo un ejercicio de pedagogía política previo a la jura. La constitución gaditana se dio a conocer mediante su lectura en la plaza mayor, a la cual, debían asistir todos los habitantes sin excepción. Luego de ello, esta pasaría a llamarse plaza de la constitución. Otro lugar en donde se dio lectura al texto constitucional fue en las iglesias, en donde los curas debían exhortar su ciega obediencia. Cabe aclarar que estas lecturas corresponden a las ceremonias de publicación y jura, respectivamente.<sup>210</sup>

**Cuadro 1. Publicación, jura y elecciones gaditanas en el territorio americano.**

<b>Territorio</b>	<b>Publicación y jura</b>	<b>Elecciones</b>
Nueva España	octubre de 1812	noviembre de 1812
Guatemala	octubre de 1812	noviembre y diciembre de 1812
Nueva Granada	junio de 1812- noviembre de 1813	Febrero 1813 – enero 1814
Perú	octubre de 1812 -enero de 1812	febrero de 1813
	Guayaquil-enero de 1813	febrero de 1813
Quito	Cuenca-septiembre de 1812	septiembre de 1813-enero de 1814
	Quito-abril de 1813	septiembre de 1813-enero de 1814
	Otavalo-julio de 1813	noviembre de 1813

Fuente: varios autores

Elaboración propia

Como ya se dijo en el primer capítulo, la coyuntura gaditana en Quito fue en extremo compleja. Luego de la promulgación de la constitución quiteña en el mes de febrero de 1812 y la ruptura definitiva entre Montufaristas y Sanchistas, varias ciudades, que ya habían recibido y jurado la constitución de Cádiz, rechazaron el proyecto político quiteño. Tras la desmembración de la segunda junta, Montes inició su campaña de pacificación.

La política del experimentado Montes fue clave para la recepción de la constitución española en la Audiencia; El perdón y el olvido a los insurgentes de Quito,

<sup>210</sup> “Copia de las disposiciones dadas en el auto del Capitán General de Quito, para que se conozca la Constitución de la Monarquía Española en el corregimiento de Otavalo y su jurisdicción y se presente juramento de obediencia y reconocimiento de ella”, 10/07/1813, Otavalo. Archivo Nacional Ecuador (ANE), Fondo Corte Suprema (FCS), Serie Gobierno, Caja 73, Expediente 12, f. 1-1/r.

fueron elementos claves, sin los cuales, su acogida no hubiera sido la misma. Su política, débil ante los ojos realistas, le costó su amistad con Juan Sámano, pues este último, desobedeciendo las órdenes de Montes, no controló los excesos del ejército realista en la batalla de Ibarra.<sup>211</sup>

Bajo su autoridad se procedió a la publicación y jura de la constitución española en la Audiencia. Como señala Sevilla: “Una vez pacificada la Audiencia y, si bien en otras regiones hubo oposición a la Constitución y al centralismo gaditano, Quito la adoptó sin dificultad.”<sup>212</sup> Quito fue la expresión del éxito de la política pacifista de Montes. Luego de las ceremonias de proclamación y jura, Montes puso en marcha el plan de elecciones en la Audiencia.

## 2. Publicación de la Constitución gaditana en Otavalo

En el caso de Otavalo, la Constitución gaditana y las órdenes para ejecutarla llegaron desde Quito, mediante auto de Toribio Montes, el seis de julio de 1813. La responsabilidad de organizar la publicación y jura de la constitución se depositó en las autoridades del cabildo, siendo estas las encargadas de poner la fecha, el lugar y los recursos que disponían para llevar a cabo la jura.<sup>213</sup> El corregidor Rafael Maldonado fue el encargado de emitir la orden de publicación y jura de la constitución en Otavalo el 24 de julio. “Que haviendose resuelto por su Merced se publique la Constitución de la Monarquía remitida por las Cortes Generales y estraordinarias con toda la solemnidad pompa y aparato que el acto requiere”.<sup>214</sup> Además, se establecía, por orden de Montes, que el acto se lleve a cabo el mismo mes. “el día treinta del presente mes concurren a la Plaza mayor de este Asiento, que en lo sucesivo se nominará Plaza de la Constitución”<sup>215</sup>

El primer día, viernes 30 de julio de 1813, correspondiente a la ceremonia de publicación de la constitución, los habitantes de Otavalo se reunieron en la Plaza de la

---

<sup>211</sup> Daniel Gutiérrez Ardila, "La trayectoria política de Toribio Montes en América, 1804-1818", *Trashumante: Revista Americana de Historia Social*, n.º 16 (2020): 104-23.

<sup>212</sup> Sevilla Naranjo, *Fidelismo, realismo y contrarrevolución en la Audiencia de Quito*, 287.

<sup>213</sup> Decreto CXXXIX, de 18 de marzo de 1812, “Solemnidades con que debe publicarse y jurarse la Constitución política en todos los pueblos de la Monarquía, y en los ejércitos y armada: se manda hacer visita de cárceles con este motivo.”

<sup>214</sup> “Copia de las disposiciones dadas en el auto del Capitán General de Quito, para que se conozca la Constitución de la Monarquía Española en el corregimiento de Otavalo y su jurisdicción y se presente juramento de obediencia y reconocimiento de ella”, 10/07/1813, Otavalo. Archivo Nacional Ecuador (ANE), Fondo Corte Suprema (FCS), Serie Gobierno, Caja 73, Expediente 12, f. 1/r. La ortografía consta así en el original.

<sup>215</sup> *Ibíd.*, 1/r.

Constitución. Lo hicieron de manera corporativa, ya que en las mismas instrucciones se lo establecía, es decir, en tres cuerpos políticos bien definidos. En primer lugar, los curas, en segundo lugar, los servidores públicos y finalmente, los vecinos. La ceremonia reflejó la convivencia de lo nuevo y lo viejo. La publicación de la constitución se hizo de forma corporativa de acuerdo con estructuras simbólicas de antiguo régimen. Como diría Cabrera Hanna, la novedad gaditana se estableció en viejos ropajes.<sup>216</sup>

La religión católica fue clave en este proceso de transición a un nuevo orden. “Si bien se mira, en el caso gaditano, es la nación católica constitucionalmente definida la que (se) impone al entramado institucional de la Monarquía católica, que encuadra y ordena corporativamente a sus súbditos”.<sup>217</sup> En este sentido, hay que hacer hincapié en el juramento *per se*. Si aceptabas el juramento obligatorio eras premiado por Dios, mientras que si negabas el juramento obligatorio debías responder ante él por tus actos y, además, ante la ley. Bajo esta norma fundamental, el juramento se constituyó como un instrumento religioso sólido al servicio de la nación española. “La fe religiosa y la política se fundían en un único sistema de obediencia”<sup>218</sup>

Luego de la lectura de todos los artículos de la constitución empezaron las celebraciones.

En el primer día de la Publicación conclusa esta, botó el Magistrado bastante porción de dinero físico en moneda columnaria que fue cojida por la Plebe. El Retrato del Soberano Nuestro muy amado Señor Don Fernando Séptimo lo mandó velar las noches, con Candelas en el Trono que se formó en la Plaza donde se hallo congregada la Gente con música; repiques, iluminación, y demás demostraciones de amor, lealtad y alboroto.<sup>219</sup>

Se pueden observar varios detalles que permiten comparar los rituales del momento gaditano con otros de antiguo régimen. Por ejemplo, el arrojar dinero es un detalle que se puede apreciar en ceremonias anteriores a la publicación de la constitución. En este caso, en Nueva España, el uso de monedas se puede observar en la ceremonia de sucesión del Trono en favor de Fernando VII: “el intendente y algunos de sus oficiales arrojaban al pueblo monedas troqueladas con el busto del nuevo monarca”.<sup>220</sup> También

---

<sup>216</sup> Cabrera Hanna, «Ciudadanía gaditana...», 11.

<sup>217</sup> Garriga, «Cabeza moderna, cuerpo...», 139.

<sup>218</sup> Morelli, *Territorio o Nación: Reforma y disolución del espacio imperial en Ecuador, 1765-1830*, 103.

<sup>219</sup> “Copia de las disposiciones dadas en el auto del Capitán General de Quito, para que se conozca la Constitución de la Monarquía Española en el corregimiento de Otavalo y su jurisdicción y se presente juramento de obediencia y reconocimiento de ella”, 10/07/1813, Otavalo. Archivo Nacional Ecuador (ANE), Fondo Corte Suprema (FCS), Serie Gobierno, Caja 73, Expediente 12, f. 3/r.

<sup>220</sup> Cárdenas Gutiérrez, “De las juras reales al juramento constitucional: tradición e innovación en el ceremonial novohispano, 1812-1820”, 70.

podemos observar estos detalles en la ceremonia de publicación de la constitución en los pueblos peninsulares. “En Almazán, los capitulares del Ayuntamiento esparcieron y tiraron a la multitud congregada bajo el tablado en donde se encontraban sentados para oír la ceremonia ...una porción de monedas para dar muestras de su alegría y contento”<sup>221</sup>

El retrato de Fernando VII, representaba, por una parte, la ausencia física y lejanía del monarca. Por otra, representaba su presencia simbólica en la dimensión local, lo cual, reafirmaba el control y autoridad sobre sus dominios. El establecimiento de un trono sobre el cual se depositaba el retrato del rey tenía un valor simbólico y propagandístico que expresaba, bajo el nuevo orden constitucional, el restablecimiento de Fernando VII a su lugar correspondiente, a su trono. En este caso, se puede observar que la soberanía emanada por el monarca se asimila y convive con la emanada desde la dimensión local. Hay una demostración poderosa de fidelismo al monarca, lo cual hace pensar que, las celebraciones de publicación y jura son expresión de su voluntad.

Protagonista ausente, su retrato estaba presente por doquier y era objeto de veneración. Así, la imagen del monarca, protegida por una guardia de honor cual, si se hubiese tratado de la propia persona del rey, era regularmente acompañada de la propia constitucional y de las insignias reales.<sup>222</sup>

De acuerdo con Sevilla, el ritual de publicación de la constitución española en el contexto quiteño y riobambeño tuvo características similares.<sup>223</sup> Analicemos la descripción de la promulgación de la constitución en Quito:

En el remate del templo estaba pintada la Fama con la inscripción aragüesa: dulce es la concordia, y unión del príncipe con el Pueblo. El respetable retrato de nuestro cautivo amadísimo Fernando VII guarnecido de una brillante moldura ovalada ocupaba un corto espacio en la frontera del Templo: al pie del Trono en que fijaba el real retrato, estaban dos estatuas con los rostros inclinados hacia el Monarca, simbolizado a las dos América rendidas de amor a su antigua dominación, o a la Nación Español estrechamente unida con la América, como parte integrante, y muy principal que compone el Reino de la Monarquía. [...] la real imagen estaba custodiada de dos soldados granaderos qué bien vestidos y con mucha circunspección hacían centinela...<sup>224</sup>

A diferencia de los pueblos peninsulares, todos los elementos simbólicos descritos como retratos, bustos y estatuas hacen mayor referencia al rey ausente, a su autoridad tradicional que a la propia constitución gaditana. En la descripción de Quito, como se

---

<sup>221</sup> Lorente Sariñena, «El Juramento Constitucional» ..., 613.

<sup>222</sup> Morelli, *Territorio o Nación: Reforma y disolución del espacio imperial en Ecuador, 1765-1830*, 103.

<sup>223</sup> Sevilla Naranjo, *Fidelismo, realismo...*, 288-92.

<sup>224</sup> Luis Felipe Borja, “Breve Relación de los Regocijos que han acaecido en esta ciudad, con motivo de haberse publicado la Constitución Nacional de la monarquía española. El fruto de la concordia y la justicia del Rey es la paz de los pueblos”, citado en Sevilla Naranjo, *Fidelismo, realismo...*, 289.

puede apreciar, la ausencia es notable. Por otra parte, en la descripción de las celebraciones que realiza Francisco de la Coba, escribano público de Otavalo, vemos que el rey es protagonista. Mientras hay una ausencia física y simbólica considerable de la constitución española.<sup>225</sup>

De igual forma, como señala Lomné, luego de la independencia, en la etapa colombiana, surge el culto a Bolívar como el libertador y cuyo simbolismo utilizado es similar al de antiguo régimen. Bolívar significó para la República de Colombia lo que Fernando VII para el antiguo régimen. La ritualidad y el simbolismo de antiguo régimen fueron claves para la transición hacia aquel orden político.<sup>226</sup>

La ceremonia de publicación de la constitución gaditana, en los pueblos peninsulares, tuvo, de acuerdo con los testimonios escritos, mayor simbolismo en cuanto a la constitución *per sé* que al propio monarca. En Noia, “el espacio que ocupaba el retrato regio estaba adornado con cuatro medallones en los que se incluyeron unos exámetros latinos compuestos por Manuel Armero alusivos a la Constitución”.<sup>227</sup> En Santiago, “se levantó un templete en la plaza mayor dedicado a la Constitución y en el que también se colocó un retrato de Fernando VII”.<sup>228</sup> En estos casos se puede apreciar que se da más importancia a la constitución que al monarca, es decir, se demostraba simbólicamente que la soberanía no radicaba en el rey sino en la Nación española.

De acuerdo con el decreto de las Cortes, luego de publicar la constitución, se debía proceder con el repique de campanas, iluminación y salvas de artillería donde fuera posible.<sup>229</sup> En el caso de Otavalo, como en otros espacios de la Nación española, se iluminó la plaza en la noche y hubo repique de campanas.<sup>230</sup> Al siguiente día, el treinta y uno de julio, se ordenó la visita de cárceles.

En todos los pueblos de la Monarquía, se hará una visita general de cárceles por los Tribunales respectivos, y serán puestos en libertad todos los presos que lo estén por delitos

---

<sup>225</sup> “Copia de las disposiciones dadas en el auto del Capitán General de Quito, para que se conozca la Constitución de la Monarquía Española en el corregimiento de Otavalo y su jurisdicción y se presente juramento de obediencia y reconocimiento de ella”, 10/07/1813, Otavalo. Archivo Nacional Ecuador (ANE), Fondo Corte Suprema (FCS), Serie Gobierno, Caja 73, Expediente 12, f. 3/r.

<sup>226</sup> Georges Lomné, «El “espejo roto” de la Colombia bolivariana (1820-1850)», en *Inventando la nación. Iberoamérica siglo XIX* (México: Fondo de Cultura Económica, 2005), 492.

<sup>227</sup> López, «“Hablar a la imaginación”. las ceremonias...», 151.

<sup>228</sup> *Ibíd.*, 153.

<sup>229</sup> Decreto CXXXIX, de 18 de marzo de 1812, “*Solemnidades con que debe publicarse y jurarse la Constitución política en todos los pueblos de la Monarquía, y en los ejércitos y armada: se manda hacer visita de cárceles con este motivo.*”

<sup>230</sup> “Copia de las disposiciones dadas en el auto del Capitán General de Quito, para que se conozca la Constitución de la Monarquía Española en el corregimiento de Otavalo y su jurisdicción y se presente juramento de obediencia y reconocimiento de ella”, 10/07/1813, Otavalo. Archivo Nacional Ecuador (ANE), Fondo Corte Suprema (FCS), Serie Gobierno, Caja 73, Expediente 12, f. 3.

que no merezcan pena corporal: como también cualesquiera otros reos, que apareciendo de su causa que no se les puede imponer pena de dicha clase, presten fianza con arreglo al artículo 296 de la constitución.<sup>231</sup>

La facultad de indultar a los presos, de acuerdo con el artículo 171, apartado 13 de la constitución, fue concebida como una facultad exclusiva del monarca: “Indultar a los delincuentes, con arreglo a las leyes”.<sup>232</sup> Esto nos muestra que pese a ser promulgada la constitución gaditana, el rey seguía ejerciendo el papel de líder de la monarquía,<sup>233</sup> y que, una vez publicada la carta magna, inmediatamente, a través del indulto, se daba una demostración tradicional del poder del monarca.

### 3. Juramento de la Constitución de Cádiz en Otavalo

Es preciso esclarecer que la ceremonia de publicación de la constitución no es la misma que la de la jura. La primera ceremonia, tuvo como objetivo dar a conocer el contenido de la constitución española de forma oral, mientras que la segunda fue en la cual efectivamente se llevó a cabo el juramento.

¿Por qué jurar la Constitución? Por la necesidad que conllevó su promulgación. Para ello, el fidelismo jugó un papel fundamental, pues como ya se mencionó, la constitución fue publicada como expresión de la voluntad regia. Mediante la jura se legitimó el cambio de un cuerpo político viejo a uno nuevo. A través de este ritual se incorporó, en los territorios de América, nuevos individuos a la Nación Española, y a su vez, en los territorios peninsulares, se redefinió esta pertenencia previa.<sup>234</sup> Además, la necesidad de solemnidades en el ritual radica en que éste transforma los viejos cuerpos políticos de antiguo régimen en nuevas instituciones de carácter liberal. En otras palabras, el ritual legitima el cambio de orden político y habilita jurídicamente a los nuevos ayuntamientos.<sup>235</sup>

Como los nuevos ayuntamientos constitucionales tienen un basamento nominal de individuos políticamente activos, su erección supone la diseminación de la soberanía en

---

<sup>231</sup> Decreto CXXXIX, de 18 de marzo de 1812, “*Solemnidades con que debe publicarse y jurarse la Constitución política en todos los pueblos de la Monarquía, y en los ejércitos y armada: se manda hacer visita de cárceles con este motivo.*”

<sup>232</sup> Constitución política de la monarquía española, título IV, capítulo I, art 71, apartado 13.

<sup>233</sup> Juan Luis Requejo Pagés, “Amnistía e indulto en el constitucionalismo histórico español”, *Historia Constitucional*, 2001., 85-6.

<sup>234</sup> Carlos Garriga, “Cabeza moderna, cuerpo gótico. La Constitución de Cádiz y el orden jurídico”, en *Anuario de historia del derecho español*, tomo LXXXI (Madrid: AHDE, 2011), 139.

<sup>235</sup> *Ibíd.*, 140.

ciertos lugares y en otros no, porque la noción de ciudadanía es determinada, en la práctica, no por la constitución, sino por las leyes de la costumbre. En este sentido, el juramento, ante los ojos de los funcionarios y la figura simbólica del rey, ratifica fidelismo entre el vecino-ciudadano y el monarca y la constitución. Pero no solo se jura para mostrar fidelismo al rey, sino para legitimar la soberanía territorial frente a otros espacios, es decir, hay una doble dispersión, hacia afuera y hacia adentro. De esta manera se disemina la soberanía y, a través del juramento, ésta se refuerza a nivel local. En otras palabras, la relación España-América y monarca-cabildo cambian. Ahora, la soberanía local cobra fuerza con relación a otros territorios y regiones de los mismos distritos y las mismas provincias, al igual que en otras regiones de la nación española. A través del juramento, los pueblos ahora soberanos de la nación española lo son en relación con otros y en relación con la figura ausente del monarca.

Hay que enfatizar el carácter obligatorio del juramento constitucional y que, si fuera el caso, alguien se atreviese a rechazar la constitución, sería excluido de la sociedad. Todos los habitantes debían obedecer ciegamente las instrucciones. De esta manera se ordenó que todos, sin excepción alguna, debían concurrir a la plaza matriz: los curas párrocos con todo el clero secular y regular; empleados de Real Hacienda, escribanos públicos y demás empleados públicos; y los vecinos de cualquier clase social. Todos ellos debían reunirse para escuchar y entender la constitución que se les imponía.<sup>236</sup> De esta manera, el espacio público se torna en un instrumento del nuevo orden político que se traslapa con el tradicional, pues en él se diseminan los valores modernos.

En el caso de Otavalo, al igual que muchos pueblos de América, en contraste con los peninsulares, resulta difícil creer que semanas previas a la promulgación y jura de la constitución hubo este esfuerzo de pedagogía política para que sus habitantes conozcan, al menos en lo esencial, lo que iban a jurar. Si la difusión de la información resultó compleja en el territorio peninsular y tomando en cuenta los altos niveles de analfabetismo de su población, no habría razones para creer que en Otavalo hubo tal difusión, teniendo en cuenta que era un pueblo con mayor analfabetismo. Un claro ejemplo es presentado por Chiaramonti para el caso peruano: “Algunas comunidades indígenas no quisieron jurar la Constitución, pues creían de esta manera legitimar la

---

<sup>236</sup> “Copia de las disposiciones dadas en el auto del Capitán General de Quito, para que se conozca la Constitución de la Monarquía Española en el corregimiento de Otavalo y su jurisdicción y se presente juramento de obediencia y reconocimiento de ella”, 10/07/1813, Otavalo. Archivo Nacional Ecuador (ANE), Fondo Corte Suprema (FCS), Serie Gobierno, Caja 73, Expediente 12, f. 1/r.

obligación de volver a pagar el tributo”.<sup>237</sup> En este caso, se puede observar que no hay un grado de divulgación, pero si rumores que dan paso a una interpretación errónea de lo que la carta constitucional promulgaba. “Ni autoridades, ni corporaciones, ni españoles, vecinos o pueblos pudieron decir absolutamente nada respecto del texto constitucional: para todos ellos, la obra de las Cortes generales y extraordinarias resultó ser un texto indisponible”.<sup>238</sup> En todo caso, la constitución fue jurada en Otavalo conforme a las instrucciones de la Regencia.

Luego de la visita de cárceles, el primero de agosto de 1812, se procedió con el juramento constitucional. De acuerdo con las instrucciones de la Regencia, el pueblo debía reunirse por corporaciones en la iglesia matriz de Otavalo,<sup>239</sup> luego, el cura debía celebrar una misa solemne. “Se leerá la constitución antes del ofertorio”.<sup>240</sup> Según López, este constituye uno de los cambios más significativos, la proclamación al rey tomaba un segundo plano en las ceremonias religiosas, y en lugar de ello, la lectura de la constitución gaditana tomaba preeminencia.<sup>241</sup> La lectura estaba a cargo del cura o de alguna persona designada por este y adicionalmente se debía exhortar a los fieles su ciega obediencia.<sup>242</sup>

Una vez terminada la misa solemne se debía jurar la constitución. La manera exacta cómo debía hacerse este ritual es el siguiente: “¿Jurais por Dios y por los Santos Evangelios guardar la Constitución política de la Monarquía Española, sancionada por las Cortes generales y extraordinarias de la Nación, y ser fieles al Rey?”.<sup>243</sup> En Otavalo, de acuerdo con el testimonio de Francisco de la Coba, escribano público, se respondió al juramento de la siguiente forma: “A lo que respondieron todos los concurrentes: si Juramos; luego se cantó el Tedeum”.<sup>244</sup> El Tedeum era una cántico por el cual se expresaba agradecimiento a Dios. De todo lo ocurrido durante la ceremonia se debía

<sup>237</sup> Chiaramonti, “Ensayando nuevos derechos: elecciones gaditanas...”, 319.

<sup>238</sup> Marta María Lorente Sariñena, “El Juramento Constitucional...”, 606.

<sup>239</sup> “Copia de las disposiciones dadas en el auto del Capitán General de Quito, para que se conozca la Constitución de la Monarquía Española en el corregimiento de Otavalo y su jurisdicción y se presente juramento de obediencia y reconocimiento de ella”, 10/07/1813, Otavalo. Archivo Nacional Ecuador (ANE), Fondo Corte Suprema (FCS), Serie Gobierno, Caja 73, Expediente 12, f. 2.

<sup>240</sup> Decreto CXXXIX, de 18 de marzo de 1812, “*Solemnidades con que debe publicarse y jurarse la Constitución política en todos los pueblos de la Monarquía, y en los ejércitos y armada: se manda hacer visita de cárceles con este motivo.*”

<sup>241</sup> López, «“Hablar a la imaginación”. las ceremonias...», 161.

<sup>242</sup> Decreto CXXXIX, de 18 de marzo de 1812, “*Solemnidades con que debe publicarse y jurarse la Constitución política en todos los pueblos de la Monarquía, y en los ejércitos y armada: se manda hacer visita de cárceles con este motivo.*”

<sup>243</sup> *Ibíd.*

<sup>244</sup> “Copia de las disposiciones dadas en el auto del Capitán General de Quito, para que se conozca la Constitución de la Monarquía Española en el corregimiento de Otavalo y su jurisdicción y se presente juramento de obediencia y reconocimiento de ella”, 10/07/1813, Otavalo. Archivo Nacional Ecuador (ANE), Fondo Corte Suprema (FCS), Serie Gobierno, Caja 73, Expediente 12, f. 3.



tomar testimonio por parte de Francisco de la Coba para remitir su cumplimiento a Toribio Montes.<sup>245</sup>

Cabe mencionar de acuerdo con Lorente, ni vecinos, ni españoles juraron la constitución gaditana de manera exclusiva. El juramento se dio como se lo hacía en el antiguo régimen, como una ceremonia eclesiástica común. “Las categorías jurídicas excluyentes, tanto la de español como la de vecino, no jugaron a la hora de negar la entrada a la ceremonia eclesiástica a quienes solían compartirla.”<sup>246</sup> El papel de los curas fue fundamental en las ceremonias de jura. Tanto en los pueblos peninsulares como americanos, curas, escribanos y pregoneros, muchas veces, tuvieron que servir de traductores de la constitución. “En Oñate... se leyó la Constitución en la forma acostumbrada por el cura párroco, quien, concluida la lectura de esta, hizo en lengua vulgar bazcongada al auditorio correspondientes a las circunstancias presentes relativas a la mencionada Constitución”.<sup>247</sup> En el caso peruano como señala Chiaramonti: “para su mayor conocimiento y mejor comprensión, pregoneros conocedores del español y del quechua recorrieron las calles y el texto fue leído en idioma índico”.<sup>248</sup>

De acuerdo con las instrucciones de Rafael Maldonado, el escribano público Francisco de la Coba fue asignado como el encargado de visitar los nueve pueblos de Otavalo acompañado de comisionados para que en cada uno de ellos se publique y jure la constitución.

Para los de Cotacache, y Atuntaqui al Caballero Don Antonio Jijón, para los de Tumbabiro y Urcuquí a Don Joaquín Ribadeneyra, para el de San Pablo el Justiciamayor de este Asiento Don Cayetano Jaramillo; para los de Cayambe y Cangagua a Don Ramón de Borja; y para los de Tavacundo, y Tocache a Don Isidro Flores a quienes se les delega las facultades de Magistrados, con todos los privilegios necesarios de autoridad, a fin de que compelan a los Parroquianos de Cada Pueblo al exacto cumplimiento de sus deberes.<sup>249</sup>

Al final, el escribano debía llevar un testimonio por triplicado para rendir cuenta a Toribio Montes.

---

<sup>245</sup> *Ibíd.*, 2r.

<sup>246</sup> Lorente Sariñena, “El Juramento Constitucional” ..., 615.

<sup>247</sup> *Ibíd.*, 617.

<sup>248</sup> Chiaramonti, “Ensayando nuevos derechos: elecciones gaditanas...”, 319.

<sup>249</sup> “Copia de las disposiciones dadas en el auto del Capitán General de Quito, para que se conozca la Constitución de la Monarquía Española en el corregimiento de Otavalo y su jurisdicción y se presente juramento de obediencia y reconocimiento de ella”, 10/07/1813, Otavalo. Archivo Nacional Ecuador (ANE), Fondo Corte Suprema (FCS), Serie Gobierno, Caja 73, Expediente 12, f. 2/3. La ortografía consta así en el original.

Una vez finalizada la jura de la Constitución, por llevarse a cabo de la mejor manera, se dispuso que haya una corrida de toros en la ahora llamada plaza de la Constitución el martes 3 de agosto de 1813. “Excediéndose el magistrado en disponer las demás funciones de alegría que él, y sus súbditos disfrutamos mediante su infatigable ejemplo de fidelidad y amor al soberano”.<sup>250</sup> Aquí se hace referencia al magistrado de Otavalo Don Cayetano Jaramillo, el mismo que arrojó dinero en la ceremonia de publicación de la Constitución, y que, además, era el delegado para la publicación y jura de la constitución en San Pablo.

Las fiestas constituyeron un elemento esencial en la legitimación del nuevo orden político. Pero estas fiestas siguieron siendo de antiguo régimen. El repique de campanas, iluminación de plazas, el disparo de cañones y salvas de fusiles, la música y danzas, fuegos artificiales y corrida de toros son elementos comunes que se encuentran en las juras de Carlos IV y Fernando VII en Santiago.<sup>251</sup> De la misma forma se encuentran estos elementos en Lima como puntos clave para legitimar el poder y reafirmar el estatus social luego de la catástrofe de 1746.<sup>252</sup> En el contexto gaditano, en Nueva España,<sup>253</sup> siguen siendo los mismos elementos los que, después de la jura, cierran la ceremonia. En la Real Audiencia de Quito, de acuerdo con Sevilla, los rituales de publicación y juramento en Quito y Riobamba no presentan grandes cambios con los de antiguo régimen.<sup>254</sup> Varios de los elementos ya mencionados se repiten en las fiestas en honor a la coronación de Carlos IV.<sup>255</sup>

Es así como la carta constitucional gaditana fue recibida en Otavalo. De acuerdo con Chiaramonti, la constitución fue recibida en un contexto tradicional que lejos de transformar las nociones de comunidad y corporativismo, las ratificó.<sup>256</sup> El intento de cambiar a los indios en sentido individual por sobre el comunitario viene, como punto de referencia, desde el reformismo borbónico. A pesar de los esfuerzos por cambiar esta realidad, el pago del tributo, del cual dependía la sociedad colonial, fue factor determinante para que la estructura comunitaria se mantenga. “Pagar el tributo al Estado

---

<sup>250</sup> Ibíd, 3/r.

<sup>251</sup> Isabel Cruz de Amenábar, "Tiempos fabulosos y mito de origen: Festividades de estado en Chile entre la colonia y la república", *Open Edition Books*, 2003, <https://books.openedition.org/ifea/4474>.

<sup>252</sup> Susy Sánchez Rodríguez, "Apelando a la caridad y a las diversiones. Una aproximación a la reconstrucción de la ciudad de Lima después del terremoto de 1746", *Open Edition Books*, 2003, <https://books.openedition.org/ifea/4485>.

<sup>253</sup> Cárdenas Gutiérrez, "De las juras reales al juramento constitucional...", 83.

<sup>254</sup> Sevilla Naranjo, *Fidelismo, realismo y contrarrevolución...*, 289.

<sup>255</sup> Véase Alexandra Kennedy Troya, "La fiesta barroca en Quito", *Procesos: Revista ecuatoriana de historia*, n° 9 (1996): 15-7.

<sup>256</sup> Chiaramonti, "Ensayando nuevos derechos: elecciones gaditanas...", 319.

significaba beneficiarse a su vez de toda una serie de derechos, que habían procurado a los indios la posibilidad de crear nuevas formas de organización política, económica y social, y de reproducir el sistema comunitario”.<sup>257</sup> Tanto la ceremonia de publicación como la de jura, ratifican rasgos de una sociedad de antiguo régimen que recibe una nueva normativa constitucional con rituales donde predomina el corporativismo bajo la venia de la religión católica.

#### 4. Rupturas y continuidades en los rituales del momento gaditano

Al analizar los testimonios escritos que permiten reconstruir los rituales de publicación y jura de la constitución gaditana, se puede encontrar elementos característicos de las sociedades de antiguo régimen. Estas características que ya no son de antiguo régimen, pero que tampoco lo son, en sentido estricto, modernas, son las que configuran el momento gaditano en el orbe hispano.

Como ya se ha mencionado, los rituales de publicación y jura de la constitución española sirvieron para legitimar un nuevo orden político. En este sentido, es preciso analizar los elementos que subyacen en estos rituales para tratar de comprender cómo se va construyendo este nuevo imaginario.

Para comprender las rupturas y continuidades en los rituales del momento gaditano sigo a Antonio Annino,<sup>258</sup> quien usa el término *asimilación* para explicar las lógicas procesales de la convivencia entre antiguo régimen y modernidad, y que a su vez es una reinterpretación del término *hibridación* empleado por François Xavier Guerra.<sup>259</sup>

En primer lugar, la naturaleza del juramento demuestra un discurso moderno que es legitimado, en la práctica, por hábitos de una sociedad corporativa. Es decir, la constitución gaditana y el decreto de 18 de marzo indicaban que el ritual se debía realizar con la lógica individuo-ciudadano, pero en realidad no juró la constitución un individuo como tal, sino que lo hizo un vecino-ciudadano que representaba a una parroquia, es decir, a una institución de antiguo régimen que no solo regulaba el territorio, sino también, la vida religiosa y social de sus habitantes.

Hay que tener presente la idea de asimilación tanto en los rituales de publicación y jura de la constitución, como en los procesos electorales. Si bien las leyes tienden a

---

<sup>257</sup> Morelli, *Territorio o Nación: Reforma y disolución...*, 170.

<sup>258</sup> Annino, "La ruralización de lo político", 236.

<sup>259</sup> Guerra, *Modernidad e Independencias, Ensayos sobre las revoluciones hispánicas*. 32-3 y 93.

configurar a las almas desde lo individual, las prácticas culturales y electorales demuestran lo contrario. “la Nación fue imaginada siempre como una unidad entre hombres liberados de sus vínculos particulares y representados en una asamblea igualmente sin vínculos.”<sup>260</sup> En realidad, los vecinos-ciudadanos activos y pasivos, se configuraron como individuos en tanto representaban corporaciones. Solo existieron en tanto poseían un vínculo con la sociedad.<sup>261</sup> En ese orden de ideas, se puede ver cómo la normativa promulgada por las leyes es asimilada en la práctica por las sociedades de antiguo régimen.

De acuerdo con el testimonio de Francisco de la Coba, escribano público de Otavalo, se puede observar que no se emplea el término ciudadano en el momento de delegar los comisionados para la publicación y jura, sino parroquiano: “con todos los privilegios necesarios de autoridad, a fin de que compelan a los Parroquianos de Cada Pueblo al exacto cumplimiento de sus deberes”.<sup>262</sup> Además, se emplea el término privilegio, el cual, no representa un lenguaje político moderno sino de antiguo régimen.

Siguiendo las ideas de costumbre y tradición de Hobsbawm,<sup>263</sup> los rituales para legitimar el nuevo orden político gaditano tenían que dar la apariencia de continuidad. Por eso al comparar rituales de antiguo régimen con el momento gaditano vemos que pesó más la tradición. Los pueblos de Otavalo tuvieron que asimilar la constitución española con el peso de la costumbre. El ritual gaditano tenía como objetivo que los habitantes de Otavalo juren fidelidad a la constitución en lugar del rey. Pero en la práctica el fidelismo al rey se mostró intacto.

En segundo lugar, el juramento constitucional se llevó a cabo como un acto religioso. Hay que tener claro que la constitución española se juró en forma similar en el orbe hispano, más no en igual forma. El imaginario usado en la publicación y jura de la constitución está articulado a la preeminencia de la religión católica, la cual, configura al vecino de antiguo régimen en el vecino-ciudadano gaditano miembro de una institución religiosa. En tal virtud, el componente religioso usado en los rituales gaditanos refuerza la idea de un nuevo pacto político que refuerza la tradicional relación contractual entre el

---

<sup>260</sup> Annino, "El voto y el siglo XIX desconocido", 4.

<sup>261</sup> *Ibíd.*, 3-4.

<sup>262</sup> “Copia de las disposiciones dadas en el auto del Capitán General de Quito, para que se conozca la Constitución de la Monarquía Española en el corregimiento de Otavalo y su jurisdicción y se presente juramento de obediencia y reconocimiento de ella”, 10/07/1813, Otavalo. Archivo Nacional Ecuador (ANE), Fondo Corte Suprema (FCS), Serie Gobierno, Caja 73, Expediente 12, f. 2-2r. La ortografía consta así en el original.

<sup>263</sup> Erick Hobsbawm y Terence Ranger, *La Invención de la Tradición* (Barcelona: Critica, 2012) 7-21.

rey y sus vasallos. Tanto la fe como el fidelismo, como elementos que legitiman un nuevo orden político, se perciben en todas las ceremonias gaditanas como rasgos de continuidad política.

Todo indica que llevar a cabo un ritual de viejo régimen que legitime un nuevo orden político tiene que ver con el problema de representación de la autoridad. Ante la ausencia del rey, el cual, en los pueblos de América, sigue siendo figura importante dentro de los rituales gaditanos, cabría preguntarse si ¿el simbolismo regio de autoridad fue o no desplazado a un segundo plano por la religión católica y por la propia constitución? En el caso de Otavalo, en mi opinión, y de acuerdo con las fuentes, el simbolismo de autoridad del rey no fue desplazado.

Habiendo recibido su merced: el Señor Don Rafael Maldonado y León Regidor perpetuo del ilustre cabildo de Quito, Corregidor, y Justicia maior de este Lugar la Constitución expedida por las Cortes Generales y extraordinarias, estando de pie la tomó con el respeto debido como propia carta del rey, Señor Natural.<sup>264</sup>

Desde el momento que la constitución española llegó a Otavalo, no se la consideró como la nueva representación simbólica de autoridad, sino como una dádiva que otorgaba el rey. El amor y la fidelidad al soberano fueron los elementos que predominaron en la plaza de la constitución, la cual, lució ausente de simbolismo hacia la carta gaditana. Las celebraciones que se dieron luego de los rituales exaltan el fidelismo hacia la figura del monarca como en épocas anteriores.

Como señala Pablo Ortemberg, la presencia de los escribanos para dar testimonio por triplicado de los rituales gaditanos constituye una diferencia respecto al antiguo régimen. A la vez que se dispersa la soberanía, se burocratiza la lealtad.<sup>265</sup> Por ello se designaba que el escribano debía visitar todos los pueblos a los que fue designado y tomar testimonio. En Otavalo, esta tarea se designó a Francisco de la Coba, que debía llevar testimonio de los nueve pueblos de Otavalo.

En tercer lugar, el lenguaje político, que se puede observar en las ceremonias de publicación y jura de la carta española, especialmente en la celebración del *Te Deum*, es impuesto. De acuerdo con Margarita Garrido, la combinación de prácticas y discursos de

---

<sup>264</sup> “Copia de las disposiciones dadas en el auto del Capitán General de Quito, para que se conozca la Constitución de la Monarquía Española en el corregimiento de Otavalo y su jurisdicción y se presente juramento de obediencia y reconocimiento de ella”, 10/07/1813, Otavalo. Archivo Nacional Ecuador (ANE), Fondo Corte Suprema (FCS), Serie Gobierno, Caja 73, Expediente 12, f. 3. La ortografía consta así en el original.

<sup>265</sup> Ortemberg, “Cádiz en Lima: De las fiestas absolutistas a las fiestas constitucionalistas en la fundación simbólica de una nueva era”, 467.

antiguo régimen con el discurso político moderno dieron sentido al momento gaditano, pero esta combinación fue conflictiva, por ello menciona que se dan *campos de contienda* de las representaciones.<sup>266</sup> En el caso de Otavalo, el lenguaje político gaditano entró en un proceso de asimilación forzosa, pero el hecho de que sea forzosa no implica una contienda de las representaciones. En mi opinión, el lenguaje político gaditano fue asimilado en las ceremonias religiosas, en las iglesias, en donde fe, fidelismo y constitución no luchan entre sí, sino que se funden con un mismo propósito, legitimar un nuevo orden político. Para dicho propósito la lectura de la constitución española en la mitad de la misa y su explicación para obedecerla fue clave. No quiere decir que en otros espacios públicos no se hayan diseminado los valores gaditanos, pero en las plazas lo que primó fueron las fiestas, y como ya se ha mencionado, fueron celebraciones de antiguo régimen. Luego de la asimilación forzosa llegó el momento de la acomodación, en la cual los habitantes de Otavalo, que ya escucharon las lecturas de la constitución y su explicación, acomodan sus esquemas mentales para asimilar los valores modernos.

Finalmente, La noción de soberanía que se puede observar en la constitución gaditana no es la misma que se percibe en las fiestas llevadas a cabo después de los rituales porque los pueblos no la conciben de esa forma. “La soberanía del pueblo de la época revolucionaria será muy a menudo pensada y vivida no como la soberanía de una nación unitaria, sino como la de los «pueblos», la de esas comunidades de tipo antiguo que son los reinos, las provincias o las municipalidades”.<sup>267</sup> En este sentido, no se puede hablar de soberanía sino de soberanías, la convivencia de la idea de que tanto el rey como el pueblo son titulares de ella, dan al momento gaditano una complejidad que solo puede ser respondida desde la especificidad.

En teoría, el momento gaditano se caracterizó por exaltar la soberanía de la nación expresada en la constitución. Pero los lugares en los cuales se legitimó la soberanía fueron las iglesias, pues en ellas se leyó su contenido como si fuera un texto sagrado. El sermón de los curas dentro de la iglesia fue mucho más eficiente que la lectura de la constitución en una plaza, pues como ya se mencionó, la fe religiosa y la política se fundían con un mismo propósito. Además, se debe mencionar que el escribano, a la vez que el cura

---

<sup>266</sup> Margarita Garrido, "Nueva Granada entre el orden colonial y el republicano: lenguaje e imaginarios sociales y políticos", en *Las Independencias hispanoamericanas. Interpretaciones 200 años después* (Bogotá-Colombia: Norma, 2009). 93-4.

<sup>267</sup> Guerra, *Modernidad e Independencias, Ensayos sobre las revoluciones hispánicas...* 34.

exhortaba la obediencia de la constitución, tomaba nota de todo lo que sucedía y, llegado el momento, el pueblo reunido debía jurar frente a él.

No es difícil concluir que, si la soberanía moderna, que fue producto de acalorados debates entre los diputados españoles y americanos, se legitimó corporativamente, y aparentemente sin mayores problemas. Las elecciones gaditanas, a diferencia de los rituales de publicación y jura, presentan conflictos en donde los valores modernos, llevados a la práctica, generan disparidades de diversa índole dependiendo de donde se los aplique y bajo sus lógicas locales.

## **5. Elecciones gaditanas en Otavalo**

Luego de la celebración de los rituales de publicación y jura de la constitución, se puso en marcha el proceso electoral conforme lo establecía la constitución gaditana y el plan de elecciones de Toribio Montes. Las elecciones eran indirectas y estaban constituidas por dos procesos electorales distintos; el primero de ellos, “del gobierno interior de las provincias y de los pueblos,”<sup>268</sup> el cual hacía referencia a la elección de autoridades de los ayuntamientos constitucionales; el segundo, “del nombramiento de diputados de cortes,”<sup>269</sup> el cual debía designar las autoridades de las diputaciones provinciales y los diputados de Cortes.

Ambos procesos electorales estaban constituidos por grados o etapas. Para las elecciones del ayuntamiento había dos grados, el primero, en el cual participaban los vecinos-ciudadanos de cada parroquia, tenía por objetivo nombrar electores de parroquia; el segundo, en el cual, los electores parroquiales debían elegir las autoridades del ayuntamiento, es decir, alcaldes, regidores y procuradores síndicos. Las autoridades del cabildo celebraban elecciones cada año, generalmente, los primeros días de enero.

Para las elecciones de los diputados provinciales y de Cortes había cuatro grados, en primer lugar, los vecinos-ciudadanos votaban para seleccionar compromisarios; en segundo lugar, los compromisarios elegían a los electores parroquiales; en tercer lugar, los electores de parroquia designaban a los electores de partido; y, por último, los electores de partido elegían tanto a los diputados provinciales como a los diputados de

---

<sup>268</sup> Constitución política de la monarquía española, título VI, capítulo I.

<sup>269</sup> Constitución política de la monarquía española, título VI, capítulo II.

Cortes.<sup>270</sup> Para designar diputados se debía celebrar elecciones cada dos años y estas se llevarían a cabo en el mes de febrero.

El primer proceso electoral tuvo como objetivo nombrar las autoridades del ayuntamiento, las cuales eran, dos alcaldes, ocho regidores y dos procuradores síndicos.<sup>271</sup> El segundo, debía nombrar siete diputados y dos suplentes para la diputación provincial; y seis diputados y dos suplentes para las Cortes.<sup>272</sup>

Como se dijo en el primer capítulo, la Real Audiencia de Quito no tuvo una junta preparatoria que organice las elecciones, por ello el plan de elecciones de Toribio Montes cubrió esa carencia. No hay una respuesta clara para la omisión de Quito en el decreto CLXII de 23 de mayo de 1812 como sede de una junta preparatoria para organizar las elecciones constitucionales,<sup>273</sup> sin embargo, la provincia de Quito, por decreto CLXIV del mismo día, fue designada como una de las diez y nueve diputaciones provinciales.<sup>274</sup>

Con la promulgación de la constitución de Cádiz, se procedió a reorganizar el territorio en función de los procesos electorales. “Apenas un mes más tarde se hizo un primer ajuste, el cual dio a Quito una diputación provincial propia. De esta manera, la Real Audiencia y antiguo reino de Quito pasaba a ser la Provincia de Quito”.<sup>275</sup> La Provincia, a su vez, dividía su territorio en distritos o partidos.

De acuerdo con Rodríguez, la población que podía participar en los comicios era de cuatrocientas mil personas.<sup>276</sup> En base a este número de votantes se estableció el número de diputados en Cortes. Con arreglo a la constitución “Por cada setenta mil almas de la población, compuesta como queda dicho en el artículo 29, habrá un diputado de Cortes”.<sup>277</sup> En el caso de la provincia de Quito, le concernía nombrar cinco diputados que correspondía a trescientos cincuenta mil votantes. Los restantes cincuenta mil le otorgaron un diputado más. “Distribuida la población por las diferentes provincias, si resultase en alguna el exceso de más de treinta y cinco mil almas, se elegirá un diputado

<sup>270</sup> Rodríguez Ordoñez, *La revolución política en la época de independencia...*, 53-4.

<sup>271</sup> “testimonio del acta del Ayuntamiento Constitucional del Asiento de Otavalo.” 02/12/1813 Archivo Nacional Ecuador (ANE), Fondo Corte Suprema (FCS), Serie Gobierno; Caja 69; Expediente 7, f. 2.

<sup>272</sup> Ahmed I. Deidán de la Torre, *Pueblos y Soberanía. Continuidades y rupturas conceptuales durante la insurgencia en el reino de Quito (1809-1813)* (Quito: IPGH, 2016), 99.

<sup>273</sup> Decreto CLXII de 23 de mayo de 1812, “Instrucción conforme a la cual deberán celebrarse en las provincias de Ultramar las elecciones de Diputados de Cortes para las ordinarias del año próximo de 1813,” artículo I.

<sup>274</sup> Decreto CLXIV de 23 de mayo de 1812. “Establecimiento de las Diputaciones provinciales en la Península y Ultramar,” artículo I.

<sup>275</sup> Ahmed I. Deidán de la Torre, *Pueblos y Soberanía. Continuidades y rupturas...*, 98.

<sup>276</sup> Rodríguez O., *La revolución política...*, 83.

<sup>277</sup> Constitución política de la monarquía española, título III, capítulo I, artículo 31.



más, como si el número llegase a setenta mil, y si el sobrante no excediese de treinta y cinco mil, no se contará con él”.<sup>278</sup> Una vez designados seis diputados para Cortes le correspondían, además, dos diputados suplentes. “Después de la elección de diputados se procederá a la de suplentes por el mismo método y forma, y su número será en cada provincia la tercera parte de los diputados que le correspondan”.<sup>279</sup> De acuerdo con la normativa “El número de electores de partido será triple al de los diputados que se han de elegir.”<sup>280</sup> En tal virtud, los distritos o partidos debían designar un total de diez y ocho electores de partido.

El número de Electores de esta Provincia hade ser de dies y ocho. Los Partidos actuales de esta Provincia son solamente catorse a saber: Quito, Cuenca, Loxa, Pasto, Riobamba, Ibarra, Latacunga, Ambato, los Pastos, Bracamoros, Barbacoas, Alausí, Guaranda, Otavalo. Luego los quatro electores que faltan al completo de los dies y ocho, deben elegirse por los de mayor Población que son Quito, Cuenca, Riobamba y Latacunga, a los cuales toca nombrar dos Electores cada uno. Las Cavezas de Partido donde deben reunirse los Electores de Partido, son las Capitales de los citados Catorse Distritos.<sup>281</sup>

Como se puede apreciar, el corregimiento de Otavalo fue designado como uno de los catorce distritos o partidos y su capital, la villa de Otavalo, denominada como cabecera de partido. Gracias a la información que brinda el plan de elecciones se puede conocer el número de compromisarios y electores parroquiales para cada uno de los distritos. En Otavalo vemos que la reorganización territorial es muy notoria, el número de parroquias es de doce, las cuales, ya no corresponden a los nueve pueblos que se puede ver en el censo de Villalengua. El número de electores de parroquia es de treinta y seis, y el número de compromisarios es de doscientos seis. En base a estos datos podemos concluir que la población políticamente elegible en el partido de Otavalo y sus doce parroquias es de aproximadamente siete mil doscientos vecinos-ciudadanos.

<sup>278</sup> Constitución política de la monarquía española, título III, capítulo I, artículo 32.

<sup>279</sup> Constitución política de la monarquía española, título III, capítulo V, artículo 90.

<sup>280</sup> Constitución política de la monarquía española, título III, capítulo IV, artículo 63.

<sup>281</sup> “Expediente seguido sobre la formación del Ayuntamiento Constitucional de esta Capital, nombramiento de Electores, y consecuentes diligencias para las Diputaciones Provinciales”, Quito, 27/08/1813, Archivo Nacional Ecuador (ANE), Fondo Corte Suprema (FCS), Serie Gobierno, Caja 68, Expediente 17, f. 19/r.

Ilustración 2. Mapa del Plan de elecciones generales de la Provincia de Quito de 1813

Mapa del Plan de elecciones generales de la Provincia de Quito de 1813



Plan general de elecciones de la Provincia de Quito de 1813

	Partidos o distritos	Parroquias	Compromisarios	Electores parroquiales
1	Quito	32	399	44
2	Cuenca	23	593	94
3	Riobamba	22	383	40
4	Alausí	5	80	8
5	Ambato	10	215	33
6	Guaranda	11	110	9
7	Latacunga	15	305	43
8	Loja	19	225	23
9	Jaén de Bracamoros	5	54	5
10	Otavalo	12	206	36
11	Los Pastos	12	190	18
12	Pasto	11	107	11
13	Barbacoas	9	24	4
14	Ibarra	13	170	16

Fuente: Plan de elecciones  
Elaboración propia

**Cuadro 2. Electores y compromisarios establecidos de acuerdo con el Plan general de elecciones de 1813.**

<b>Otavaló</b>		
<b>Cabecera-Otavaló</b>		
<b>Parroquias</b>	<b>Compromisarios</b>	<b>Electores parroquiales</b>
El Jordán	31	15
Cotacachi	31	7
Atuntaqui	21	2
Cangagua	11	1
San Luis	31	3
Cayambe	21	2
San Pablo	31	3
Tocache	4	1
Tabacundo	7	
Urcuqui	12	2
Yntag	1	
Tumbabiro	4	

Fuente: Plan de elecciones

Elaboración propia

Como se puede observar en la tabla 1, de acuerdo con el art. 38 de la Constitución: “En las juntas de parroquia se nombrará por cada doscientos vecinos un elector parroquial”.<sup>282</sup> Por cada elector parroquial designado, se procedía a reconocerse a cada parroquia once compromisarios, los mismos que debían seleccionar al elector parroquial. El número de electores parroquiales era ilimitado y reflejaba la población votante. “Si el número de vecinos de la parroquia excediese de trescientos, aunque no llegue a cuatrocientos, se nombrarán dos electores; si excediese de quinientos, aunque no llegue a seiscientos, se nombrarán tres, y así progresivamente”.<sup>283</sup> Si la población era menor a doscientas personas se procedía a hacer agregaciones para completar el número requerido para la designación de electores parroquiales. “Art. 40 – En las parroquias, cuyo número de vecinos no llegue a doscientos, con tal que tengan ciento cincuenta, se nombrará ya un elector, y en aquellas en que no haya este número se reunirán los vecinos a los de otra inmediata para nombrar el elector o electores que les correspondan”.<sup>284</sup> A diferencia de

<sup>282</sup> Constitución política de la monarquía española, título III, capítulo III, artículo 38.

<sup>283</sup> Constitución política de la monarquía española, título III, capítulo III, artículo 39.

<sup>284</sup> Constitución política de la monarquía española, título III, capítulo III, artículo 40.

los electores parroquiales, los compromisarios tenían un número limitado, no podían exceder de treinta y uno. Si a una parroquia se asignaba un elector, le correspondía once compromisarios; si se le asignaba dos, le correspondía veinte y un compromisarios; y si le asignaban tres o más, el número máximo era de treinta y un compromisarios.

Al igual que, en la designación de electores parroquiales, el nombramiento de compromisarios en poblaciones pequeñas se procedía con agregaciones.

Art. 43 –Se observará que aquella parroquia que llegare a tener veinte vecinos elegirá un compromisario; la que llegare a tener de treinta a cuarenta, elegirá dos; la que tuviere de cincuenta a sesenta, tres, y así progresivamente. Las parroquias que tuvieren menos de veinte vecinos se unirán con las más inmediatas para elegir compromisario. Art. 44 – Los compromisarios de las parroquias de las poblaciones pequeñas, así elegidos, se juntarán en el pueblo más a propósito, y en componiendo el número de once, o a lo menos de nueve, nombrarán un elector parroquial; si compusieren el número de veinte y uno, o a lo menos de diez y siete, nombrarán dos electores parroquiales y si fueren treinta y uno y se reunieren a lo menos veinte y cinco, nombrarán tres electores, o los que correspondan.<sup>285</sup>

Como se puede observar en las parroquias de Tocache y Tabacundo, con cuatro y siete compromisarios respectivamente, debían reunirse en Tabacundo y designar un elector parroquial. En el caso de las parroquias de Urcuquí, Intag y Tumbabiro, con doce, uno y cuatro compromisarios respectivamente, debieron reunirse en Urcuquí para nombrar dos electores parroquiales.<sup>286</sup>

## 6. El proceso electoral

De acuerdo con Annino, el estudio de las elecciones en el siglo XIX es un problema complejo, pues la normativa, en este caso gaditana moderna, tiene que llevarse a cabo por una sociedad de antiguo régimen. “una elección decimonónica es una práctica cultural que articula instituciones de diferente tipo, políticas y no políticas, corporativas, comunitarias, territoriales, económicas etc., que operan no necesariamente en contra de las normas sino paralelamente”.<sup>287</sup> Por otra parte, las prácticas electorales fueron la expresión social de asimilación y acomodación de la normativa gaditana. En ciertos momentos pesó más la normativa, en otros, las leyes de costumbre.

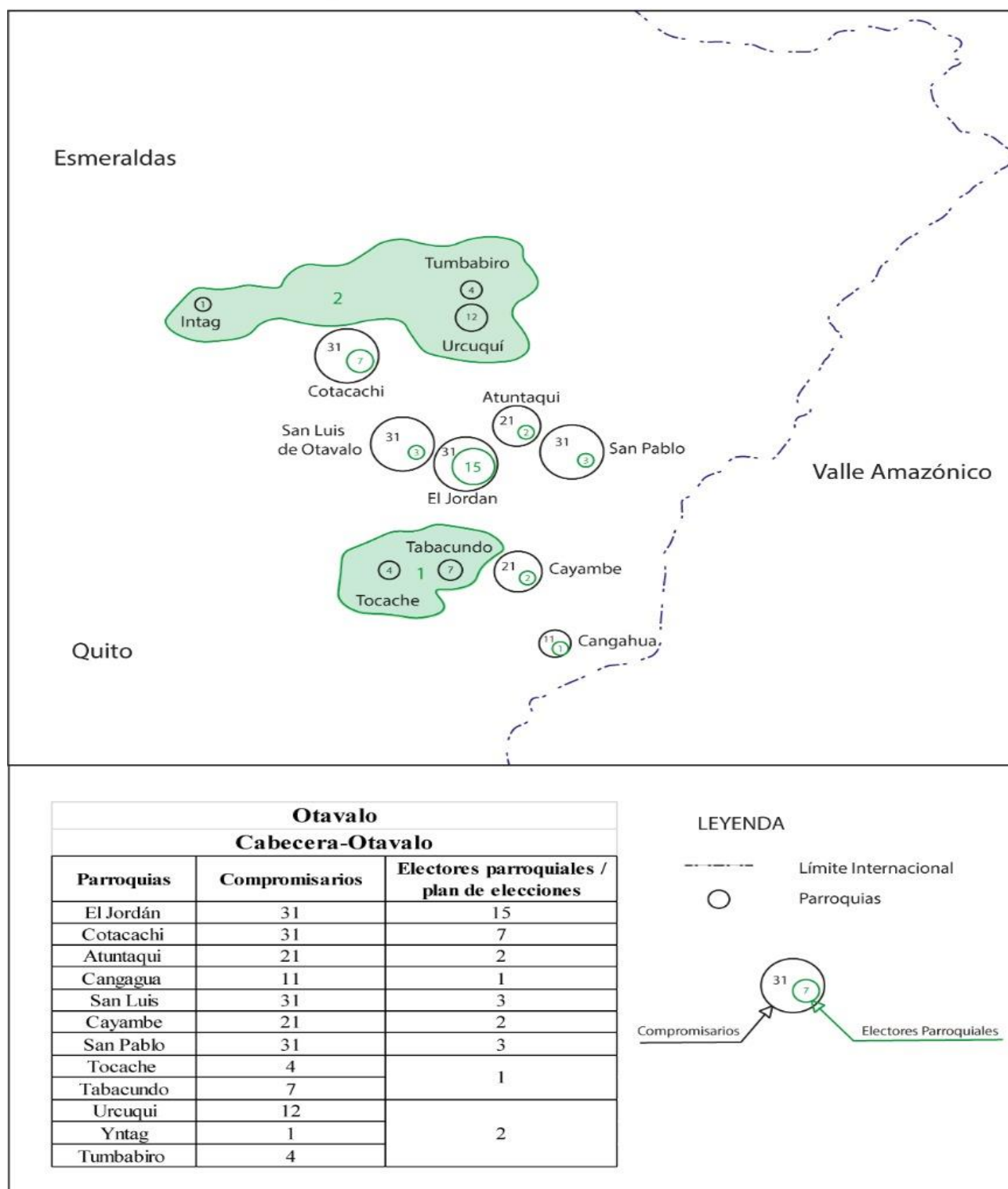
<sup>285</sup> Constitución política de la monarquía española, título III, capítulo III, artículo 43-44.

<sup>286</sup> “Expediente seguido sobre la formación del Ayuntamiento Constitucional de esta Capital, nombramiento de Electores, y consecuentes diligencias para las Diputaciones Provinciales”, Quito, 27/08/1813, Archivo Nacional Ecuador (ANE), Fondo Corte Suprema (FCS), Serie Gobierno, Caja 68, Expediente 17, f. 24.

<sup>287</sup> Annino, “El voto y el siglo XIX desconocido”, 3.

**Ilustración 3: Mapa del Partido de Otavalo de acuerdo con el Plan general de elecciones de 1813**

**Mapa del Partido de Otavalo de acuerdo con el  
Plan general de elecciones de 1813**



Fuente: Plan de elecciones  
Elaboración propia

El proceso electoral gaditano en Otavalo se llevó a cabo el veinte y uno de noviembre de 1813. Luego de escuchar la misa del espíritu santo, se trasladaron los vecinos a la sala del cabildo, en donde se acostumbraba a hacer reuniones. Se procedió a nombrar las autoridades respectivas.

Habiéndose juntado los Señores Electores Parroquiales en esta sala de cabildo despues de haber vuelto de oír la Misa del Espíritu Santo y oído la exortación que dijo oportunamente el Señor Doctor Don José Duque de Abarca, cura propio de la Iglesia Matriz, y Vicario Provincial, se procedió a la Elección de Secretario y dos Escrutadores, todo como se previene en la Constitución Nacional para la elección de dos Alcaldes, ocho Regidores y dos Procuradores Síndicos. La Elección de Secretario recayó en el señor Don Carlos Rivadeneyra, y la de escrutadores en los Señores Don José Andrade, y Don Vicente Villasis.<sup>288</sup>

Para secretario se nombró a Don Carlos Rivadeneyra y como escrutadores se designó a Don José Andrade y a Don Vicente Villasis. De esta manera, la mesa electoral se componía del corregidor Don Xavier de Ascasubi quien ejerció las funciones de presidente, del secretario y de los dos escrutadores. Una vez establecida la mesa electoral, se debía proceder a la elección de compromisarios. De acuerdo con la constitución española, cada ciudadano debía designar el número de compromisarios y la mesa electoral debía registrarlos; ningún ciudadano podía votar por sí mismo.

Los compromisarios electos fueron los siguientes: Doctor José Duque de Abarca, Pedro de Balverde, Antonio Castelo, Doctor José Burbano y Bolaños, Antonio Martinez de la Vega, Don Tiburcio Cabezas, José de Andrade y Luna, Torivio Páez, Miguel Carbajal, Juan Suárez, Vicente Villasis, Xavier Aguirre, José Benítez, José Checa y Juan Manuel Rodriguez.<sup>289</sup> El número total de compromisarios electos en San Luis de Otavalo fue de quince, que no corresponde a los treinta y uno designados en el plan de elecciones.

Una vez electos los compromisarios, estos debían, a su vez, nombrar los electores parroquiales. En el plan de elecciones se designan a Otavalo tres electores parroquiales. Según el acta de erección del ayuntamiento constitucional de Otavalo, la designación de electores parroquiales fue de la siguiente forma:

Por la Matriz del Señor del Jordán, el Señor Don José Duque de Abarca, su cura propio y Vicario Provincial; y el Señor Don Antonio Castelo Presvitero = Por la Parroquia de San Luis el Señor Doctor Don Pedro Balverde, su cura propio, y Don Tiburcio Cavezas,

---

<sup>288</sup> “testimonio del acta del Ayuntamiento Constitucional del Asiento de Otavalo.” 02/12/1813 Archivo Nacional Ecuador (ANE), Fondo Corte Suprema (FCS), Serie Gobierno; Caja 69; Expediente 7, f. 2.

<sup>289</sup> “testimonio del acta del Ayuntamiento Constitucional del Asiento de Otavalo.” 02/12/1813 Archivo Nacional Ecuador (ANE), Fondo Corte Suprema (FCS), Serie Gobierno; Caja 69; Expediente 7, f. 1/r y 2.

Cacique y Gobernador de Provincia = Por la de Cotacachi, los Señores Don José Andrade, y Don Torivio Páez = Por la Parroquia de Cayambe, los Señores Don Vicente Villasis, y Don Xavier Aguirre = Por la de Atuntaqui el Señor Don José Burbano y Bolaños, su cura propio, y el Señor Don Antonio Martínez = Por la de Urcuquí los Señores Don Miguel Carbajal y el Señor José Fochin. Este no ha asistido por impedimento, de que se ha sabido en el acto mismo de la Elección = Por la de San Pablo Don Juan Suárez = Por la de Tabacundo el Señor Don Juan Manuel Rodríguez = Por la de Tumbabiro el Señor Don Carlos Rivadeneyra = Por la de Cangagua, Don José Benites = Por la de Tocachi Don José Checa=. <sup>290</sup>

Como se puede observar, las elecciones en el partido de Otavalo, no se realizaron en buena parte como lo establecía el plan de elecciones. En este caso, se eligieron compromisarios para todo el partido de Otavalo y no por parroquias como se debía realizar. Los compromisarios electos fueron en menor número al establecido en el plan, y estos, a su vez, eligieron los electores parroquiales no solo de Otavalo sino de todas las parroquias del partido. Este procedimiento se explica por el vacío normativo de la constitución para el proceso electoral en cuanto a ayuntamientos constitucionales. Una vez terminada la designación de los electores parroquiales, se procedió a la elección de las autoridades del Ayuntamiento.

Dichos Señores unánimes y conformes después de examinadas y hallados corrientes las credenciales, eligieron para Alcaldes a los Señores Don Joaquín Rodríguez de Ribadeneyra y Don Juan Manuel Rodríguez. Para Regidores a los Señores Don Cayetano Xaramillo y Sola, Don Toribio Páez de Trastamara, Don José Donoso y Espinoza, Don José Andrade, Don Mariano Albuja, Don Tiburcio Cavezas, Don Joaquín Espinoza de los Monteros, y Don José Hendara. Para Sindicos Personeros, a los señores Don José Reyes Carrasco y Don Antonio Alzamora. <sup>291</sup>

Al analizar el proceso electoral gaditano, desde la comparación entre la normativa emitida por la propia constitución, los decretos de las cortes y el plan de elecciones, y la práctica, vemos que pesó más la tradición que la ruptura. El caso de Otavalo es bastante particular. Como se mencionó en el primer capítulo, el asiento fue ascendido a villa en 1811, por ende, tuvo derecho a instituir un cabildo, a través de elecciones de antiguo régimen, en enero de 1812. En ese mismo año se promulga la constitución de Cádiz y el año siguiente se celebran las elecciones gaditanas. En menos de dos años la estructura política del corregimiento tuvo que asimilar cambios bastante significativos.

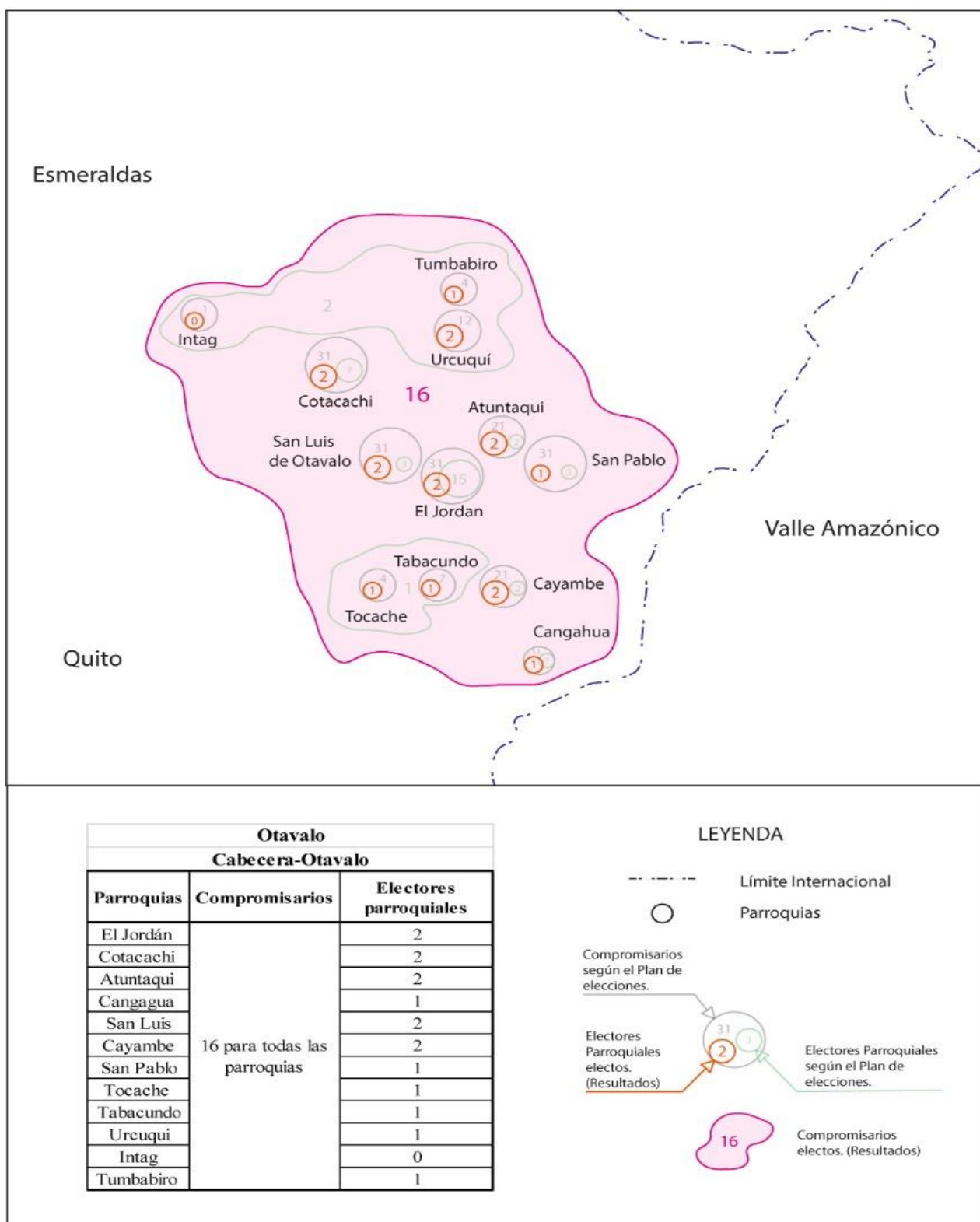
---

<sup>290</sup> “testimonio del acta del Ayuntamiento Constitucional del Asiento de Otavalo.” 02/12/1813 Archivo Nacional Ecuador (ANE), Fondo Corte Suprema (FCS), Serie Gobierno; Caja 69; Expediente 7, f. 2 y 2/3.

<sup>291</sup> “testimonio del acta del Ayuntamiento Constitucional del Asiento de Otavalo.” 02/12/1813 Archivo Nacional Ecuador (ANE), Fondo Corte Suprema (FCS), Serie Gobierno; Caja 69; Expediente 7, f. 2/r.

Ilustración 4: Mapa de resultados de las elecciones constitucionales de 1813

### Mapa de resultados de las elecciones constitucionales de 1813



Fuente: Acta del Cabildo constitucional de Otavalo 1813  
Elaboración propia



En tal virtud, el corregimiento de Otavalo no se adaptó al nuevo orden político gaditano, sino que la constitución española fue adaptada a Otavalo. La constitución de Cádiz reforzó la representación política local que ya se estableció desde 1812 como consecuencia de la erección de la segunda junta de Quito.

Siguiendo el planteamiento de Chiaramonti, la noción de ciudadanía y el proceso electoral para la erección del ayuntamiento constitucional no fueron controlados por los funcionarios de gobierno.<sup>292</sup> Como ya se mencionó, la inclusión y exclusión de la ciudadanía estuvo a cargo de las autoridades locales. En este orden de ideas, si la designación de la ciudadanía estuvo a cargo de las autoridades locales, la práctica electoral y sus resultados fueron controlados por ellas. Como se pudo observar en el acta constitucional, no se menciona el proceso electoral de compromisarios, únicamente se explicita quienes fueron electos. En este sentido, los vecinos principales de Otavalo se mantuvieron dentro de la estructura de poder local por vía electoral. Lo cual, según señala Rocío Rebata Delgado, es comprensible que los actores del poder local, ante la nueva representación y el nuevo sistema de elección, hayan establecido acuerdos previos sobre los puestos a ocupar, pues estos acuerdos se los hacían desde mucho antes. Estos grupos de poder usaron, en parte, la cooptación y el arreglo de la tradición de antiguo régimen con la novedad gaditana para, por vía de la designación y elección, conservar sus privilegios.<sup>293</sup>

Si hacemos un análisis comparativo de las elecciones de 1812 con las de 1813 vemos muchos personajes que coinciden como autoridades designadas en varios cargos. En 1812 los comisionados fueron: Don Mariano Albuja, Don José Duque de Abarca y Francisco de Grijalva; los vocales electores fueron: Don Luis Boada, Don Manuel Solar, Don Mariano Paredes, Don Toribio Páez de Trastamara y Don Antonio de Andrade. Las autoridades electas fueron: Para alcalde de primer voto, Don Toribio Páez de Trastamara; y para alcalde de segundo voto, José de Andrade y Luna.

Hay varios casos que cabe mencionar, tanto el alcalde de primer voto Don Torivio Páez de Trastamara, como el de segundo voto José de Andrade y Luna son autoridades electas en ambos procesos electorales. En 1812, Torivio Páez fue vocal elector, alcalde de primer voto y en 1813, a través de comicios gaditanos, es electo como compromisario y como elector parroquial de Cotacachi. José de Andrade y Luna, en 1812, fue electo

---

<sup>292</sup> Chiaramonti, "Ensayando nuevos derechos: elecciones gaditanas...", 323.

<sup>293</sup> Rebata Delgado, "Elecciones de los ayuntamientos en el marco constitucional gaditano en el Perú, 1812-1814", 147.

alcalde de segundo voto y en 1813, fue nombrado escrutador, compromisario y elector parroquial de Cotacachi. Don José Duque de Abarca fue comisionado de las elecciones en 1812 y en 1813 fue electo como compromisario y elector parroquial de El Jordán. Pero quizás el dato más curioso es que de los diez y siete electores parroquiales del partido de Otavalo quince son, al mismo tiempo, compromisarios. Carlos Rivadeneira y Vicente Villasis, secretario y escrutador de los comicios gaditanos, respectivamente, también pertenecen al cuerpo de electores parroquiales.

En el caso de las agregaciones para completar la población votante, se puede observar que la designación de electores parroquiales se cumplió a medias con el criterio de la constitución gaditana y el plan de elecciones. Como señala Chiaramonti:

es evidente que el criterio numérico propuesto por la Constitución no correspondía a las costumbres y a la voluntad de los ciudadanos de la parroquia, para los cuales los que tenían que ser representados por los compromisarios no eran tanto los vecinos, entendidos como individuos, sino cada una de las micro realidades comprendidas en el ámbito de la parroquia.<sup>294</sup>

En el caso de las parroquias de Tocache y Tabacundo, las cuales, tenían asignado once compromisarios, cuatro y siete respectivamente, debían juntarse y nombrar un elector parroquial. Lo que sucedió es que Tocache y Tabacundo tuvieron un elector parroquial cada una, Don José Checa y Don Juan Manuel Rodríguez, respectivamente. En este primer caso vemos que el criterio numérico no se toma en cuenta y que cada parroquia establece su propio representante, es decir, la base de la representación política se llevó a cabo siguiendo el criterio de pueblos por sobre el número de ciudadanos. En el caso de Urcuquí, Intag y Tumbabiro, las cuales, tenían asignado diez y siete compromisarios, doce, uno y cuatro respectivamente, debían reunirse y nombrar dos electores parroquiales. Lo que en realidad pasó, es que Urcuquí designó dos electores parroquiales, Don Miguel Carvajal y José Fochín; Intag no tuvo ningún elector parroquial; y Tumbabiro, tuvo un elector parroquial, Don Carlos Ribadeneyra. ¿Por qué Urcuquí tuvo dos representantes en lugar de uno?, ¿Por qué Intag no tuvo ningún representante? En este segundo caso el criterio numérico se impone al de los pueblos. El hecho de que Intag no haya tenido representante obedece a que apenas tuvo un compromisario, que correspondía a veinte vecinos. Mientras que Urcuquí tuvo doce. En ese orden de ideas, vemos que el criterio numérico se aplicó en Otavalo en casos muy específicos.

---

<sup>294</sup> Chiaramonti, "Ensayando nuevos derechos: elecciones gaditanas...", 327.

Si analizamos el criterio numérico del plan de elecciones, desde otra perspectiva, vemos una realidad completamente distinta. Si sumamos los compromisarios y electores parroquiales de todas las parroquias de Otavalo se obtiene lo siguiente: doscientos seis compromisarios en total, 36 electores parroquiales en total, lo cual sugiere una población políticamente votante de siete mil doscientos vecinos. En base a la población votante, en teoría, se debió establecer al menos siete ayuntamientos constitucionales en el corregimiento de Otavalo; pero si seguimos únicamente el criterio constitucional, basado en individuos con alma, el número de ayuntamientos debió ser aún mayor. “Se pondrá ayuntamiento en los pueblos que no le tengan, y en que convenga le haya, no pudiendo dejar de haberle en los que por sí o con su comarca lleguen a mil almas, y también se les señalará término correspondiente”.<sup>295</sup> En la práctica únicamente se estableció un ayuntamiento constitucional para todo el partido de Otavalo. ¿Por qué? Vemos que San Luis de Otavalo como cabeza de partido mantuvo una jerarquía territorial por sobre las demás parroquias. Para ello, tanto la condición de villa otorgada en 1811, así como la experiencia electoral de 1812 fueron determinantes. La representación de las parroquias se lo hizo efectivamente, pero las agregaciones con propósitos representativos no se ven reflejadas en el número de ayuntamientos. Es decir, el plan de elecciones se cumple a medias, y la mayoría de las parroquias, en lugar de juntarse y establecer electores parroquiales en común, escogieron electores que representen a cada parroquia sin cumplir el criterio numérico. Como ya se mencionó Intag es un caso excepcional.

## **7. Elección de diputados a Cortes y a la Diputación Provincial**

Como ya se mencionó, hubo dos procesos electorales. El primero para elegir las autoridades de los Ayuntamientos constitucionales y el segundo para la elección de diputados a Cortes y a la Diputación Provincial. En el caso de Otavalo, el proceso electoral fue único, es decir, el mismo día se nombraron las autoridades del Ayuntamiento y también se eligieron los compromisarios y electores parroquiales, quienes, a su vez, debían seleccionar a un elector de partido.

Los electores de partido electos debían concurrir a Quito para proceder a la elección de las autoridades correspondientes. Estos se reunieron el 24 de agosto de 1814.<sup>296</sup> Como ya se mencionó, el número de electores de partido debía ser el triple del

---

<sup>295</sup> Constitución política de la monarquía española, título VI, capítulo I, artículo 310.

<sup>296</sup> Rodríguez O., *La revolución política...*, 87.

número de diputados a Cortes. En este caso el número de diputados a Cortes fue de seis y dos suplentes. En tal virtud, los diez y ocho electores de partido que representaban a los catorce distritos o cabezas de partido procedieron a la elección de las autoridades.

Todos se reunieron en el Salón del Palacio de Gobierno y los dos primeros días fueron destinados para la lectura de la constitución, elección del secretario y los dos escrutadores, y para revisar y certificar las actas de las elecciones de partido, como también la de los electores de partido. Las elecciones se llevaron a cabo el día 26 de agosto de 1814.<sup>297</sup> No hay que olvidar que el proceso comicial estaba acompañado por la lectura de la constitución y la celebración de una misa.

**Cuadro 3. Elección de diputados a Cortes de la Provincia de Quito**

<b>Diputados a las Cortes de la Provincia de Quito</b>	<b>Suplentes</b>
Dr. Francisco Rodríguez Soto (17 votos)	Lic. Matías Arista (16 votos)
Dr. José María Landa y Ramírez (16 votos)	Dr. Gabriel Álvarez (14 votos)
Sr. Mariano Guillermo Valdivieso (15 votos)	
Dr. José Salvador (13 votos)	
Dr. José María Lequerica (17 votos)	
Sr. José de Larrea y Jijón (17 votos)	

Fuente: Jaime Rodríguez

La elección de Diputados a la Diputación Provincial de Quito se celebró al día siguiente de la elección a Cortes. Por el partido de Otavalo tenemos al Dr. José Reyes.

**Cuadro 4. Elección de diputados a la Diputación provincial**

<b>Diputados a la Diputación Provincial de Quito</b>	<b>Suplentes</b>
Dr. Calixto Miranda (Partido de Quito)	Dr. José Camacho (Partido de Riobamba)
Dr. José Félix Valdivieso (Partido de Cuenca)	Dr. Fernando Burbano (Partido de Pasto)

---

<sup>297</sup> Ibíd. 87-8.

Dr. Joaquín Anda (Partido de Latacunga)	Dr. José Manuel Reyes (Partido de Ambato)
Sr. José Mariano Egües (Partido de Ambato)	
Sr. Tomás Velasco (Partido de Riobamba)	
Dr. José Miguel Carrión (Partido de Loja)	
Dr. José Reyes (Partido de Otavalo)	

Fuente: Jaime Rodríguez

Una vez terminada las elecciones para seleccionar los diputados a Cortes y de Provincia se culminó con el proceso electoral. Cabe mencionar que cuando se celebraron estas elecciones, Fernando VII había regresado al trono español. Las noticias del retorno del absolutismo llegaron a Quito después del proceso electoral.



## Conclusiones

La política de Toribio Montes permitió la introducción y aplicación de la constitución de Cádiz en la Audiencia de Quito y, por lo tanto, en Otavalo. De esta manera, el plan de elecciones fue usado como un instrumento al servicio de la política pacifista del experimentado militar y administrador colonial.

La situación política que experimentó la Audiencia tuvo relación directa con la crisis de la monarquía española generada por las abdicaciones de Bayona de 1808. La eclosión juntera de los años 1808-1810 en los territorios americanos, y de manera particular en la Real Audiencia produjeron no solo una situación de crisis política que derivó en conflictos armados entre regiones que solo terminaría con el ingreso de Montes como presidente de la Audiencia a fines de 1812.

La experiencia juntera de Quito tuvo incidencia directa en Otavalo. La respuesta del corregimiento tanto a la primera junta como a la segunda fue distinta. Por una parte, se observa que, pese a la intención de la primera junta de representar a la Audiencia y reasumir completamente su soberanía, fue rechazada por los representantes del corregimiento de Otavalo. En el caso de la segunda, los quiteños invitaron a los demás territorios a enviar delegados. Dadas las circunstancias políticas, Otavalo esta vez reconoció el gobierno juntero. Pese a que varias autoridades locales eran quiteñas y tenían relación con la nobleza de Quito, su inicial rechazo fue una expresión generalizada del poder local. Por otra parte, su apoyo a la segunda junta respondió al previo reconocimiento que ese gobierno hizo de la soberanía territorial del corregimiento. Se reconoció la segunda junta de Quito en la medida en la que esta garantizó su representación.

Otavalo asimiló la crisis de 1808, pero también tuvo su posicionamiento político con respecto a las juntas quiteñas y a la reacción de los centros virreinales de Nueva Granada y el Perú ante éstas. A pesar de haber una respuesta local unificada distinta como corregimiento, tanto a la primera como a la segunda junta quiteña, sus actores locales tenían sus posicionamientos políticos internos.

Cuando Montes entró en la Audiencia de Quito, la constitución de Cádiz ya había sido promulgada oficialmente y muchos pueblos de la península la habían jurado. La publicación y jura de la constitución en la Audiencia coincidieron con la aplicación del

proyecto pacificador de Montes. Por una parte, el funcionario ofrecía perdón y olvido a los insurgentes, mientras que, al mismo tiempo, les permitía gozar de los derechos políticos que brindaba el marco constitucional gaditano. En este sentido, Montes no solo pacificó el territorio, sino que permitió el reacomodo de las élites en las estructuras de poder local que usaron la ciudadanía constitucional para mantenerse en tales espacios. Un caso importante es el de Manuel Larrea, insurgente, quien, ante la petición de Montes para costear las corridas de toros como parte de las celebraciones en torno a la publicación de la constitución, colaboró sin problemas.

La política de Montes redefine el fidelismo de las juntas quiteñas hacia la figura del monarca, pero en el caso del corregimiento de Otavalo, esa lealtad se vio reflejada en el juramento a la constitución. Como sostiene Alexandra Sevilla, el perdón no fue gratuito. Muchos de los individuos beneficiados de los indultos debían contribuir económicamente al sostenimiento del proyecto contrainsurgente.

Montes fue el encargado de establecer un plan de elecciones generales para la Audiencia. Este tuvo como objetivo organizar las elecciones tanto de ayuntamientos constitucionales como la de Cortes y de la Diputación provincial. El plan fue construido en base al marco administrativo y territorial existente, no obstante, demandó de un gran esfuerzo colectivo, pues los datos poblacionales requeridos no estaban disponibles. Por ello, como sostiene Cabrera Hanna, el basamento nominal de individuos con capacidad de voto fue el proporcionado por censos anteriores usados con fines fiscales.

El plan de elecciones se aplicó en Otavalo en base a los censos de 1779 y 1785, pero también de acuerdo con los datos proporcionados por los principales vecinos de cada localidad. Si bien para 1779 Otavalo contó con nueve pueblos, en el plan de 1813 constan doce, lo que demuestra que hubo un grado importante de colaboración con el régimen de Montes para establecer los datos poblacionales más exactos.

Una vez construido el plan, Montes ordenó su ejecución en todos los territorios bajo jurisdicción de la Audiencia. Como ya se mencionó, el plan fue construido sin una reforma territorial previa, por lo que su aplicación consolidó las antiguas identidades territoriales. La publicación de la constitución y su posterior juramento fueron elementos claves que inauguraban formalmente el proceso electoral. Tanto los rituales de publicación y jura se presentaron como instrumentos que reforzaban el vínculo entre el monarca y sus vasallos. El imaginario político de ciudadanos con voluntad individual solo se expresó normativamente en la constitución, pero en la práctica, los rituales del momento gaditano fueron la expresión de una sociedad corporativa.



Los rituales del momento gaditano, que tenían por objetivo legitimar la novedad política que la constitución expresaba, fueron configurados bajo la venia de la religión católica. En ese sentido, no hay una disociación entre representación política y religión, sino que esta es usada como un instrumento que aporta legitimidad a la constitución. Prestar juramento a la constitución fue un acto obligatorio, el cual no admitía rechazo. El papel de la iglesia fue el de traductor, pues los postulados gaditanos fueron interiorizados por la población solamente en las iglesias, en las cuales, los curas exhortaban su ciega obediencia.

Los rituales del momento gaditano tuvieron una significación distinta en Otavalo con respecto a los pueblos peninsulares e hispanoamericanos. Mientras que en los pueblos de la península se destacó la representación simbólica de la constitución y la nación española, dejando en un papel secundario al monarca, en Otavalo la jura de la constitución reforzó los sentidos de fidelismo existente entre el monarca y sus vasallos. El retrato del monarca no fue apenas parte del repertorio simbólico para legitimar el nuevo orden político que la constitución expresaba, sino que fue protagonista. En este sentido, la constitución fue vista en Otavalo como una dádiva que el rey otorgaba a sus vasallos, reforzando así los mecanismos de lealtad y robusteció la política de perdón y olvido que Montes implementó en la Audiencia.

La forma en la cual la constitución se dio a conocer en Otavalo da a entender que su sociedad no había asimilado la idea de soberanía unitaria, sino que, al contrario, ratificó la idea de gobierno mixto, de soberanía compartida entre el monarca y sus reinos. Por ello, los elementos simbólicos presentes en las fiestas efectuadas luego de las ceremonias de publicación y jura muestran ese vínculo entre el rey y sus vasallos. Esta relación contractual es la que predomina simbólicamente en las celebraciones, mientras que la constitución aparece ausente.

Cuando la constitución es promulgada en Otavalo, se inició un proceso de asimilación forzosa de los postulados gaditanos. Este proceso es legitimado por rituales de Antiguo Régimen. Luego de las ceremonias, que daban a conocer los postulados gaditanos a través de lecturas públicas o el sermón de los curas en las iglesias, venían las fiestas. La legitimidad la otorgó el pueblo mediante estas efemérides. Como señala Lorente, la constitución fue un texto indisponible. Las lecturas públicas, que fueron muy pocas, y su posterior juramento, no permitieron a sus habitantes interiorizar todos los postulados constitucionales. En ese sentido, para los pueblos, la fiesta de Antiguo régimen sirvió como traductor-legitimador de lo que la constitución expresaba. Para ellos, fueron

más importantes la fiestas que las ceremonias, pues a través de la celebración se expresaba fidelismo y obediencia al monarca y su voluntad expresada en la constitución.

La novedad constitucional y el Antiguo Régimen tuvieron que convivir durante el momento gaditano. En Otavalo, la ritualidad tradicional otorga sentido a la novedad, ya que sin esta simplemente carece de legitimidad. Y la novedad que es aplicada bajo las condiciones locales de recepción solo cobra sentido si se explica partiendo de la tradición como expresión de la sociedad corporativa. Todos los elementos simbólicos, la celebración de misas, iluminación de plazas, música, corrida de toros, entre otras, sirvieron para que la convivencia de la tradición y la novedad sea asimilada de buena forma por la población.

En lo que respecta al proceso electoral, su aplicación se efectuó bajo el criterio y discrecionalidad de las autoridades locales. Si bien la constitución dejó vacíos normativos de gran importancia en cuanto a la elección de ayuntamientos constitucionales y el plan de elecciones fue una guía bastante detallada para proceder electoralmente en la elección de diputados a Cortes y Diputación Provincial, en la práctica las elecciones tuvieron una adaptación local. Por ello, en Otavalo, ambos procesos electorales, tanto para la designación de alcaldes, regidores y procuradores síndicos, como para la elección de compromisarios y electores de parroquia se traslaparon.

De acuerdo con la constitución y con las investigaciones de Rodríguez y Morelli, que estudian la Real Audiencia de Quito desde perspectivas generales y distintas, los ayuntamientos constitucionales que se crearon para las elecciones durante el momento gaditano fueron muchos. Sin embargo, en Otavalo sucedió lo contrario. La población del corregimiento que, para 1813, superaba los treinta mil habitantes, debió establecer, de acuerdo con la normativa constitucional, varios ayuntamientos, no obstante, se instituyó solamente uno. En este sentido, vemos que, según Morelli la dispersión de la soberanía, y según Annino, la ruralización de lo político, son interpretaciones que se cumplen bajo un nivel de análisis general en la Audiencia. A nivel local, casos como el de Otavalo comparten esos análisis solo en parte. El rechazo a la primera junta quiteña obedece a que Otavalo ejerció su soberanía como pueblo ante la crisis monárquica, en este caso las afirmaciones de Morelli y Annino cobran sentido. En cambio, en el proceso electoral, vemos que la dispersión de la soberanía no se ve reflejada en la creación de ayuntamientos constitucionales.

De igual forma ocurrió con las agregaciones que, como señala Cabrera Hanna, sirvieron para completar el número requerido de mil almas para poder establecer

ayuntamientos. El plan de Montes cumplió a medida de sus capacidades con la aplicación de las agregaciones en los pueblos de Otavalo. Los casos de Tocache y Tabacundo; y los de Urcuquí, Yntag y Tumbabiro expresados en el plan ilustran esta intención. Sin embargo, en la práctica vemos que esto no se cumplió y que cada pueblo buscó tener representantes propios de acuerdo con el número de habitantes que poseía.

En este caso, vemos que la jerarquía territorial de Otavalo se mantuvo como en el pasado. Con el marco constitucional gaditano, los demás pueblos, se subordinaron a la autoridad del cabildo constitucional que se estableció en San Luis de Otavalo. No hubo una fragmentación del territorio con fines representativos en la práctica, sino que se reforzó la noción tradicional del territorio por medio del cabildo.

En lo que se refiere a la condición de ciudadanía otorgada a los indígenas, vemos que, en Otavalo, pese a ser incorporados constitucionalmente como ciudadanos activos de la nación española, hay una ausencia en términos de participación política en los procesos electorales. En cuanto a la ciudadanía indígena, Rodríguez, quien estudió Cuenca y Loja, afirma que hubo participación política y que muchos de ellos ocuparon cargos públicos. Por su parte Morelli, quien también ha analizado el caso cuencano, afirma que el paso de súbdito a ciudadano resultó un fracaso, pues pese al reconocimiento de ciudadanía activa, los indígenas siguieron siendo tributarios. En este orden de ideas, vemos que el reconocimiento de la ciudadanía activa, en la práctica, se decidió localmente. En Otavalo las autoridades locales restringieron la participación política indígena para permitir el reacomodo constitucional de las élites locales en el poder. El caso de Don Toribio Páez es un claro ejemplo. En 1812, antes de la aplicación del plan de elecciones, este personaje fue designado como vocal elector y el mismo año fue nombrado alcalde de primer voto, al año siguiente, bajo el marco constitucional gaditano, fue nombrado compromisario y elector parroquial de la parroquia de Cotacachi. José Duque de Abarca y José de Andrade y Luna son personajes que, al igual que Toribio Páez, están presentes en ambos procesos electorales.

Pese a que el plan de elecciones determinó el número de electores parroquiales y compromisarios a elegir en cada pueblo, en la práctica, este número fue menor y determinado localmente. En lugar de que cada pueblo elija sus compromisarios, es decir, doscientos seis distribuidos en doce parroquias, se eligieron diez y seis compromisarios en representación de todos los pueblos. Algo similar ocurrió con los electores parroquiales, se debían nombrar treinta y seis electores parroquiales distribuidos en doce parroquias, pero se eligieron únicamente diez y seis. Todos los compromisarios electos

se nombraron y distribuyeron entre ellos como electores parroquiales de los doce pueblos. Varias autoridades que participaron de una forma u otra en las elecciones constitucionales de 1813 lo hicieron también en las de alcaldes ordinarios de Antiguo régimen de 1812. Como se puede apreciar, Otavalo adaptó el plan de elecciones a su territorio y el resultado fue el robustecimiento del poder local en detrimento de la participación política indígena constitucionalmente establecida.

## Bibliografía

### Fuentes primarias

#### *Fuentes inéditas*

Archivo Nacional del Ecuador

Fondo Corte Suprema, serie *Indígenas*

Fondo Corte Suprema, serie *Gobierno*

#### *Fuentes publicadas*

Constitución política de la monarquía española. 1812.

España. Cortes de Cádiz. *Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias, desde el 24 de septiembre de 1811 hasta el 24 de mayo de 1812*. Tomo II, en: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2005: <http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc736n6>

Freile Granizo, Juan. *Resúmenes de actas republicanas Cabildo de Otavalo. siglo XIX*. Historia. Otavalo-Ecuador: Instituto Otavaleño de Antropología. 1980.

### Fuentes secundarias

Annino, Antonio. “El voto y el siglo XIX desconocido”. En *Silencios y disputas en la historia de Hispanoamérica*. Bogotá-Colombia: Universidad del Externado de Colombia; Taurus, 2014.

———. “La ruralización de lo político”. En *La revolución novohispana, 1808-1821*. Historia Crítica de las Modernizaciones en México. México-España: Fondo de Cultura Económica, 2011.

———. “Soberanías en lucha”. En *Silencios y disputas en la Historia de Hispanoamérica*. Bogotá: Taurus, 2014.

Borchart de Moreno, Christiana. *El corregimiento de Otavalo: Territorio, población y producción textil (1535-1808)*. Quito-Ecuador: Universidad de Otavalo, 2007.

———. *La Audiencia de Quito. Aspectos económicos y sociales-siglos XVI-XVIII*. Quito: Abya-Yala, 1998.

———. “Palo y zanahoria. La política de Toribio Montes, presidente de la Audiencia de Quito”. En *Abascal y la contra-independencia de América del Sur*. Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013.

- Borrero, Ana Luz. “El legado de Cádiz: ciudadanía y cultura política en la Gobernación de Cuenca, 1812-1814”. *Procesos: Revista Ecuatoriana de Historia*, n. 39 (junio de 2014): 9-36.
- Botero Bernal, Andrés. “Una sombra en la noche: en torno al constitucionalismo gaditano y la Nueva Granada”. *Historia constitucional*, n. 15 (2014): 311-89.
- Büschges, Christian. *Familia, honor y poder. La nobleza quiteña de Quito en la época colonial tardía (1765-1822)*. Quito: Fonsal, 2007.
- Cabrera Hanna, Santiago. “Ciudadanía gaditana, tributación y territorialidad en la Audiencia de Quito: el censo constitucional de 1813 y el plan de elecciones”. *Revista de Historia*, n.177, (2018): 1-22.
- . “Ciudadanía, representación política y territorio en la audiencia de Quito: entre el Pacto Solemne de 1812 y el censo poblacional de 1813”. *Memoria y Sociedad*, n. 41 (2016): 109-127.
- Cárdenas Gutiérrez, Salvador. “De las juras reales al juramento constitucional: tradición e innovación en el ceremonial novohispano, 1812-1820”. En *La supervivencia del derecho español en Hispanoamérica durante la época independiente*. Historia del derecho 2. México: Instituto de investigaciones jurídicas-UNAM, 1997.
- Castillo Quintana, Rolando. “Las Cortes de Cádiz y las municipalidades de Centroamérica”. En *Las Cortes de Cádiz y su influencia en Centroamérica Presentaciones para el Diálogo sobre Integración Centroamericana*. El Salvador: Sistema de la Integración Centroamericana, 2012.
- Cevallos, Pedro Fermín. “Resumen de la Historia de Ecuador. tomo III”. En *Biblioteca virtual Miguel de Cervantes*, 2004. <http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcj3929>.
- . *Resumen de la Historia del Ecuador, desde su origen hasta 1845. Vol. III*. Quito-Ecuador: Lima, 1870.
- Chiaromonti, Gabriella. “De marchas y contramarchas: apuntes sobre la institución municipal en el Perú (1812-1861)”. *Araucaria*, n. 18 (2007): 150-79.
- . “Ensayando nuevos derechos: elecciones gaditanas en los pueblos del Perú”. En *En el nudo del imperio. Independencia y Democracia en el Perú*. Perú: Instituto de estudios peruanos, 2012.
- Clavero, Bartolomé. “El Momento Constitucional de una República Católica (Cádiz entre Nueva Granada y Nueva Zelanda)”. *Revista Española de Derecho Constitucional*, n.96 (2012): 329-44.

- Coronel Feijóo, Rosario. *Poder local entre la colonia y la república. Riobamba, 1750-1812*. Quito: Corporación Editora Nacional, 2015.
- Cosano, David Manzano. “Filipinas en la historia del constitucionalismo español y su representación en las Cortes españolas”. *Revista Española de Derecho Constitucional*, n. 106 (2016): 273-302.
- Cruz de Amenábar, Isabel. “Tiempos fabulosos y mito de origen: Festividades de estado en Chile entre la colonia y la república”. En *Open Edition Books*, 2003. <https://books.openedition.org/ifea/4474>.
- Cruz Pazos, Patricia. “Cabildos y cacicazgos: alianza y confrontación en los pueblos de indios novohispanos”, *Revista Española de Antropología Americana*, n. 34 (2004): 149-62.
- Deidán de la Torre, Ahmed I. *Pueblos y Soberanía. Continuidades y rupturas conceptuales durante la insurgencia en el reino de Quito (1809-1813)*. Quito: IPGH, 2016.
- Deler, Jean-Paul. *Ecuador del espacio al estado nacional*. Quito: Corporación Editora Nacional / UASB-E, 2007.
- Demélas, Marie-Danielle. “El sufragio indígena en los Andes durante el período revolucionario (1810-1815): ¿electorado cautivo o guerra de castas?”, *Elecciones*, n. 7 (2007): 169-87.
- Díaz Benalcázar, Rita. “Desequilibrio del Poder Local en la Transición de la Colonia a la República: el caso del Corregimiento de Otavalo, 1777-1818”. Tesis de Maestría en Historia, Universidad Andina Simón Bolívar, 2015, <http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/5690/1/T2330-MH-Diaz-Desequilibrio.pdf>
- Embajada de España en Honduras. “La Constitución de Cádiz y el juramento de Tegucigalpa en 1812”. En *Bicentenario de la Constitución de Cádiz en Honduras*. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo/Ideas Litográficas, 2012.
- F. Javier Campos, y Fernández de Sevilla. “La Constitución Española de 1812 y su recepción en Perú”. Iustel, 2012. [https://www.iustel.com/v2/revistas/detalle\\_revista.asp?id\\_noticia=412124&d=1](https://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=412124&d=1).
- Gantús, Fausta, y Alicia Salmerón. “Un acercamiento a las elecciones del México del siglo XIX”, *Historia y Memoria*, n.14 (junio de 2007): 23-59.

- Garrido, Margarita. “Nueva Granada entre el orden colonial y el republicano: lenguaje e imaginarios sociales y políticos”. En *Las Independencias hispanoamericanas. Interpretaciones 200 años después*. Bogotá-Colombia: Norma, 2009.
- Garriga, Carlos. “Cabeza moderna, cuerpo gótico. La Constitución de Cádiz y el orden jurídico”. En *Anuario de historia del derecho español*, tomo LXXXI. Madrid: AHDE, 2011.
- González Suárez, Federico. “Historia general de la República del Ecuador. Tomo quinto”. En *Biblioteca virtual Miguel de Cervantes*, 2005. <http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc5x2m9>.
- Guerra, François-Xavier. *Modernidad e Independencias, Ensayos sobre las revoluciones hispánicas*. Madrid: MAPFRE, 1992.
- . “El ocaso de la monarquía hispánica: Revolución y desintegración”. En *Inventando la nación. Iberoamérica siglo XIX*, México: Fondo de Cultura Económica, 2003.
- Gutiérrez Ardila, Daniel. “La trayectoria política de Toribio Montes en América, 1804-1818”, *Trashumante: Revista Americana de Historia Social*, n. 16 (2020): 104-23.
- Gutiérrez Ramos, Jairo. *Los indios de Pasto contra la República (1809-1824) las rebeliones antirrepublicanas de los indios de Pasto durante la guerra de independencia*. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2012.
- Herzog, Tamar. *Vecinos y extranjeros. Hacerse español en la Edad Moderna*. Madrid: Alianza, 2006.
- Hidrovo Quiñónez, Tatiana. “Los alucinados de Puerto Viejo. Nociones de soberanía y ciudadanía en Manabí (1812-1814)”, *Procesos: Revista Ecuatoriana de Historia*, n.26, (2007), 51-71.
- Hobsbawm, Erick, y Terence Ranger. *La Invención de la Tradición*. Barcelona: Critica, 2012.
- Hunefeldt, Christine. “Trasfondo socioeconómico: un análisis sobre los albores de la independencia y las particularidades económicas y sociales andinas de fines del siglo XVIII y principios del XIX”. En *Crisis del régimen colonial e Independencia*, Vol. 4. Historia de América Andina. Quito: Corporación Editora Nacional/Libresa, 2003.
- Jaramillo P, V.A. *Corregidores de Otavalo. Otavalo-Ecuador*: Instituto Otavaleño de Antropología, 1972.



- Kennedy Troya, Alexandra. “La fiesta barroca en Quito” *Procesos: Revista Ecuatoriana de Historia*, n. 9 (1996): 3-20.
- Lebret, Iveline. *La vida en Otavalo en el siglo XVIII*. Otavalo-Ecuador: Instituto Otavaleño de Antropología, 1981.
- Lomné, Georges. «El “espejo roto” de la Colombia bolivariana (1820-1850)». En *Inventando la nación. Iberoamérica siglo XIX*. México: Fondo de Cultura Económica, 2005.
- López, Roberto J. “Hablar a la imaginación. las ceremonias de proclamación y jura de la constitución de 1812 en el noroeste peninsular”. *Obradoiro de Historia Moderna*, n.20, (2011). 141-173
- Lorente Sariñena, Marta María. “El Juramento Constitucional”. En *Anuario de historia del derecho español: Los orígenes del constitucionalismo español entre 1808 y 1812*, n. 65. España: Ministerio de Justicia, (1995): 585-632
- Martínez Garnica, Armando. “La eclosión juntera en el Nuevo Reino de Granada”, *Secuencia* n. Conmemorativo, (2008):122-43.
- . *Quién es quién en 1810. Guía de forasteros del Virreinato de Santa Fe*. Colombia: Universidad del Rosario, 2010.
- Mejía Pedroza, Nicolás. “Organización del poder local. De la época colonial al siglo XIX”. En *Balance y perspectivas del desarrollo municipal*, n. VIII. México: Instituto Nacional de Administración Pública, 2013.
- Morelli, Federica. *De los Andes al Atlántico. Territorio, Constitución y ciudadanía en la crisis del Imperio español*. Quito: Corporación Editora Nacional / UASB-E, 2018.
- . “Pueblos, alcaldes y municipios: la justicia local en el mundo hispánico entre Antiguo Régimen y Liberalismo”, *Historia Crítica*, n. 36 (2008): 36-57.
- . *Territorio o Nación: Reforma y disolución del espacio imperial en Ecuador, 1765-1830*. Madrid: Centro de estudios constitucionales, 2005.
- Orrego Penagos, Juan Luis. “La contrarrevolución del Virrey Abascal: Lima, 1806-1816”, *Procesos: Revista ecuatoriana de Historia*, n. 29 (2009): 93-112.
- Ortemberg, Pablo. “Cádiz en Lima: De las fiestas absolutistas a las fiestas constitucionalistas en la fundación simbólica de una nueva era”. *Historia*, n.45, (2012): 455-483
- Portillo, José M. “Monarquía, imperio y nación: experiencias políticas en el Atlántico hispano en el momento de la crisis hispana”. En *La revolución novohispana, 1808-*

1821. Historia Crítica de las Modernizaciones en México. México-España: Fondo de Cultura Económica, 2011.
- Rebata Delgado, Rocío. “Elecciones de los ayuntamientos en el marco constitucional gaditano en el Perú, 1812-1814”, *Elecciones*, n. 17 (2018): 143-73.
- Requejo Pagés, Juan Luis. “Amnistía e indulto en el constitucionalismo histórico español”. *Revista Electrónica de Historia Constitucional*, n.2, (2001): 81-106
- Rodríguez O., Jaime E. *La revolución política en la época de independencia: El Reino de Quito, 1808-1822*. Quito: Corporación Editora Nacional / UASB-E, 2007.
- . “Las instituciones gaditanas en Nueva España, 1812-1824”. En *Las nuevas naciones España y México 1800-1850*. Madrid-España: Fundación Mapfre, 2001.
- Sánchez Rodríguez, Susy. “Apelando a la caridad y a las diversiones. Una aproximación a la reconstrucción de la ciudad de Lima después del terremoto de 1746”. En *Open Edition Books*, 2003. <https://books.openedition.org/ifea/4485>.
- Sevilla Naranjo, Alexandra Rosita. «“Al mejor servicio del rey”. Indígenas realistas en la contrarrevolución quiteña, 1809-1814», *Procesos: Revista ecuatoriana de Historia*, n. 43 (2016): 94-118.
- . *Fidelismo, realismo y contrarrevolución en la Audiencia de Quito*. Quito: FLACSO/Ecuador - IPGH, 2019.
- . “Vecinas y ciudadanas La condición político-jurídica de las mujeres quiteñas en el tránsito de la Colonia a la República”, 2018.
- Soasti Toscano, Guadalupe. «La República en el período de 1810-1812. Una mirada de la “independencia” de Quito». *Afese*, (2009): 69-87.
- Tabla Ducasse, Javier Ortiz de la. “La población ecuatoriana en la época colonial: cuestiones y cálculos”. *Anuario de estudios americanos*, n.37, (1980): 235-275
- Terán, Rosemarie. *Los proyectos del imperio Borbónico en la Real Audiencia de Quito*. Quito: Abya-Yala, 1988.
- Velasco, Juan. *Historia de Quito en la América meridional Tomo III y parte III, que comprende la historia moderna*. Guayaquil: Publicaciones Educativas Ariel, 1946